



Universidad Nacional Mayor de San Marcos

Universidad del Perú. Decana de América

Dirección General de Estudios de Posgrado
Facultad de Derecho y Ciencia Política
Unidad de Posgrado

La protección jurídico-penal del derecho de sufragio en el Perú

TESIS

Para optar el Grado Académico de Magíster en Derecho con
mención en Ciencias Penales

AUTOR

Silfredo Jorge HUGO VIZCARDO

Lima, Perú

2007



Reconocimiento - No Comercial - Compartir Igual - Sin restricciones adicionales

<https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/>

Usted puede distribuir, remezclar, retocar, y crear a partir del documento original de modo no comercial, siempre y cuando se dé crédito al autor del documento y se licencien las nuevas creaciones bajo las mismas condiciones. No se permite aplicar términos legales o medidas tecnológicas que restrinjan legalmente a otros a hacer cualquier cosa que permita esta licencia.

Referencia bibliográfica

Hugo, S. (2007). *La protección jurídico-penal del derecho de sufragio en el Perú*. Tesis para optar grado de Magíster en Derecho con mención en Ciencias Penales. Unidad de Posgrado, Facultad de Derecho y Ciencia Política, Universidad Nacional Mayor de San Marcos, Lima, Perú.

DEDICATORIA

A MIS MIJOS

ALEXANDER Y

MARILY

INDICE

PRESENTACIÓN:

DEDICATORIA

CAPITULO I

PLANTEAMIENTO METODOLÓGICO

1. MOTIVACIÓN EURÍSTICA: DESCRIPCIÓN DE LA REALIDAD PROBLEMÁTICA

2. OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN

3.1. GENERALES

3.2. ESPECÍFICOS

3. JUSTIFICACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN

4. FACTIBILIDAD DEL PROYECTO

5. INVESTIGACIONES PREEXISTENTES

6. MARCO TEÓRICO

7. MARCO JURÍDICO POSITIVO

8. DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN

9. FORMULACIÓN DEL PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN

10. FORMULACIÓN DE HIPÓTESIS

10.1. PRIMERA HIPÓTESIS

10.2. SEGUNDA HIPÓTESIS

11. IDENTIFICACIÓN DE VARIABLES

11.1. VARIABLES INDEPENDIENTES

11.2. VARIABLES CONCURRENTES

11.3. VARIABLES DEPENDIENTES

12. DELIMITACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN

13. MÉTODOS Y TÉCNICAS OPERATIVAS DE ACOPIO

DE INFORMACIÓN

13.1. MÉTODOS

13.2. TÉCNICAS

14. PROCESAMIENTO E INTERPRETACIÓN DE DATOS ACUMULADOS

CAPITULO II

MARCO TEÓRICO CONCEPTUAL

DELITOS CONTRA EL DERECHO DE SUFRAGIO EN EL PERÚ

I) FUNDAMENTOS GENERALES

- 1.- Ámbito conceptual: Fundamentación del injusto
- 2.- Naturaleza jurídica
- 3.- El bien jurídico
- 4.- Denominación
- 5.- Ámbito de protección penal
- 6.- Sistemas normativos en la legislación comparada
- 7.- Marco normativo nacional
- 8.- Clasificación típica

II) DELITOS ELECTORALES EN LA LEGISLACIÓN PERUANA

1.- Marco Normativo

2.- Bien jurídico Protegido

3.- Sujetos de la acción

4.- Clasificación

5.- Actos destinados a perturbar o impedir

la constitución del registro de electores,
el padrón general de votantes y el registro
de organizaciones políticas y su funcionamiento

5.1) Delitos contra la inscripción electoral

5.1.1) Atentado contra la formación de Registro electoral

5.1.2) Falsedad en el aporte de documentos y datos

5.1.3) Falsificación y adulteración de documentos

destinados a la inscripción electoral

5.1.4) Duplicidad de inscripciones

5.1.5) Impedimento y obstrucción de la inscripción

5.1.6) Abuso de autoridad de registrador

5.1.7) Falsificación, alteración y desaparición de inscripciones

5.1.8) Omisión maliciosa de la depuración

5.1.9) Sustracción de material electoral

5.1.10) Inscripción fuera del local del registro electoral

5.1.11) Retención o desaparición de material electoral

por empleados postales

5.1.12) Responsabilidad del funcionario del registro electoral

5.2) Delitos contra la inscripción de agrupaciones

políticas y/o candidatos

5.2.1) Coacción por funcionario o servidor público

para suscribir lista de adherentes

6) Acciones destinadas a perturbar o impedir

el acto de sufragio

6.1) Turbación violenta de proceso electoral

6.2) Impedimento o turbación violenta del derecho de sufragio

6.3) Impedimento o perturbación de reuniones políticas

6.4) Realización indebida de propaganda electoral

6.5) Sufragio y participación indebida en actos políticos

de miembros de las Fuerzas Armadas y Policía Nacional

6.6) Portar armas durante el acto electoral

6.7) Realizar actividades políticas en zonas y plazos prohibidos

6.8) Venta de bebidas alcohólicas o realización de

espectáculos prohibidos

6.9) Atentado contra derechos laborales por funcionario o

servidor público

6.10) Destrucción, impedimento u obstaculización de

propaganda electoral

6.11) Incumplimiento de remisión de material electoral por parte

de presidente de mesa de sufragio

6.12) Detención o retardo del transporte de material

electoral o comunicaciones oficiales

6.13) Violación del secreto de comunicaciones oficiales

y ánforas electorales

6.14) Omisión injustificada a integrar jurado electoral

- 6.15) Omisión injustificada a instalación de mesa de sufragio
- 6.16) Impedimento de designación para integrar jurado electoral
- 6.17) Suplantación o integración ilegal de jurado electoral
- 6.18) Coacción o instigación para suplantar a miembro
de jurado electoral
- 6.19) Actos de falsificación o destrucción de material electoral
tendientes a dificultar la elección o falsear su resultado
- 6.20) Sustracción, destrucción o sustitución de cédulas sufragadas
- 6.21) Recepción o rechazo indebido de voto
- 6.22) Recepción o rechazo injustificado de voto
- 6.23) Votación fraudulenta
- 6.24) Violación del secreto del voto
- 6.25) Despojo o retención indebida de documento de votación
- 6.26) Agravante por calidad personal del autor
- 7) Actos destinados a impedir, perturbar o distorsionar
el resultado electoral:
 - 7.1) Alteración del resultado electoral
 - 7.2) Sustracción, destrucción o sustitución de ánforas electorales
- 8) Consecuencias derivadas de la omisión de la
obligatoriedad del sufragio
 - 8.1) Omisión a exigencia de presentación de documento
de identidad con constancia de sufragio por parte
de funcionarios y servidores públicos

CAPITULO III

INVESTIGACIÓN REALIZADA

1. EL PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN

2. HIPÓTESIS FORMULADAS

2.1. PRIMERA HIPÓTESIS

2.2. SEGUNDA HIPÓTESIS

3. IDENTIFICACIÓN DE VARIABLES

3.1. PRIMERA HIPÓTESIS: VARIABLES INDEPENDIENTES

a) De índole jurídico-positiva

OPERACIÓN REALIZADA:

b): De índole político-criminal

OPERACIÓN REALIZADA:

3.2. SEGUNDA HIPÓTESIS: VARIABLES CONCURRENTES

a) Falta de conciencia política generalizada en la ciudadanía

OPERACIÓN REALIZADA:

b) Nivel de cultura política y jurídica de la mayoría de legisladores

OPERACIÓN REALIZADA:

c) Conflicto de intereses de los grupos que integran el Congreso

OPERACIÓN REALIZADA:

d) Cultura del fraude electoral

OPERACIÓN REALIZADA:

3.3. VARIABLES DEPENDIENTES; 1ra y 2da HIPÓTESIS

a) Vulneración del derecho del elector

OPERACIÓN REALIZADA:

b) Vulneración del sistema democrático

OPERACIÓN REALIZADA:

CAPITULO IV

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

1. CONCLUSIONES

2. RECOMENDACIONES

BIBLIOGRAFÍA

ANEXOS

PRESENTACIÓN

Un Sistema Electoral en un Estado democrático debe garantizar como elemento nuclear del mismo, la libre expresión de la soberanía popular, y esta libertad genérica se rodea hoy día, de otro conjunto de libertades encaminadas a salvaguardar la opción entre diversos términos de una alternativa verdaderamente plural. A hacer efectiva dicha pluralidad y su fecunda concurrencia en la conquista del electorado se dirigen un conjunto de previsiones de muy diversa naturaleza entre las que es preciso incluir la tipificación, como delitos electorales, de un conjunto de conductas atentatorias contra la libertad y secreto del voto, contra la libre opción por una u otra candidatura por parte del elector, y en definitiva, contra la pureza de los comicios.

Como ya advirtiera Giménez Fernández (1977, p. 171), la práctica demuestra que no bastan las garantías de carácter preventivo para evitar la ejecución de actos encaminados a falsear el resultado de las luchas electorales; de aquí la necesidad de que las leyes electorales dediquen uno de sus capítulos a la tipificación de aquellas conductas que han de ser enjuiciadas como delitos electorales, con la concreción de las penas que les corresponden.

En definitiva, pues, delitos electorales son aquellas conductas, acciones, incluso omisiones, atentatorias contra los principios que han de regir un Sistema Electoral de un Estado democrático, y que por su carácter particular, son definidas y castigadas, por lo general, no en el Código Penal, sino en la propia Ley Electoral.

Con relación a este último punto, Giménez Fernández (loc. cit.) advertía que los delitos electorales no podían ser equiparados a los comunes que tipifica el Código Penal, pues con ello se incurría en el error de castigarlos con excesiva severidad, lo que a su vez origina la lenidad de los encargados de aplicar la sanción. Aunque han existido históricamente supuestos en los que ha sido el Código Penal el texto normativo que tipificaba los delitos electorales, guardando silencio en torno a ellos la Ley Electoral, lo cierto es que hoy puede considerarse como pauta generalizada la de que son las leyes electorales las que contemplan de modo preciso las conductas que deben ser tipificadas como delitos electorales.

Con la tipificación de una serie de conductas lesivas, se trata de garantizar el pacífico y libre ejercicio del derecho de voto, el secreto del mismo, la autenticidad y legalidad del procedimiento y, en definitiva, la pureza de todo el proceso electoral.

Es evidente que dentro de las conductas delictivas cabe efectuar varios distinguos, pues no es igual la omisión del voto o el incumplimiento de cualquiera de las disposiciones encaminadas a garantizar el normal desarrollo de los distintos actos preparatorios de los comicios, que aquellos actos dolosos dirigidos a coartar la libertad del elector mediante la violencia o la captación, o falsear los resultados electorales. Por ello mismo, siendo diferente la modalidad del delito, también lo debe ser la sanción, que en los

primeros supuestos tiende a ser pecuniaria, mientras que en los segundos se orienta hacia la privación de la libertad.

Es preciso asimismo efectuar una última diferenciación, según que la conducta tipificada provenga de un funcionario público o de un particular, pues parece lógico que en el primer supuesto la sanción resulte acentuada, debiéndose incluir al respecto, específicas circunstancias agravantes.

En atención a ello, las acciones, tanto de coacción, violencia o fraude, que atenten contra el proceso del acto electoral (sea como manifestación individual o como expresión colectiva de la voluntad popular), deben estar tipificados en la ley penal. Considerando al respecto, que por su naturaleza y especialidad, deberían conformar un sistema normativo propio, interconectado y nutrido por la ley penal fundamental (Código Penal), pero legislado en la ley electoral, para lo que incluso se propugna la necesidad, en nuestro medio, de un Código Electoral.

En cuanto a su contenido, la protección de la libertad del sufragio no puede reducirse a vejaciones en la persona del elector, sino extenderse hasta la tutela de todas las garantías que deben complementarse en el momento en que se materializa la voluntad colectiva. Pero no bastaría la protección de la libertad electoral, dado el supuesto que no estuvieran tutelados al mismo tiempo todos los caracteres esenciales del sufragio, en su concepción doctrinal contemporánea, los avances tecnológicos y la realidad nacional. Así, junto a la libertad individual o colectiva de los electores, deben protegerse también la sinceridad, la individualidad y el secreto del sufragio.

Otros elementos que no deben ser perdidos de vista, son los que corresponden al incremento, cada vez más acentuado, del uso de los medios técnicos modernos y en especial la informática, que adicionan nuevas modalidades de manipulación o fraude, que pueden perjudicar la esencia del acto electoral, ya no con la violencia propia de antaño, donde en tropelía y bajo la motivación del "pisco y la butifarra", se atacaba impunemente los locales de votación o cuando el ejército tomaba las ánforas y todos los "cachaquitos", en su cuartel, llenaban nuevamente las cédulas para inclinar la balanza al dictador candidato.

Ahora es diferente la posibilidad de la manipulación de la voluntad popular, es posible el fraude computacional, ello debido a la dependencia cada vez más notoria del uso de las computadoras para vaciar los resultados parciales de la elección, para que sea el ordenador el que proporcione los resultados finales. Ante ello el atentado puede presentarse manipulando dichos ordenadores, que por más secreta que sea su locación, no deja de existir el factor humano de los operadores, que motivados por la corrupción, pueden acceder, a veces de manera indetectable, para falsear el resultado electoral.

Ante ello, nos dice Tiedemann (1999, p. 344), que la tarea del derecho no es la de quedarse atado a viejas categorías teóricas que nada sirven, sino más bien de adaptarse y proveerse de nuevas formas de prevención y protección a la sociedad. El derecho penal debe también prevenir la comisión de este tipo de hechos que de ninguna manera pueden ser entendidos como errores involuntarios ya que son realizados por personas que generalmente están familiarizadas y se encuentran especializadas en el trabajo con computadoras y que fácilmente pueden conocer como entrar en los archivos de datos de cualquier individuo o institución.

El derecho penal debe resguardar los intereses de la sociedad, evitando manipulaciones computarizadas habituales o no basadas en conocimiento de los objetos, programas, así como de algunas informaciones que extiendan y hagan imposible la detección de estos ilícitos (el desarrollo actual y moderno nos ha traído avances importantes para la humanidad, pero es penoso a su vez que vengan acompañados de hechos delictivos no deseados) (loc. cit).

Así, nuestra normatividad penal en materia electoral ha sufrido un estancamiento histórico, no ha evolucionado con la rapidez del desarrollo contemporáneo de los actos delictivos tendientes a materializar la coacción y el fraude tendientes a la frustración o distorsión de la libertad del sufragio. Nuestro ordenamiento jurídico debe prepararse normativamente para afrontar estos tipos de "nuevos" delitos de "avanzada", sobre todo en el ámbito informático, máxime ahora que se postula la utilización del voto electrónico, requiriéndose una respuesta normativa.

En igual sentido, la nefasta experiencia vivida en la década de la dictadura fuji-montesinista, ha denotado la debilidad de nuestro sistema normativo para enfrentar toda la vasta gama de delitos que con "tanta imaginación" ("imaginación maquiavélica" diríamos), supieron implementar (constituyendo a nuestro sistema, como "fuente" y "exportador" de nuevas maneras y modos de torcer la voluntad ciudadana). Tales como los actos de corrupción, compra de conciencias, compra de líneas editoriales, connivencia, chantaje o extorsión para doblegar voluntades, dádivas (como el regalo de comida, ropa donada y en algunos casos joyas y dinero o prebendas políticas), manipulación psico-social, falsificación de firmas, uso de los recursos del Estado y la fuerza pública, intervencionismo de las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional,

impedimento del uso de señales abiertas de televisión, manipulación de las noticias, manipulación de encuestas, homicidios y asesinatos, etc.

Por todo ello, urge una revisión y toma de conciencia, que derive en la implementación de un nuevo cuerpo normativo electoral, que contenga in extensu la tipificación de todos los actos vulnerantes del fundamental derecho a la libertad de sufragio.

CAPÍTULO I

PLANTEAMIENTO METODOLÓGICO

1. MOTIVACIÓN HEURÍSTICA

Como ya ha quedado expresado en la presentación de esta investigación, el Sistema Electoral en un Estado democrático, tiene como misión fundamental garantizar como elemento nuclear del mismo, la libre expresión de la soberanía popular, y esta libertad genérica se rodea hoy día, de otro conjunto de libertades encaminadas a salvaguardar la opción entre diversos términos de una alternativa verdaderamente plural.

A hacer efectiva dicha pluralidad y su fecunda concurrencia en la conquista del electorado se dirigen un conjunto de previsiones de muy diversa naturaleza entre las que es preciso incluir la tipificación, como delitos electorales, de un conjunto de conductas atentatorias contra la libertad y secreto del voto, contra la libre opción por una u otra candidatura por parte del elector, y en definitiva, contra la pureza de los comicios.

La realidad contemporánea y la práctica electoral en nuestro país, nos demuestra, lamentablemente, que no bastan las garantías de carácter preventivo para evitar la ejecución de actos encaminados a falsear el resultado de las luchas electorales; de aquí la necesidad de que las leyes electorales que se postulen en nuestro sistema, dediquen uno de sus capítulos a la tipificación de aquellas conductas que han de ser enjuiciadas como delitos electorales, con la concreción de las penas que les correspondan.

La experiencia personal en el campo de la administración de justicia electoral y la realidad jurídico-social actual, nos muestra un preocupante alto grado de desprotección del fundamental derecho de sufragio, que constitucionalmente se representa por el derecho del ciudadano a elegir y ser elegido en cargos de representación popular, siendo necesario por ello, a nuestro criterio personal, buscar los factores y causas, de tipo social, normativo entre otros, que determinan los defectos que originan una inadecuada protección del sistema de control penal, a un bien jurídico tan fundamental como el ejercicio de los derechos políticos, que fundamentan el sistema democrático de gobierno que nos rige, para de esta manera ofrecer aportes que puedan a futuro ser tomados en cuenta para posibles modificaciones legislativas, que complementen el universo normativo penal protector de tan preciado derecho.

2. OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN

2.1. OBJETIVO GENERAL

Demostrar que en nuestro país no existe una criminalización integral de las conductas lesivas al derecho de sufragio, debido al deficiente modelo político criminal implementado por el Estado.

2.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS

2.2.1. Demostrar que la inadecuada protección del derecho de sufragio en el Perú se debe a las siguientes circunstancias:

- a) Falta de conciencia política generalizada en la ciudadanía
- b) Falta de un adecuado nivel de cultura política y jurídica de la mayoría de legisladores
- c) Conflicto de intereses político partidarios entre grupos parlamentarios que integran el Congreso de la República
- d) Cultura del fraude electoral

2.2.2. Proponer modificaciones legislativas, que complementen el universo típico de las diferentes conductas lesivas, que vulneran el derecho de sufragio que actualmente no han sido materia de criminalización.

3. JUSTIFICACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN

La investigación se justifica porque evidencia una realidad social de afectación a un derecho tan fundamental como el derecho de sufragio, que se constituye socialmente en un bien jurídico de necesaria tutela penal. Afectación que basa sus causas, primordialmente en la desidia del ciudadano expresada en una evidente falta de conciencia política generalizada, en un inadecuado nivel de cultura política y jurídica de la mayoría de legisladores, el eventuales conflictos de intereses político partidarios entres grupos parlamentarios que integran el Congreso de la República y en una arraigada cultura del fraude electoral en nuestro país.

Esta realidad jurídico-social actual, nos muestra un preocupante grado de desprotección del derecho de sufragio, siendo necesario por ello, buscar los factores y causas, de tipo social, normativo entre otros, que determinan los defectos que originan una inadecuada protección del sistema de control penal, a un bien jurídico tan fundamental como el ejercicio de los derechos políticos, que fundamentan el sistema democrático de gobierno que nos rige, para de esta manera ofrecer aportes que puedan a futuro ser tomados en cuenta para posibles modificaciones legislativas, que complementen el universo normativo penal protector de tan preciado derecho.

En tal sentido, nos mueve el afán de contribuir al afianzamiento del Sistema democrático en nuestro país, el mismo que debe tener como misión fundamental, garantizar la libre expresión de la soberanía popular, ya que la realidad contemporánea y

la práctica electoral en nuestro país, nos muestran el lamentablemente panorama, de que no bastan las garantías de carácter preventivo para evitar la ejecución de actos encaminados a falsear el resultado de las luchas electorales; de aquí la necesidad de que las leyes electorales que se postulen en nuestro sistema, dediquen uno de sus capítulos a la tipificación de aquellas conductas que han de ser enjuiciadas como delitos electorales, con la concreción de las penas que les correspondan.

4. FACTIBILIDAD DEL PROYECTO

La viabilidad de ejecución de la investigación es perfectamente posible en atención a lo siguiente:

- a) El investigador ha sido funcionario del Registro Electoral del Perú, e incluso Secretario General del Jurado Nacional de Elecciones, por lo que cuenta con la experiencia y el conocimiento del caso, así como posibilidades de acceso a la información interna del Jurado Nacional de Elecciones.
- b) El investigador, en su condición de docente universitario, conoce la doctrina y la legislación comparada fundamental para el desarrollo del tema.
- c) El investigador cuenta con el apoyo de profesionales y estudiantes de derecho, que conforman el Instituto Pro Derecho de Investigaciones Jurídicas.
- d) El investigador cuenta con el apoyo de profesionales que contribuirán al aporte multidisciplinario necesario para los fines de la investigación.

e) El acceso a las informaciones y muestras, tanto en las entidades electorales, como en la Fiscalía y el Poder Judicial, son perfectamente posibles.

f) El investigador tiene suficientemente cubierto el presupuesto económico que demanda la investigación, el mismo que asciende a la suma de dos mil nuevos soles (S/ 2,000.00).

5. INVESTIGACIONES PREEXISTENTES

No existen trabajos de investigación jurídico social relacionados con el tema de nuestro proyecto.

Si es posible encontrar algunos trabajos de naturaleza descriptiva, en los que se realiza un estudio dogmático de interpretación, de los tipos penales relacionados con la protección del derecho de sufragio, básicamente centralizados en el estudio del Código penal, en lo referente a los “delitos contra la voluntad popular”, ellos son:

a. “Delitos Electorales”....Bolívar Arteaga, Flora Adelaida, Editado por el Jurado Nacional de Elecciones, Lima 2002.

b. “Manual de Derecho Penal”...Bramont Arias Torres, Luis Alberto, 4ta Edi., Editorial San Marcos, Lima 1998.

c. “Delitos Electorales”....Hugo Vizcardo, Silfredo Jorge, Pro derecho Instituto de Investigaciones Jurídicas, Lima 2003.

d. "Procedimiento Registral Electoral y Delitos Contra la Inscripción Electoral"....Hugo Vizcardo, Silfredo Jorge, Colección de Manuales "Hermes", Lima 1990.

6. MARCO TEÓRICO

La investigación se desarrolla bajo el presupuesto de los conocimientos aportados por:

- a) Teoría del Estado
- b) Teoría del delito
- c) Teoría de la pena
- d) Ciencia política
- e) Victimología
- f) Sociología
- g) Criminología

7. MARCO JURÍDICO POSITIVO

- a) Constitución Política del Perú.

Artículos: 30 al 35, que consagran los derechos políticos y los deberes de los ciudadanos.

b) Código penal (D. Legislativo No 635, de 3 de abril de 1991).

Artículos: 354 al 360, en los que se tipifican los delitos “contra la voluntad popular” y se establecen sus consecuencias jurídicas.

c) Ley Orgánica de Elecciones (Ley No 26859, de 29 de setiembre de 1996)

Artículos: 382 al 393, en los que se tipifican y establecen los delitos, sanciones y procedimientos judiciales por actos contra el derecho de sufragio.

8. DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN

Por los fundamentos expuestos en la presentación y en la motivación eurística de nuestro trabajo, se puede apreciar que se trata de una investigación de tipo jurídico social, por cuanto pretende demostrar la falta de una política criminal integral del Estado tendiente a proteger suficientemente el derecho de sufragio como bien jurídico fundamental en nuestro país.

En tal sentido, nuestro trabajo se constituye en una investigación de tipo causal explicativa, con carácter empírico, descriptivo e inductivo.

9. FORMULACION DEL PROBLEMA DE INVESTIGACION

¿ Qué factores determinan y que condiciones contribuyen a qué no exista en el Perú una criminalización integral de las conductas lesivas al derecho de sufragio ?

10. FORMULACION DE HIPOTESIS

10.1. HIPÓTESIS PRINCIPAL: denominada primera hipótesis

H – 1.- Los factores que probablemente determinan que no exista en el Perú una criminalización integral de las conductas lesivas al derecho de sufragio, son de naturaleza jurídico-positiva como político criminal:

a) Jurídico-positivo: Por cuanto la normatividad vigente evidencia un sistema insuficiente de protección jurídico penal, que no concretiza típicamente todos los supuestos de afectación del derecho de sufragio.

b) Político criminal: Por cuanto la realidad evidencia una flagrante omisión del Estado, en la formulación de una estrategia integral y oportuna en relación a la lucha contra las conductas que atentan contra el derecho de sufragio.

10.2. SEGUNDA HIPÓTESIS

H – 2.- Las condiciones que contribuyen a que no exista en el Perú una criminalización integral de las conductas lesivas al derecho de sufragio, consisten probablemente en la falta de conciencia política generalizada en la ciudadanía, un adecuado nivel de cultura política y jurídica de la mayoría de legisladores, al conflicto de intereses político partidarios entre grupos parlamentarios que integran el Congreso de la República y a una arraigada cultura del fraude electoral.

11. IDENTIFICACIÓN DE VARIABLES

11.1. PRIMERA HIPÓTESIS: VARIABLES INDEPENDIENTES

a) De índole jurídico-positiva: La normatividad jurídico-penal vigente no tutela integralmente el derecho de sufragio: El sistema normativo punitivo presenta vacíos al respecto de dicha protección penal.

INDICADORES: - Constitución Política: 1979, 1993

- Código penal de 1991 y también los de 1924 y 1863.
- Ley Orgánica Electoral: Ley No 26859 (29 setiembre 1997)
- D. Ley 14207: Registro Electoral del Perú (25 setiembre 1962)
- D. Ley 14250: Elecciones Políticas (05 diciembre 1962)

b): De índole político-criminal: Omisión evidente del Estado en la formulación de una estrategia integral, en la lucha contra la criminalidad que atenta contra el derecho de sufragio.

INDICADORES: - Documentos del Legislativo y del Ejecutivo pertinentes al caso

- Calidad de los proyectos de Leyes punitivas en materia electoral
- Dicho del ciudadano entrevistado sobre la tutela penal del derecho de sufragio en el país
- Opinión de expertos sobre la política estatal en materia electoral
- Planes de gobierno en materia electoral

11.2. SEGUNDA HIPÓTESIS: VARIABLES CONCURRENTES

a) Falta de conciencia política generalizada en la ciudadanía: Gran parte del universo de la población electoral del Perú, hábil para ejercer su derecho al sufragio, carece aún de un adecuado nivel de conciencia en relación a la identificación de sus derechos y obligaciones políticas. La mayoría es indiferente a la necesidad de asegurar debidamente el derecho del electoral, como fundamento de la transparencia y legitimidad del proceso electoral.

INDICADORES: - Datos sociométricos sobre el nivel de conciencia política de las personas que conforman la Unidad de Análisis.

- Fraudes electorales perpetrados en los procesos electorales durante el periodo que comprende la investigación
- Quejas o reclamos por fraude electoral o atentados contra el derecho

del elector ante los organismos electorales, por parte de la ciudadanía organizada o no

- Denuncias ante la Fiscalía por delitos contra la voluntad popular
- Información de medios de comunicación sobre fraude electoral y atentados contra el derecho de sufragio y su escasa repercusión en la ciudadanía
- Dicho del entrevistado
- Informes de la Defensoría del pueblo sobre procesos electorales realizados
- Informes de instituciones electorales especializadas en relación a procesos electorales realizados en el lapso que comprende la investigación

b) Nivel de cultura política y jurídica de la mayoría de legisladores: La mayoría de legisladores carecen de suficientes conocimiento sobre Ciencia Política, sobre el derecho de sufragio como derecho político fundamental, así como de adecuados conocimientos doctrinarios y de legislación comparada, sobre delitos que atentan contra el derecho de sufragio.

INDICADORES: - Actas de Debates sobre proyectos inherentes a la formulación de la ley electoral

- Opinión de expertos en Ciencia Política y Derecho Electoral
- Dicho de los congresistas entrevistados
- Legislación electoral de: Argentina, Ecuador, Colombia, Costa Rica, Alemania, España, Portugal

- Informes de instituciones nacionales especializadas en materia electoral sobre la cultura política y jurídica de los congresistas
- Datos sobre la consulta por los congresistas de obras sobre Ciencia Política, en especial en materia electoral, de la Biblioteca del Congreso

c) Conflicto de intereses de los grupos que integran el Congreso: Los intereses de diversa índole, como político partidario, económico, cultural, entre otros, dificultan la adopción de planteamientos coherentes para tutelar integralmente el derecho de sufragio.

INDICADORES: - Informes de instituciones especializadas en materia electoral, sobre las pugnas que se manifiestan en el interior del Congreso, relacionadas a los disímiles intereses que presentan los grupos políticos al tratar el tema electoral.

- Informes o denuncias a través de los medios de comunicación social sobre los enfrentamientos de grupos de congresistas
- Artículos de especialistas sobre la división de grupos en el Congreso, en función de los intereses de los congresistas.
- Opinión de expertos sobre las pugnas entre los grupos parlamentarios
- Dicho de los congresistas entrevistados
- Dicho de los electores entrevistados

d) Cultura del fraude electoral: Costumbre arraigada en nuestro sistema político-social, que evidencia el menosprecio a la libre voluntad ciudadana en el ejercicio de sus derechos políticos: en este sentido, se ha constituido en tradicional en el Perú, que los

contendores en el proceso electoral, generalmente tiendan a burlar la voluntad popular en el afán de ganar las elecciones.

INDICADORES: - Libros, artículos y ensayos sobre fraude electoral, perpetrados en el Perú

- Datos sobre anulación de elecciones por fraude electoral
- Publicaciones periodísticas sobre fraudes electorales
- Documentos de las Comisiones Investigadoras del Congreso sobre fraudes electorales
- Dicho de los congresistas entrevistados sobre fraudes electorales
- Dicho de los electores entrevistados sobre fraudes electorales
- Dicho de los líderes y representantes políticos entrevistados sobre la cultura del fraude electoral en el Perú
- Informes de instituciones electorales especializadas sobre fraude electoral en el Perú
- Informes de la Defensoría del Pueblo sobre fraude electoral

11.3. VARIABLES PENDIENTES; 1ra y 2da HIPÓTESIS

a) Vulneración del derecho del elector: El derecho de sufragio libre y auténtico de muchos ciudadanos peruanos, ha sido lesionado mediante diversas modalidades de acción, tanto coercitivas como fraudulentas.

INDICADORES: - Casos que se presentan en los procesos electorales como:
sustitución de ánforas, suplantación del elector, destrucción o

sustitución de cédulas de sufragio, alteración o sustitución del acta de escrutinio, presión o soborno del elector para que vote por un determinado candidato, etc.

- Denuncias y pedidos de nulidad ante los órganos electorales, invocando actos contrarios al libre derecho de sufragio, como coerciones, fraudes, etc.
- Denuncias ante la Fiscalía por delitos contra la voluntad popular
- Procesos judiciales terminados y en trámite por delitos contra la voluntad popular
- Publicaciones e informes de medios de comunicación, dando cuenta de irregularidades y denuncias durante el proceso electoral.
- Informes de la Defensoría del pueblo
- Informes de instituciones electorales especializadas
- Dicho del elector entrevistado

b) Vulneración del sistema democrático: Privación de autenticidad democrática al sistema representativo de gobierno de nuestro país, que de esta manera se ve seriamente deslegitimado.

INDICADORES: - Dicho de los entrevistados

- Quejas y reclamos ante los Organismos electorales relacionados a actos de coerción, fraude y otros, que limitan o vulneran el derecho del elector durante el proceso electoral
- Denuncias ante la Fiscalía por delitos contra la voluntad popular
- Procesos judiciales, en trámite o terminados, por delitos contra la voluntad popular

- Procesos de nulidad de elecciones y nulidades declaradas
- Denuncias periodísticas relacionadas a actos de coerción, fraude y otros, que limitan o vulneran el derecho del elector durante el proceso electoral
- Informes de la Defensoría del pueblo sobre irregularidades generadas en el desarrollo del proceso electoral
- Informes de instituciones electorales especializadas sobre el proceso electoral y sus incidencias.

12. DELIMITACION DE LA INVESTIGACION

TEMPORAL.- Años 2004 al 2006

ESPACIAL .- Población e Instituciones Electorales y judiciales con sede en Lima: Jurado Nacional de Elecciones (JNE), Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE), Registro Nacional de Identidad y Estado Civil (RENIEC), Congreso de la República, Poder Judicial, Ministerio Público, Organizaciones No Gubernamentales (ONG) nacionales e internacionales, especializadas en materia electoral.

CUANTITATIVO.- a) Muestra poblacional

Unidad de Análisis: 800 ciudadanos.

b) Estudio documental

100 Expedientes terminados y en trámite sobre impugnaciones y nulidad de elecciones.

100 Expedientes judiciales terminados y en trámite sobre delitos electorales

13. MÉTODOS Y TÉCNICAS OPERATIVAS DE ACOPIO DE INFORMACIÓN

13.1. MÉTODOS

Se aplicarán los métodos generales de investigación: Inductivo, deductivo, analítico, de síntesis, contrastación, histórico.

13.2. TÉCNICAS

Se utilizarán las siguientes técnicas para el acopio de datos:

a) Estudio documental: Denuncias, sentencias, resoluciones administrativas de nulidad de elecciones, etc.

b) Fichado: Para sintetizar los datos tomados de los expedientes judiciales.

c) Entrevistas programadas: Mediante cuestionarios cerrados y abiertos.

14. PROCESAMIENTO E INTERPRETACIÓN DE DATOS

Culminada la etapa de acopio de datos, procederemos a su procesamiento, discriminando del universo obtenido, los que sean verdaderamente válidos, confiables, conducentes y útiles en relación al tema de investigación.

Se procederá a una ordenación y clasificación técnica y cuidadosa de las muestras obtenidas. Esta clasificación se efectuará con estricta sujeción al problema que delimita la investigación, así como a las hipótesis, variables e indicadores que son objeto del proyecto.

De acuerdo a la naturaleza y fines del proyecto de investigación, para la interpretación correspondiente, utilizaremos los siguientes métodos:

- a) El método deductivo; que se empleará cuando sea necesario partir de una premisa o referente cognitivo de carácter general aplicable al caso concreto, y luego del juicio que expresa el significado de la muestra, realizar la inferencia respectiva para obtener la conclusión de menor extensión.
- b) El método inductivo; que se aplicará cada vez que sea necesario ascender de lo singular a lo particular y de allí a lo general.

- c) El método analítico; se empleará si es necesario identificar cada uno de los componentes del todo y conocer la importancia cognitiva de esos componentes y la interacción entre los mismos para obtener la conclusión al respecto.
- d) El método de la síntesis; se utilizará cuando sea necesario, y teniendo como referente el conocimiento analítico efectuado sobre el caso (la muestra), para obtener una conclusión-resumen al respecto.
- e) El método de la concordancia; se empleará si es necesario comparar dos o más variables y verificar las semejanzas esenciales o coincidentes entre ellas que sean importantes por conducentes hacia alguna conclusión.
- f) El método de la discordancia; se utilizará cuando, según la naturaleza de las variables, sea necesario destacar las diferencias o las contradicciones importantes entre ellas e inferir la conclusión pertinente.
- g) El método analógico; se empleará si se trata de relacionar una realidad conocida íntegramente con otra parcialmente conocida y entre ambas existan semejanzas esenciales pero también diferencias que, a su vez, conduzcan a una conclusión probable respecto del ente parcialmente conocido.
- h) El método histórico; si es el caso de reconstrucción del pasado que resulta importante para la ejecución del proyecto.

CAPITULO II

MARCO TEÓRICO CONCEPTUAL

DELITOS CONTRA EL DERECHO

DE SUFRAGIO EN EL PERÚ

I) FUNDAMENTOS GENERALES

1.- ÁMBITO CONCEPTUAL: FUNDAMENTACIÓN DEL INJUSTO

Desde la perspectiva histórica podemos apreciar que desde el momento mismo en que las formas democráticas permiten a los ciudadanos intervenir y participar en la organización política de los pueblos a través del ejercicio del voto, aparecen también conductas punibles en materia electoral, que restan sinceridad al sufragio y corrompen el régimen representativo.

Ya en Grecia merecía pena de muerte el ciudadano que votaba dos veces, castigándose con la misma pena al que lo vendía o compraba. En la estructura jurídica romana, surgen con autonomía destacada, en virtud de la lex Julia de ambitu, el delito de **ambitus** o ámbito para significar la venalidad en la obtención del voto para acceder a funciones públicas, y cuya penalidad, si bien al principio fue solamente pecuniaria, alcanzó después la privación de honores e incluso el destierro y la deportación. Aparece después en el derecho histórico, la figura del **broglio**, alusiva al fraude electoral y a la compra de votos. Pero ha sido en los Códigos franceses de Brumario (1795) y napoleónico (1810) donde obtienen sus fuentes los códigos modernos, ya **que instituyen en sus preceptos las tres formas específicas de suplantar la voluntad popular: la violencia o coerción, la corrupción y el fraude electoral que lesionan, respectivamente, la libertad, la honestidad y la sinceridad del sufragio.**

El código de Brumario (Arts. 616 y 617) establecía severas penas para los actos de violencia dirigidos contra la libertad de sufragio, sin ocuparse de proteger la sinceridad y la legalidad del mismo. El código napoleónico introdujo esta protección, reprimiendo también los actos de corrupción y falsedad del escrutinio; pero la evolución del sistema representativo ocasionó la insuficiencia de aquella legislación, debiéndose introducir la protección de la universalidad del sufragio en la ley del 15 de marzo de 1849 y el decreto del 2 de febrero de 1852.

El Código imperial alemán sí contemplaba en título especial los delitos contra el sufragio, erigiendo un grupo de infracciones cuya característica común consistía en "no querer permitir que la voluntad política de la comunidad llegue a manifestarse, con

relación a determinados asuntos, de una manera libre y genuina, de conformidad con el derecho público vigente".

El objeto inmediato de estos delitos era, en el Código imperial, de doble naturaleza: a) En cuanto se producía el ataque al libre ejercicio de los derechos de una asamblea legislativa o de un miembro de la misma; y, b) En cuanto se vulneraba "el ejercicio del derecho electoral o de sufragio de los ciudadanos del Estado alemán.

También se sancionaba en el acotado Código imperial ("Delitos que hacen relación al ejercicio de los derechos políticos"), los actos de violencia o las amenazas para impedir el voto, la falsificación de los resultados electorales y la compra del voto.

El sufragio es el punto de partida de todas las realizaciones democráticas, por medio de él se ejercita el derecho de los ciudadanos a participar en la vida del Estado. Es por ello que, como bien indica Luis Carlos Pérez, "el sufragio es hoy un atributo inherente a la soberanía popular (1957, p. 169).

A decir de Víctor García Toma, el sufragio representa una técnica y un procedimiento institucionalizado que permite a la ciudadanía comunicar y expresar de consuno una decisión, opinión u opción, tratándose en puridad, de una acción a través de la cual se alcanza propósitos comunes y que se representa a la vez como una función y como un derecho (en Primer Seminario de Coordinación Interinstitucional del Sistema Electoral, 1999, pgs. 19-22). Así, desde una visión de agudo componente sociológico, Víctor Andrés Belaunde señalaba: "El sufragio es presentista, pues refleja la coincidencia de voluntad en un momento específico. La llamada voluntad popular engendra una soberanía que podría llamarse la soberanía al instante. Poco tiempo después de una

elección, las corrientes de opinión empiezan a variar, lo que es más notorio después, cuando el respaldo popular amengua o crece de modo visible; siendo más frecuente lo primero" (loc. cit.).

Como función, el sufragio se cristaliza mediante el acto electoral, que a su vez obliga al Estado a dinamizar su actividad y ponerse en movimiento, creando al efecto un adecuado orden jurídico, que haga viable al ciudadano su intervención en la vida pública mediante el voto, reconociendo así su derecho inalienable.

Pero, modernamente concebido, el sufragio evidencia naturaleza de derecho ciudadano, por lo que no es completamente cierto que cuando éste sufraga "cumple una función". El ciudadano al sufragar ejercita un derecho, por lo que a su vez tiene derecho a que esa función se le otorgue por parte del Estado. Indicase así que tal función no es una manifestación individual, sino forma de acción del poder constituido.

El ciudadano no cumple, pues, en riguroso sentido, una mera función cuando vota en las elecciones, sino que hace uso de un derecho. Si fuera lo contrario, el fraude o la violencia delictivos no afectarían sino al Estado, que es el organismo titular de la función, cuando en realidad el perjuicio se vierte también contra el pueblo, en cuanto impide conocer su voluntad, o en cuanto la perturba; y contra el individuo elector, en cuanto burla o coarta su facultad de intervenir en los asuntos públicos.

Así, nuestra carta magna, establece como un derecho ciudadano, el "derecho de participación política", facultando al ciudadano a ser elegidos y elegir libremente a sus representantes y a participar en los asuntos públicos a través del referéndum, iniciativa legislativa, remoción de funcionarios públicos, revocación de autoridades elegidas,

rendición de cuentas, cabildos abiertos y juntas vecinales, correspondiendo a la ley regular y promover los mecanismos directos e indirectos de participación.

En tal sentido, señala García Toma (op. cit. p. 23), se trataría de la potestad o prerrogativa perteneciente al ciudadano, que le permitiría participar en la designación de las autoridades públicas y formar parte de la decisión de algún asunto de interés político u opinión sobre aspectos sustantivos de carácter administrativo o político.

Esta tesis surge de manera concomitante con la doctrina de la soberanía popular desarrollada en los siglos XVII y XVIII. En atención a ello, la soberanía se encontraría dividida en partes iguales entre todos los ciudadanos, que tendrían el derecho a contribuir con su voto en la expresión de la voluntad general. Así, cada individuo, al ser titular de una fracción de la soberanía del pueblo, tendría la atribución de colaborar en la organización del gobierno.

Dicha concepción puede, a su vez, subdividirse en dos planos, ya sea como parte de una prerrogativa natural o de una facultad nacida del derecho positivo. En referencia a lo primero, se le advierte como el ejercicio de una atribución originaria concebida por la razón y fundada en la naturaleza del hombre, que se objetivaza en la medida que el ordenamiento jurídico crea los mecanismos democráticos necesarios para hacerla viable (derecho positivo).

No siendo el Estado un fin en sí mismo, sino un medio necesario para conseguir fines de satisfacción social de necesidades y convivencia ordenada y en paz, el sufragio no es conquista que beneficia a aquel organismo, sino un recurso de las personas dirigido a la satisfacción de sus necesidades. Y como es recurso de origen constitucional,

reglamentado en la ley, tiene calidad jurídica, por lo que puede ser exigido y desde la perspectiva social del derecho punitivo, debe ser tutelado penalmente (al respecto Duguit decía que la función electoral persigue obtener la síntesis de las voluntades individuales, que es la voluntad nacional, y designar las personas que están encargadas de expresar esta voluntad)

Pero, más que origen de las instituciones republicanas, el sufragio es una creación de la misma democracia, que se evidencia tanto más puro cuanto más evolucionada sea ésta.

La autenticidad del sufragio no solamente implica un control de forma sobre la emisión y uso de cédulas o papeletas, sino que principalmente radica en que puedan exteriorizarse libremente las necesidades de las grandes mayorías nacionales. Sufragio auténticamente democrático es, pues, el que se ejerce para que el propio pueblo se constituya en conductor de sí mismo.

Todo lo dicho sostiene pues, la fundamentación de la represión de estos actos delictivos, denominados "delitos electorales", que evidencian el carácter de lo injusto en el atentado contra la libre determinación de la voluntad popular y el derecho al sufragio.

El fundamento de la penalidad de los delitos electorales deriva del principio de que es de sustancial importancia mantener la pureza del sufragio, que sirve de base a la forma representativa de gobierno sancionada por la Constitución, y reprimir todo lo que de cualquier manera puede contribuir a alterarla, dando al pueblo representantes que no sean los que él ha tenido la voluntad de elegir (Gonzalez Arzac, 1960, p. 233).

2.- NATURALEZA JURÍDICA

En la construcción teórica de los delitos políticos, surgió una fase, hoy definitivamente superada en el propio ámbito doctrinal, que pretendió caracterizar o delimitar la naturaleza de este tipo de infracciones bajo la contemplación meramente objetiva de los intereses o bienes jurídicos lesionados por aquéllas. Dentro de estas tesis objetivistas, no faltó quien ubicara a los delitos contra la libertad del sufragio, entre los atentados de carácter político (caso de la legislación italiana y francesa) y en razón de que se conceptuaban como delitos políticos, no sólo los que atacaban la existencia y organización del Estado, así como su funcionamiento, sino, además, los que lesionaban los derechos políticos de los ciudadanos derivados de los códigos fundamentales, y entre los cuales adquiere relevante importancia el atentado al libre ejercicio del sufragio, que al decir de Manzini, es el máximo de los derechos individuales políticos, en cuanto por medio de él, es llamado el particular a cooperar en la organización y gestiones de la cosa pública.

Así, la tesis doctrinaria actual y mayoritariamente aceptada, se pronuncia en el sentido de atribuir a estas modalidades delictivas, naturaleza común y no política (siendo esta también la postura asumida en nuestra legislación penal). El delito electoral no puede tener carácter de delito político ya que no reúne las características propias de tal.

El delito político está considerado dentro de una categoría privilegiada por la doctrina y la legislación, por cuanto constituye una especie de delitos que (si bien son penados porque alteran la paz de la sociedad), no se advierte en ellos la naturaleza inmoral de los delitos comunes, ya que pueden ser cometidos por móviles altruistas, con fines éticamente superiores (en tal sentido, indica Quintano Ripollés, se atenta contra un

orden localmente predeterminado en un cierto país o nación, por lo que la delincuencia política es nacional, y por lo mismo inocua en otro país, donde el delincuente no ofende con su actividad e ideología las instituciones dominantes, 1953, p. 278).

El delincuente político social, manifiesta Roy Freyre, es el que comete un delito inspirado en un móvil político o de interés colectivo; así lo dice el artículo 13 del proyecto Ferri de 1921, que ha servido de fuente a nuestra legislación. Está inspirado por un móvil noble, de avance, de progreso; pertenece a la llamada delincuencia evolutiva, quiere llegar al poder por medios más o menos equivocados o acertados, pero incursiona dentro de alguna organización paramilitar; viste incluso como lo hacen los guerrilleros, un uniforme y usa ostensiblemente las armas (Fundamentos de la Ley Antiterrorista, Revista del Foro, Año LXVIII, 1981, p. 150). ("Agli effetti della legge penale, é delitto politico ogni delitto, che offende un interesse politico dello Stato, ovvero un diritto politico del cittadino. E altresí considerato delitto politico il delitto comune determinato, in tutto o in parte, da motivi politici", expresa el artículo 8 del C.P. italiano) (nuestra legislación penal no ha sido extraña a la tipificación de estos delitos, así: El Código penal de 1924 (Art. 6.2) hacía referencia a "delitos político sociales" y el vigente de 1991 (Art. 4.2) hace referencia a "delitos políticos o hechos conexos con ellos", sin entrar a ningún tipo de definición conceptual).

El delito electoral indica Eusebio Gómez es ajeno a esa característica, por cuanto no existe en él la nobleza del fin, ya que al triunfo de los propios principios nada tiene que hacer con las intrigas ni las violencias; ni la variabilidad de los principios morales y jurídicos, ya que el fraude y la violencia son siempre y en todas partes repudiados y condenables; ni el objeto de abatir o modificar la organización política, ya que en el delito electoral, el agente, para cometerlo, se vale de las instituciones vigentes, que

permanecen siempre las mismas, después de consumado el hecho. En definitiva: "estos delitos no son dignos de simpatía y benevolencia; antes bien, son odiosos y funestos, porque hacen impura la representación legal de la voluntad común (1941, p.424).

3.- EL BIEN JURÍDICO

Conforme a lo ya fundamentado, resulta muy diferente y contrapuesta la situación del delito electoral con relación al delito político, en cuanto por medio de él se subvierte la democracia misma ya que, como hemos precisado, la libertad política de carácter electoral es esencial al funcionamiento del régimen representativo. El atentado al voto como expresión de la voluntad ciudadana, resulta así un atentado a la soberanía popular.

En tal sentido, el profesor argentino José Peco, señala sobre este particular, y en forma por demás vehemente, que: "sin la verdad del sufragio, el derecho es quimera, la libertad un mito, la democracia una ficción". "Cualquier atentado a la libertad electoral es una herida a la democracia; cualquier violación del comicio, una lesión a la dignidad nacional, cualquier ataque al sufragio, un atentado contra la soberanía popular".

De ahí, pues, que quienes incurren en el fraude electoral, busquen no el progreso y el cambio, sino, por el contrario, el retroceso, la retracción social, y sus móviles sean egoístas y execrables (Fernández doblado, 1973, p. 194).

Resulta así, fundamental la tarea de identificar con precisión el bien jurídico a tutelar. Así, observamos que el bien jurídico común a las infracciones electorales, no es en puridad, la libertad política en cuanto bien jurídico individual, porque más que atentarse contra la libertad del elector (quien al fin de cuentas resulta ser el sujeto directamente

ofendido), se agravia el principio mismo de soberanía sobre el que descansa la organización del Estado. En tal sentido, lo que se lesiona es el interés jurídico del Estado en mantener inviolable la libertad política en cuanto al sufragio, de suerte que quienes colocan estos delitos entre los que van contra el Estado, seguramente no andan mal encaminados.

"El problema penal aquí, expresa con acierto Bustillos, no se reduce a la simple tutela de la libertad del elector, sino que trasciende a valoraciones de contenido colectivo. En el ejercicio de los derechos cívicos, la ley penal protege al ciudadano no en razón de su individualidad, sino en virtud de su participación en una función pública" (conf. Fernández Doblado, op. cit. p. 195). Señala Sebastian Soler, que en un Estado democráticamente constituido, la lesión está inferida al principio mismo de soberanía sobre el cual se asienta la organización del Estado.

En el caso nuestro, observamos que después de brindar protección jurídica al Estado como personalidad internacional y como organización soberana interna, el Código penal se ocupa de los atentados que afectan los derechos de los ciudadanos previstos por la Constitución del Estado, como lo es el derecho al sufragio, mediante la protección jurídica de la "Voluntad Popular" (Título XVII) (después de los delitos contra el Estado y el Orden Constitucional, lo que evidencia que el objeto jurídico de protección no radica en la defensa de bienes de naturaleza individual, sino colectivos. Se protege así la soberanía popular (traducido en el interés del Estado en la defensa de los derechos políticos), cuya concreta y máxima expresión es el sufragio electoral, que debe ser protegido en su libre determinación contra los atentados que pretendan afectarlo, distorsionarlo o frustrarlo. En igual sentido, la Ley Orgánica Electoral se ocupa de tales delitos bajo el membrete de delitos "contra el derecho de sufragio".

4.- DENOMINACIÓN

En el ámbito doctrinario e histórico, se han establecido una diversidad de denominaciones, cada una de ellas comprensiva de aquellos actos atentatorios contra la libre determinación ciudadana, de ejercer su sagrado derecho a la participación en la vida política de sus respectivos países.

Así, el antiguo Código italiano, fuente de las legislaciones modernas, incluía la tipificación de los **delitti contro la libertà**, en la esfera de la libertad política del ciudadano. Posteriormente la vigente normatividad itala, tipifica estas modalidades delictivas como: **dei delitti contro i diritti politici del cittadino**, en el título correspondiente a los **delitti contro la personalità dello Stato**.

Otra de las fuentes históricas es el Código penal francés, que consideró a los **crimes et délits relatifs á l'exercise des droits civiques**, entre los crímenes y delitos **contre la Charte constitutionnelle**.

La denominación de "crímenes y delitos relativos al ejercicio de los derechos cívicos", fue adoptada por el Código alemán ("Verbrechen und Vergehen in Beziehung auf die Ausübung staatsburgerlicher Rechte"), expresión menos amplia que la de "delitos contra el derecho electoral" seguida por el Código Húngaro. Por su parte el Código penal de Holanda prefiere el rubro de "Delitos Relativos al Ejercicio del Derecho y Deberes Cívicos". El Código Suizo hace referencia a: "Delitos Contra la Voluntad Popular"

Precedentes pre-legislativos y legislativos argentinos, han usado indistintamente denominaciones como: "Delitos Contra la Voluntad Popular (proyecto Peco 1941); "Delitos Contra la Voluntad del Pueblo y el Fundamento de sus Instituciones" (anteproyecto Oyhanarte 1936); "Delitos Contra la Soberanía Popular" (decreto 11.976/45). Actualmente la legislación electoral del país gaucha se refiere a: "Delitos Electorales".

El Código penal Colombiano hace referencia a: "Delitos Contra los Mecanismos de Participación Democrática" (Título XIV). El Código penal Venezolano tipifica los "Delitos Contra las Libertades Políticas" (Título II: Delitos contra la libertad). La legislación electoral uruguaya hace referencia a los "Delitos Electorales". El artículo 137 del Código penal chileno, referido a los "Delitos Relativos al Ejercicio de los Derechos Políticos y a la Libertad de Imprenta", destina la sanción de los "Delitos Relativos al Libre Ejercicio del Sufragio", a la legislación electoral (leyes de elección).

Nuestro Código penal de 1863 tipificaba los "Delitos Contra el Ejercicio del Sufragio" (en la sección Cuarta, inmediatamente después de los Delitos Contra la Seguridad Interior del Estado). El código penal de 1924, siguiendo la fuente Suiza, tipificaba estas conductas en la Sección Undécima (del Libro Segundo), como: "Delitos Contra La Voluntad Popular" (luego de los delitos contra los Poderes del Estado y la Autoridad de la Constitución). Nuestro vigente Código penal de 1991, tipifica también estas conductas bajo el membrete de: "Delitos Contra la Voluntad Popular" (Título XVII del Libro Segundo, después de los Delitos Contra los Poderes del Estado y el Orden Constitucional), sancionando en un capítulo único los "Delitos Contra el Derecho de Sufragio". Por su parte, nuestra legislación electoral hace referencia a delitos "Contra el Derecho de Sufragio".

Todo ello nos informa, como aprecia Bertoli, que las distintas formas de conceptualización de este universo de conductas típicas, tienen como factor común a todos los actos que atentan contra el secreto, la universalidad, la obligatoriedad o la individualidad del sufragio (Alberto Bertoli, 1957, p. 425).

En tal consideración, desde la perspectiva de que la denominación genérica del rubro delictivo, no tiene por que reproducir in extensu el contenido del género delictivo en cuestión, el mismo que puede ser desarrollado mediante denominaciones específicas, en el desarrollo del tratamiento de los diferentes delitos en particular, nosotros, consideramos adecuado, desde la perspectiva del bien jurídico protegido y de los fundamentos doctrinarios e históricos que lo sustentan, encuadrar esta familia delictiva bajo el membrete de **"DELITOS ELECTORALES"**, que es una denominación comprensiva del contenido de lo injusto que orienta la sanción de estas conductas lesivas y por que contiene raigambres históricas y doctrinarias sólidamente constituidas.

5.- ÁMBITO DE PROTECCIÓN PENAL

Conforme a la naturaleza del bien jurídico protegido y de acuerdo a la acción lesiva, los delitos electorales pueden clasificarse en tres grupos:

a) Actos destinados a perturbar o impedir la constitución del registro nacional de electores, el registro de organizaciones políticas y su funcionamiento; es decir, a la actividad del Estado encaminada al reconocimiento del derecho de votar y asegurar la autenticidad del voto. Pertenecen a esta categoría los actos de alteración, sustitución, falsificación o destrucción de un registro de inscripción electoral. Incluso los atentados contra la vida institucional de las agrupaciones o partidos políticos.

b) Actos destinados a perturbar o impedir el acto de sufragio; pertenecen a esta categoría: el empleo de violencia o fraude para que el elector no pueda depositar su voto, o para que lo deposite en favor de candidatos o partidos que no son los de sus simpatías, el que hace desaparecer o retiene indebidamente una cédula o documento de ciudadanía (título de sufragio). La publicidad indebida del contenido del voto (siendo este secreto). Pertenecen también a este grupo, los delitos que afectan la función del sufragio cuando vota el que no tiene derecho, o cuando, teniéndolo, vota más de una vez; y los que afectan la libertad individual cuando se suplanta a otro elector, esto es, cuando se arrebatata a éste el derecho de sufragar.

c) Actos destinados a impedir, perturbar o distorsionar el resultado electoral; pertenecen a este tercer grupo, los delitos que afectan el acto mismo de la verificación de resultados, atentando contra el escrutinio o recuento de votos y su posterior formalización en el resultado final.

Ahora bien, dentro de estos tres grandes estadios o fases de la mecánica que sigue el proceso electoral desde su inicio hasta su terminación, la ley capta, junto a otras de menor gravedad, tres formas específicas de ataque a la pureza del sufragio, que vulneran otros tantos bienes o intereses específicamente protegidos. Tales formas o modos de comisión del delito, son: **la coacción, la corrupción y el fraude;** con su empleo resultan lesionados o puestos en peligro, respectivamente: **la libertad, la honestidad y la sinceridad del sufragio.**

6.- SISTEMAS NORMATIVOS EN LA LEGISLACIÓN COMPARADA

En la legislación comparada podemos identificar, hasta tres sistemas en la técnica de legislar estos ilícitos:

a) En sección especial del Código penal; Legislaciones que tipifican los delitos electorales específicamente en un Título o Sección en el Código penal, con tratamiento diferencial al de los tipos que sancionan los atentados contra la libertad individual. Tales son los casos de Colombia, Ecuador y el Perú (que constituye un caso especial, ya que también la legislación electoral sanciona este tipo de delitos)

b) De manera genérica en el Código penal, sin tratamiento específico; Legislaciones que contemplan los delitos contra el sufragio dentro del precepto general que tutela las libertades individuales, sin conformar una Sección o Título especial, como es el caso de: Venezuela, Uruguay, Panamá, México, Haití y Costa Rica.

c) Sin precisión codificada indicativa y/o remitiendo la sanción a la legislación electoral; Legislaciones que omiten prescribir normas relativas a los delitos contra el sufragio, u otro tipo de derechos políticos del ciudadano: Argentina, Brasil, Cuba y Chile (que apenas los menciona en el artículo 137, remitiendo su sanción a la ley de electoral, así: "Los delitos relativos al libre ejercicio del sufragio y a la libertad de emitir opiniones por la prensa, se clasifican y penan respectivamente por las leyes de elecciones y de imprenta"). En el caso peruano se observa una duplicidad en la sanción penal de estos preceptos, ya que se tipifican tanto en el Código penal como en la ley electoral.

7.- MARCO NORMATIVO NACIONAL

En una revisión histórica del contexto codificado de nuestra legislación penal, podemos apreciar, como ya hicimos referencia, que nuestro primer Código penal (de 1863) tipificaba los "Delitos Contra el Ejercicio del Sufragio" (en la Sección Cuarta, inmediatamente después de los Delitos Contra la Seguridad Interior del Estado). El código penal de 1924, siguiendo la fuente Suiza, también tipificaba estas conductas de manera específica, en la Sección Undécima (del Libro Segundo), como: "Delitos Contra La Voluntad Popular" (luego de los delitos contra los Poderes del Estado y la Autoridad de la Constitución). Por su parte, nuestro vigente Código penal de 1991, tipifica actualmente estas conductas bajo el membrete de: "Delitos Contra la Voluntad Popular" (Título XVII del Libro Segundo, después de los Delitos Contra los Poderes del Estado y el Orden Constitucional), sancionando en un capítulo único los "Delitos Contra el Derecho de Sufragio" (artículos 354 al 360).

Por su parte, nuestra frondosa legislación electoral, en el transcurso de nuestra historia republicana, hace referencia a una serie de actos ilícitos atentatorios contra el Derecho de Sufragio y el proceso electoral. Así, la Ley de Elecciones de 13 de abril de 1861 (estando en la Presidencia de la República don Ramón Castilla), refiere a "Los Actos Prohibidos en las Elecciones" (Título IX); La Ley Electoral, sancionada por el Congreso Extraordinario de 1896 y proclamada por don Nicolás de Piérola sancionaba las "Infracciones de esta Ley" (Título XIII); La Ley Electoral No 2108 de 1915, (siendo Presidente Oscar R. Benavides); La Novísima Ley Orgánica de Elecciones No 2108 sancionada por el 2do Congreso Extraordinario de 1915, hacia referencia a: "De las infracciones de esta Ley y de la nulidad de las Elecciones" (Título IX); La Ley de Elecciones Nacionales del Perú, Ley No 4907, durante el gobierno de Augusto B. Leguía

no hacía referencia expresa a actos ilícitos específicos sino que disgregaba en su normatividad ciertos actos punibles contra el sufragio; el Estatuto Electoral expedido mediante Decreto Ley No 7160 en 1931 siendo presidente de la Junta Nacional de Gobierno J.F. Tamayo, hacía referencia, con mejor técnica legislativa en su Capítulo V a las "garantías electorales y penas"; la Legislación Electoral de 1936 (Leyes 8252 y 7780) consignaba también un título referido a las "garantías electorales, control de sufragio y sanciones penales aplicables a los delitos contra la voluntad popular"; en igual sentido, la legislación electoral de 1939 (Estatuto Electoral, Ley No 8901), resguardaba la voluntad popular en su Capítulo X: "De las garantías electorales y penas", al igual que lo hacía la Legislación Electoral de 1945 (Estatuto Electoral, Leyes 8901 y 8932); en igual sentido también en su Título X el Estatuto Electoral de 1949 (Decretos Leyes Nros 11100 y 11172) reprimía tales conductas en su Título IX: "De las garantías electorales y de las penas".

El Decreto Ley No 14250, promulgada en 1979 durante el gobierno del General Francisco Morales Bermúdez, legislaba en materia de ilícitos electorales, en su Título XI: "De los delitos, penas y procedimiento judicial". Nuestra actual legislación electoral, sancionada mediante Ley 26657 (23-08-1996): "Ley Orgánica de Elecciones" (LOE), contiene, en su Título XVI, la referencia al rubro: "De los delitos, sanciones y procedimiento judicial", sancionando las conductas atentatorias contra "el derecho de sufragio" (Arts. 382 al 393).

Por otro lado, y ya en el campo netamente Registral Electoral (vease: Procedimiento Registral Electoral y Delitos contra la Inscripción Electoral; Hugo Vizcardo, Silfredo, 1990), el devenir histórico de nuestra legislación electoral de la materia, nos informa la tipificación de diversas conductas, directamente referidas al atentado contra los

actos propios de la inscripción electoral, base de la acreditación del derecho ciudadano, que en nuestro sistema es de naturaleza obligatoria.

Así, el Decreto Ley 14207, de fecha 25 de setiembre de 1962 (actualmente todavía vigente), contiene, en su Título Octavo, la referencia a: "De Los Delitos, Penas y Procedimiento Judicial" (artículos 91 al 107); tipificándose las siguientes conducta delictivas (ob. cit): Falsedad en el aporte de documentos y datos; Falsificación y adulteración de documentos destinados a la inscripción electoral; Duplicidad de inscripciones; Impedimento y obstrucción de la inscripción; Abuso de autoridad de Registrador; Falsificación, alteración y desaparición de inscripciones; Omisión maliciosa de la depuración; Sustracción de material electoral; Inscripción fuera del local del Registro Electoral; Retención o desaparición de material electoral por empleados postales; y, Responsabilidad del funcionario del Registro Electoral.

Todo lo dicho no hace sino demostrar, en nuestra realidad jurídica, una injustificada vastedad y dispersión de la normatividad punitiva en materia de sanción al delito electoral. Esta coexistencia simultánea y duplicidad innecesaria, que podría traer como consecuencia inequidades, así como la afectación de la seguridad jurídica, e incluso la trasgresión del mismo principio de legalidad (confr. Urquiza Olaechea, 2000 en relación a los fundamentos del principio de legalidad).

Se evidencia así una arraigada y antigua anomalía legislativa, que denota la existencia de una inadecuada técnica legislativa nacional. La normatividad vigente se contrapone entre sí; **no se aprecia la posibilidad de interpretarlas como complementarias**, ya que las diferentes descripciones típicas comprenden supuestos delictivos similares o idénticos (por ello la disposición normativa contenida en el artículo

393 de la LOE, que establece que las normas punitivas contenidas en ella, se aplican sin perjuicio de las normas contenidas en el C.P. representa una norma meramente simbólica).

Planteado así el problema, desde la perspectiva del principio de tipicidad objetiva, la aplicación de tales textos normativos se representa como incierta por parte del operador penal, ya que las carencias normativas y la falta de coherencia legislativa, no orientan una actuación dentro de los márgenes del principio de imputación contenido en los artículos III, IV y VII del Título Preliminar del Código Penal.

Presentado objetivamente el caso, una misma acción podría ser reclamada, por identidad, por dos normas de contextos legislativos diferentes (C.P. y LOE). En este supuesto, la solución no pasa por la aplicación de las normas que solucionan el concurso de leyes penales (por que técnicamente no se excluyen). La solución tampoco se orienta a la aplicación de las normas relativas a los casos de conflictos de la ley penal en el tiempo (Arts. 6 y 7 del C.P.), en las que la regla general informa que la ley posterior deroga a la anterior. Ello no es de aplicación por cuanto tales leyes constituyen derecho positivo que no se contraponen (incluso la LOE señala la aplicación simultánea, Art. 393: "Los artículos anteriores de este Título rigen, sin perjuicio de lo dispuesto en los artículos 354 al 360 del Código penal"). Esta situación podría ser determinante de la trasgresión del principio non bis in idem, en virtud del cual una persona no puede ser objeto de sanción penal dos veces por el mismo hecho, sobre todo en cuanto apreciamos que en materia de delitos electorales, en algunos casos, se contemplan dos sanciones penales para una idéntica conducta. URGE PUES UNA MEJOR PRECISION JURIDICA. En todo caso la solución ha de partir del principio de estar a lo más favorable al reo.

8.- CLASIFICACIÓN TÍPICA

Conforme a lo expuesto, de acuerdo a la doctrina en general y la normatividad nacional (tanto la vigente como la hist MOCA, es posible establecer la siguiente clasificación del universo delictivo en materia electoral:

DELITOS ELECTORALES

a) Actos destinados a perturbar o impedir la constitución del registro de electores, el padrón general de votantes y el registro de organizaciones políticas y su funcionamiento; Que se sub-dividen en:

a.1) Delitos contra la inscripción electoral

- 1) Atentado contra la formación de registro electoral; Art. 359.1) C.P.
- 2) Falsedad en el aporte de documentos y datos; D.L. 14207.
- 3) Falsificación y adulteración de documentos destinados a la inscripción electoral; D.L. 14207
- 4) Duplicidad de inscripciones; D.L. 14207.
- 5) Impedimento y obstrucción de la inscripción; D.L. 14207
- 6) Abuso de autoridad de Registrador; D.L. 14207.
- 7) Falsificación, alteración y desaparición de inscripciones; D.L. 14207.
- 8) Omisión maliciosa de la depuración; D.L. 14207.
- 9) Sustracción de material electoral; D.L. 14207.
- 10) Inscripción fuera del local del Registro Electoral; D.L. 14207.
- 11) Retención o desaparición de material electoral por empleados postales; D.L. 14207.

12) Responsabilidad del funcionario del Registro Electoral; D.L. 14207.

a.2) Delitos contra la inscripción de agrupaciones políticas y/o candidatos

1) Coacción por funcionario o servidor público para suscribir lista de adherentes; Art. 385.a) L.O.E.

b) Acciones destinadas a perturbar o impedir el acto de sufragio

1) Turbación violenta de proceso electoral; Art. 354 C.P. y Art. 384.b) L.O.E.

2) Impedimento o turbación violenta del sufragio; Art. 355 C.P.

3) Impedimento o perturbación de reuniones políticas; Art. 384.d) L.O.E.

4) Realización indebida de propaganda electoral; Art. 389 L.O.E.

5) Sufragio y participación indebida en actos políticos de miembros de las Fuerzas Armadas y Policía Nacional; Art. 382.a) L.O.E.

6) Portar armas durante el acto electoral; Art. 382.c) L.O.E.

7) Realizar actividades políticas en zonas y plazos prohibidos; Art. 388 L.O.E.

8) Venta de bebidas alcohólicas o realización de espectáculos prohibidos; Art. 390.a) L.O.E.

9) Atentado contra derechos laborales por funcionario o servidor público; Art. 385.b) L.O.E.

10) Destrucción, impedimento u obstaculización de propaganda electoral; Art. 390.b) L.O.E.

11) Incumplimiento de remisión de material electoral por parte de presidente de mesa de sufragio; Art. 384.a) L.O.E.

- 12) Detención o retardo del transporte de material electoral o comunicaciones oficiales; Art. 383.d) L.O.E.
- 13) Violación del secreto de comunicaciones oficiales y ánforas electorales; Art. 383.e) L.O.E.
- 14) Omisión injustificada a integrar jurado electoral; Art. 391 L.O.E.
- 15) Omisión injustificada a instalación de mesa de sufragio; Art. 392 L.O.E.
- 16) Impedimento de designación para integrar jurado electoral; Art. 387 L.O.E.
- 17) Suplantación o integración ilegal de jurado electoral; Art. 383-a) L.O.E.
- 18) Coacción o instigación para suplantar a miembro de jurado electoral; Art. 383-b) L.O.E.
- 19) Actos de falsificación o destrucción de material electoral tendientes a dificultar la elección o falsear su resultado; Art. 359.2) C.P.
- 20) Sustracción, destrucción o sustitución de cédulas sufragadas; Art. 359.4) C.P.
- 21) Recepción o rechazo indebido de voto; Art. 383. c) L.O.E.
- 22) Recepción o rechazo injustificado de voto; Art. 359.6) C.P.
- 23) Votación fraudulenta; Art. 386 L.O.E.
- 24) Violación del secreto del voto; Art. 358 C.P. y 382.b) L.O.E.
- 25) Despojo o retención indebida de documento de votación; Art. 359.7) C.P. y 384.c) L.O.E.
- 26) Agravante por calidad personal del autor; Art. 360 C.P.

c) Actos destinados a impedir, perturbar o distorsionar el resultado electoral

- 1) Alteración del resultado electoral; Art. 359.5) C.P.
- 2) Sustracción, destrucción o sustitución de ánforas electorales; Art. 359.3) C.P.

d) Consecuencias derivadas de la omisión de la obligatoriedad del sufragio

1) Omisión a exigencia de presentación de documento de identidad con constancia de sufragio por parte de funcionarios y servidores públicos; 390.c) L.O.E.

II) DELITOS ELECTORALES EN LA LEGISLACIÓN PERUANA

1.- MARCO NORMATIVO

Como ya hemos precisado y también criticado, el universo normativo de los delitos electorales vigentes en nuestro sistema, que evidencian una perniciosa dispersión y duplicidad, lo encontramos en el D.L 14207 (25 de setiembre de 1962) (Título Octavo: De los Delitos, Penas y Procedimiento Judicial); en el Código Penal (D.Leg. 635 promulgado el 3 de abril de 1991) (Libro Segundo; Título XVII: "Delitos Contra la Voluntad Popular"...Arts. 354 al 360) y en la "Ley Orgánica de Elecciones" (LOE), que contiene, en su Título XVI, la referencia al rubro: "De los delitos, sanciones y procedimiento judicial", sancionando las conductas atentatorias contra "el derecho de sufragio" (Arts. 382 al 393).

2.- BIEN JURÍDICO PROTEGIDO

En el caso nuestro, como ya tuvimos oportunidad de referir, observamos que después de brindar protección jurídica al Estado como personalidad internacional y como organización soberana interna, el Código penal se ocupa de los atentados que afectan los derechos de los ciudadanos previstos por la Constitución del Estado, como lo es el

derecho al sufragio, mediante la protección jurídica a la "Voluntad Popular" (Título XVII). En igual sentido, la Ley Orgánica Electoral hace referencia a los delitos "contra el derecho de sufragio", lo que evidencia que el objeto jurídico de protección no radica en la defensa de bienes de naturaleza individual, sino colectivos. Se protege así la soberanía popular (traducido en el interés del Estado en la defensa de los derechos políticos), cuya concreta y máxima expresión es el sufragio electoral, que debe ser protegido en su libre determinación contra los atentados que pretendan afectarlo, distorsionarlo o frustrarlo. Es el derecho al libre sufragio lo que se protege.

3.- SUJETOS DE LA ACCIÓN

En cuanto a los sujetos activos de los delitos electorales, una mirada de conjunto a los diferentes tipos que componen el universo normativo, nos permite advertir que en sus diferentes modalidades se incluyen indistintamente sujetos activos genéricos o indeterminados (pudiendo ser cualquier persona) y sujetos cualificados o específicos, en cuyo caso el tipo exige un sujeto activo determinado (intraneus), como cuando la acción la realiza un miembro de la Fuerza Armada, Policía Nacional, funcionario o servidor público, servidor del servicio postal, etc.

La condición de sujeto activo específico condiciona la penalidad, determinando la presencia típica de circunstancias agravantes específicas relacionadas a la calidad del agente, que por disposición del artículo 26 del C.P. (principio de comunicabilidad de circunstancias personales), no se transmiten a otros sujetos de la acción (Art. 26: "Las circunstancias y cualidades que afecten la responsabilidad de algunos de los autores y partícipes no modifican las de los otros autores o partícipes del mismo hecho punible").

En igual sentido, con respecto a los sujetos cualificados pertenecientes a las Fuerzas Armadas y Policía Nacional, por imperativo de lo dispuesto por el artículo X del Título Preliminar del C.P. (aplicación extensiva), rige lo normado por el artículo 46 A del Código Penal: "Constituye circunstancia agravante de la responsabilidad penal si el sujeto activo se aprovecha de su condición de miembro de las Fuerzas Armadas, Policía Nacional, autoridad, funcionario o servidor público, para cometer un hecho punible o utiliza para ello, armas proporcionadas por el Estado o cuyo uso le sea autorizado por su condición de funcionario público.

En estos casos el Juez podrá aumentar la pena hasta en un tercio por encima del máximo legal fijado para el delito cometido, no pudiendo ésta exceder del máximo de pena privativa de libertad temporal establecida en el artículo 29 de este Código.

No será aplicable lo dispuesto en el presente artículo cuando la circunstancia agravante esté prevista al sancionar el tipo penal o cuando ésta sea elemento constitutivo del hecho punible".

La Ley Orgánica Electoral, también señala para algunos tipos penales ciertas causas adicionales de agravación funcional, como en el caso del artículo 384 in fine, que establece: "Si el culpable fuese funcionario o empleado público, además de la pena indicada sufre pena accesoria de inhabilitación por igual tiempo al de la condena, de conformidad con los incisos 1), 2), 3), 4), y 8) del artículo 36 del Código Penal".

En la misma línea de determinación, el artículo 360 del Código Penal (Delitos Contra la Voluntad Popular) establece: "El funcionario o servidor público o miembro de las

fuerzas Armadas o de la Policía Nacional que incurra en uno de los delitos previstos en este Título sufrirá además, inhabilitación de uno a tres años conforme al artículo 36, inciso 1 y 2".

Igualmente resultan de aplicación, a los efectos de la imposición de la penalidad, los principios sobre fundamentación y determinación de la pena contenidos en los artículos 45 y 46 del Código Penal.

El sujeto pasivo lo será de manera genérica, quien resulte afectado en su derecho al libre sufragio. El Estado (representado por el JNE, ONPE y RENIEC) también resultará agraviado por la acción delictiva.

4.- CLASIFICACIÓN

La clasificación propuesta, comprensiva in extensu de la generalidad de los delitos electorales, responde a los siguientes criterios:

- a) Actos destinados a perturbar o impedir la constitución del registro de electores, el padrón general de votantes y el registro de organizaciones políticas y su funcionamiento.
- b) Acciones destinadas a perturbar o impedir el acto electoral.
- c) Actos destinados a impedir, perturbar o distorsionar el resultado electoral

Rubros genéricos que iremos disgregando conforme a los diversos tipos penales que contienen, tanto de los tipos vigentes, como de aquellos ya derogados (ello desde la perspectiva histórica muy necesaria para la comprensibilidad de estos delitos). Así, realizaremos un estudio dogmático jurídico de cada uno de ellos, interpretando su

tipicidad tanto objetiva como subjetiva y anotando las precisiones o críticas y/o aportes pertinentes.

5.- ACTOS DESTINADOS A PERTURBAR O IMPEDIR LA CONSTITUCIÓN DEL REGISTRO DE ELECTORES, EL PADRÓN GENERAL DE VOTANTES Y EL REGISTRO DE ORGANIZACIONES POLÍTICAS Y SU FUNCIONAMIENTO

5.1) DELITOS CONTRA LA INSCRIPCIÓN ELECTORAL

Como derecho consagrado en la Constitución, le asiste al ciudadano la facultad de participar en los asuntos políticos del país. Así, nuestra carta magna, establece como derecho ciudadano, el "derecho de participación política", facultando al ciudadano a ser elegidos y elegir libremente a sus representantes y a participar en los asuntos públicos a través del referéndum, iniciativa legislativa, remoción de funcionarios públicos, revocación de autoridades elegidas, rendición de cuentas, cabildos abiertos y juntas vecinales, correspondiendo a la ley regular y promover los mecanismos directos e indirectos de participación.

Para que este derecho se constituya, es necesario, debido al principio "obligatorio" que orienta nuestro sistema de participación electoral, que la persona, al llegar a la mayoría de edad establecida en la Constitución (18 años), se inscriba en un registro especial, que por imperio de la ley, se denomina Registro Nacional de Identificación y Estado Civil -RENIEC- (Ley 26497 de 28 junio 1995), recibiendo, luego de dicho trámite administrativo, un documento, denominado Documento Nacional de Identidad (DNI), que al efecto se constituye en su única cédula de identidad y título de sufragio (respecto a los

elementos del derecho electoral: fundamentos reales y requisitos de la capacidad electoral: véase: Francesc de Carreras y Josep M. Valles, 1977).

Este registro obligatorio de ciudadanos, que expresa la fase previa e instrumental del acto electoral, y que en nuestro sistema es permanente (salvo la excepción de cierre de registro en el período inmediato anterior a la elección), servirá posteriormente, para que se confeccione el padrón general de votantes, que permite a su vez identificar, en el acto electoral, quienes tienen derecho activo al sufragio y sirve de fundamento al acto electoral en general.

El registro electoral se constituye así en el origen del derecho al libre sufragio que la ley protege. La sola circunstancia de llegar biológicamente a la edad para poder acceder a la ciudadanía, no faculta directamente al ejercicio del sufragio, para ello, previamente debe el ciudadano inscribirse en tal registro electoral. Al llegar a la edad de la ciudadanía, la persona adquiere un deber-derecho, que lo obliga y lo faculta al ejercicio pleno de los derechos políticos, pero sólo puede efectivizarlos previa su inscripción electoral.

En tal sentido, lo injusto surge al atentar el agente contra esta función de inscripción electoral, que corresponde al Estado mediante el organismo público legitimado para ello: El Registro Nacional de Identificación y Estado Civil (RENIEC). A decir de González Arzac, a la protección de los aspectos fundamentales del acto electoral, debe sumarse la tutela de la "sanidad de los instrumentos". En este sentido, deben preverse las falsedades que pueden afectar la pureza del registro electoral (durante el período preliminar a la elección) (ob. cit, p. 271).

La protección in extensu de la Función Registral Electoral y por ende a los actos mismos de la inscripción electoral, se daban normativamente en el Decreto Ley 14207, que norma, los fundamentos y procedimientos para la inscripción electoral y obtener la antiguamente denominada "Libreta Electoral". Dicho dispositivo legal representa actualmente una fuente directa del actual procedimiento para la obtención del Documento Nacional de Identidad (DNI).

Dicha legislación que data de 1962, ha sido reemplazada por la legislación posterior que crea el sistema electoral (Ley Orgánica de la Oficina Nacional de Procesos Electorales -ONPE- (Ley 26487), Ley Orgánica del Registro Nacional de Identificación y Estado Civil -RENIEC- (Ley 26497)).

Así, dicho Decreto Ley 14207 tipificaba en su Título Octavo acerca de los delitos y su procedimiento penal, y que se refían a los "delitos contra la inscripción electoral" (frase que acuñáramos en nuestro libro sobre la materia, Hugo Vizcardo, 1990).

En tal sentido, el espíritu de la ley era justamente sancionar este tipo de delitos contra la inscripción electoral (que actualmente no se sancionan en ningún otro cuerpo normativo). No obstante ello, procederemos al estudio de cada una de estas modalidades delictivas, a efecto de explicar el fundamento de la necesidad de su sanción.

5.1.1) ATENTADO CONTRA LA FORMACIÓN DE REGISTRO ELECTORAL

La tipificación de esta conducta la encontramos en el vigente Código penal, siendo esta la única de su tipo en el texto punitivo codificado.

Descripción de la norma: **Artículo 359 (C.P.)**.- **Será reprimido con pena privativa de libertad no menor de dos ni mayor de ocho años el que, con propósito de impedir o alterar el resultado de un proceso electoral, realiza cualquiera de las acciones siguientes:**

1. Inserta o hace insertar o suprime o hace suprimir, indebidamente, nombres en la formación de un registro electoral.

La acción típica reclama la conducta dolosa del agente, que puede ser realizada mediante actos de violencia, coacción o fraude, tendiente a perturbar o impedir la formación del registro electoral, entendido desde la perspectiva del atentado a la inscripción electoral misma y también a la constitución del padrón general de electores.

La acción, que es eminentemente comisiva, se representa en el hecho de que el agente, directamente o mediante terceros, inserta o hace insertar o suprime (en el sentido de eliminar, borrar, etc.), sin autorización o derecho, nombres (que determina la supresión de identidades con pleno derecho electoral) en la conformación del registro de votantes, afectando así el padrón general. Los verbos nucleares son: insertar (adicionar) o suprimir (quitar, eliminar).

La maniobra puede ser ejecutada por un sujeto activo genérico. Se representa claramente dolosa (dolo directo). El tipo acepta la autoría y la participación delictiva.

Dada la naturaleza lesiva y material del tipo, es posible la configuración de la tentativa.

La motivación que orienta la acción y es fundamento del tipo subjetivo, esta representada en el tipo, por el animus de parte del agente de orientar su acción a impedir o alterar un proceso electoral.

El delito se consuma en cuanto el agente realiza la maniobra típica de insertar o suprimir identidades del registro de electores, con la finalidad ulterior de impedir o alterar el proceso electoral, por cuanto el sólo hecho de ejecutar la maniobra, por ejemplo, suprimir el nombre de una persona en el registro respectivo, ya está alterando el sistema, sin necesidad de que se verifique la perturbación objetiva del proceso electoral mismo (el delito se vería consumado no obstante fuese posible que antes del acto de sufragio se hubiese detectado y corregido la supresión).

La sanción prevista en el tipo es, pena privativa de libertad no menor de dos ni mayor de ocho años.

5.1.2) FALSEDAD EN EL APOORTE DE DOCUMENTOS Y DATOS

Descripción de la norma: **Artículo 91 (D.Ley 14207).- El que incurriera en falsedad al presentar cualquiera de los documentos consignados en los artículos 37 y 38, o diera datos personales falsos para solicitar su inscripción en el Registro Electoral u obtuviera dicha inscripción sin reunir los requisitos establecidos en el artículo 32 o estuviera impedido de hacerlo, conforme lo estatuyen los artículos 34 y 46, será reprimido con prisión no menor de un año ni mayor de tres, y multa no menor de cincuenta soles oro ni mayor de quinientos soles oro.**

El registro electoral, por imperativo de su ley de constitución, es un registro público de identidad y acreditación electoral, de naturaleza permanente y obligatoria, a cargo, como ya se ha dejado indicado, del RENIEC, ante cuyas oficinas descentralizadas, el ciudadano personalmente se presenta a solicitar su inscripción y recabar su DNI, en un acto solemne y formal por excelencia, que se verifica bajo la exigencia legal del aporte de dos clases de requisitos: documentos que acrediten su derecho adquirido y su identidad; y demás datos que de manera verbal deberá aportar, bajo el respeto del principio de veracidad. Tales datos aportados verbalmente, se realizan ante el funcionario encargado del registro y tienen naturaleza de declaración jurada.

En esta modalidad delictiva encontramos que el sujeto activo es el ciudadano, que pretende su propia inscripción electoral y para conseguirlo, fraudulentamente trata de sorprender o sorprende al registrador electoral, realizando alguna de los actos típicos señalados en la norma, que a su vez señalan las modalidades de consumación del delito, y que se materializan:

- 1) Incurriendo en falsedad al presentar cualquiera de los documentos exigidos por la ley como requisitos para la inscripción.

Modalidad que incluso puede concurrir con los tipos que reprimen los actos contra la fe pública tipificados en el Código Penal, ya que el agente opta por utilizar documentos adulterados o falsificados, que como requisito previo a la inscripción, le son exigidos al presentarse a solicitar su registro. Tales pueden ser: Boletas Militares, Libretas Militares, partidas de matrimonio o defunción, Títulos de naturalización, Partidas de matrimonio con anotación del divorcio, etc.. En estos casos la falsedad documental puede ser total o

parcial. Puede incluso utilizar documentos formalmente legales, pero pertenecientes a otra persona (su hermano o primo por ejemplo).

La interpretación teleológica y sistemática permite apreciar que el agente, en este caso no es el autor material de la falsificación documental y que el acto es necesariamente consciente y voluntario (dolo directo). El error de tipo tendrá que ser valorado en sus efectos de exclusión o no de responsabilidad, de acuerdo a la vencibilidad o invencibilidad del mismo (Art. 14 C.P) (como en el caso de quien confiando en su abogado, recibe copia de su partida de matrimonio con anotación marginal del divorcio, y la presenta al registrador en la confianza de que el letrado ha realizado los trámites legales y el documento es verdadero, cuando en realidad el abogado le ha dado un documento falsificado)

2) Aportando datos personales falsos para solicitar su inscripción.

Como ya se dijo, la inscripción se realiza de manera personal y en un sólo acto, en cuyo desarrollo el registrador solicita al ciudadano, la presentación de sus documentos y también el aporte de datos complementarios, que éste ha de aportar en forma verbal a modo de declaración jurada, que como tal le obliga a la veracidad, pudiendo, en caso contrario, incluso incurrir en acto de falsedad genérica, tipificado en el Código sustantivo. No interesa la motivación que oriente tal falta de veracidad (puede incluso ser por vanidad o verguenza), ya que en todo caso se estaría afectando la "pureza del instrumento". El aporte datos personales que no se ajustan a la realidad pueden ser por ejemplo en cuanto a su educación, dirección, estado civil, edad, etc.

3) Solicitar su inscripción estando legalmente impedido.

Figura que implica un acto defraudatorio, que puede concurrir incluso con las modalidades de aporte de documentos y datos falsos.

Lo injusto se presenta cuando el agente vulnera el registro electoral, al solicitar u obtener su inscripción no teniendo derecho a ello, por estar específicamente prohibido por la ley.

Así, la ley de inscripciones electorales señala la prohibición, para la inscripción electoral, de los miembros de la Fuerzas Armadas y Policía Nacional en actividad, de aquellos que tengan en suspenso el ejercicio de la ciudadanía por incapacidad física o mental o por ejecución de sentencia que imponga pena privativa de libertad, de los extranjeros, de los menores de edad (salvo las excepciones de ley, como el caso de estar casado).

Sujeto pasivo en este delito será el RENIEC como institución del Estado.

Conforme al tipo subjetivo, se aprecia que el delito se representa como eminentemente doloso (dolo directo). El agente actúa con plena conciencia y voluntad.

El tipo admite la tentativa y también la participación (v. gr. ser detectado en el acto de inscripción, en cuyo caso se presenta la tentativa; o cuando el hermano le presta sus documentos, en cuyo caso habrá complicidad). En el caso del tercero que realiza materialmente la falsificación documentaria, consideramos que por especialidad, su conducta se tipifica en los delitos contra la fe pública.

En el derecho comparado podemos encontrar el caso argentino, cuyo Código Electoral Nacional, en su artículo 137, impone la pena de prisión de seis meses a tres años, al ciudadano que se inscribiere más de una vez, o lo hiciere con documentos apócrifos, anulados o ajenos, o denunciare domicilio falso. Por su parte, el artículo 195 del Código Electoral belga, tipifica la inscripción de una lista electoral mediante declaraciones falsas. También en Francia, el Código Electoral, sanciona en su artículo 86, a toda persona que se inscriba en una lista electoral con nombre falso, o falseando sus cualidades, ocultando su incapacidad legal, etc.

El Código Penal colombiano, sanciona en su artículo 389, el delito de "fraude en inscripción de cédulas": "El que por cualquier medio indebido logre que personas habilitadas para votar inscriban documento o cédula de ciudadanía en una localidad, municipio o distrito diferente a aquel donde hayan nacido o residan, con el propósito de obtener ventaja en elección popular, plebiscito, referendo, consulta popular o revocatoria del mando, incurrirá en prisión de tres (3) a seis (6) años.

5.1.3) FALSIFICACIÓN Y ADULTERACIÓN DE DOCUMENTOS DESTINADOS A LA INSCRIPCIÓN ELECTORAL

Artículo 92 (D. Ley 14207).- El que hiciere en todo o en parte un documento falso o adulterare uno verdadero y lo utilizare para obtener su inscripción en el Registro Electoral, será reprimido con prisión no menor de un año ni mayor de tres y multa no menor de cien soles oro ni mayor de un mil soles oro.

En las mismas penas incurrirán en su caso, el que intencionalmente hiciere uso de un documento falso o falsificado como si fuere legítimo.

Como se aprecia del texto punitivo, la acción se representa en dos modalidades, que observadas a la luz de la interpretación, podrían ser subsumidas en la modalidad típica precedente.

En su primera forma, y conforme a los fundamentos ya establecidos en el estudio precedente, sujeto activo del delito, lo será el ciudadano que pretende lograr su inscripción electoral, pero que a diferencia del caso anterior, es él mismo quien materialmente falsifica o adultera (en todo o en parte) los documentos que le son exigidos para su inscripción electoral y que presenta al efecto. La acción en este caso es eminentemente comisiva o positiva, como por ejemplo cuando se consigue el formato de una partida de nacimiento, de matrimonio, o de una Libreta Militar y procede a llenarlos con sus datos, para posteriormente utilizarlos en su propia inscripción. La acción puede concursar con los tipos que sanciona el atentado contra la fe pública, tipificados en el Código Penal, pero por especialidad primaran sobre ellos.

La segunda modalidad de acción, señalada como el uso intencional de un documento falso o adulterado como si fuese legítimo, se duplica en su contenido conceptual con el fundamento de lo injusto del tipo descrito en el artículo 91, por lo que existe evidente duplicidad de contenido (salvo que se pretenda inferir que en el caso del artículo 91, el aporte de documento se deba a la negligencia y en el artículo 92 ello sea intencional, solución que consideramos equivocada ya que no se ajusta al espíritu de la norma).

En este caso encontramos que el tercero que falsifica o adultera el documento encuadraría su accionar en las figuras que tipifican los delitos contra la Fe Pública,

mientras que el ciudadano que pretende su inscripción tipificaría su conducta dentro de las figuras que protegen la inscripción electoral.

Sujeto pasivo lo será el RENIEC, por la evidente afectación al acto mismo de la inscripción electoral.

En ambas modalidades de la acción, podemos apreciar la presencia de conciencia y voluntad directa por parte del agente (dolo directo) de falsificar o adulterar documentos, o de utilizar como si fuesen legítimos los ya adulterados o falsificados por terceros, para lograr la inscripción electoral. Se descarta la figura culposa.

5.1.4) DUPLICIDAD DE INSCRIPCIONES

Artículo 93 (D. Ley 14207).- El que se inscriba más de una vez en el Registro Electoral sufrirá prisión no menor de seis meses ni mayor de dos años e inhabilitación relativa con privación de los derechos a que se refieren los incisos 1, 2 y 3 del artículo 27 del Código Penal, por tiempo igual al de la pena privativa de la libertad.

El sujeto activo de esta figura será el ciudadano que se inscribe más de una vez en el registro electoral. Sujeto pasivo de este delito lo será el RENIEC.

El tipo se perfecciona en cuanto el agente, no obstante haber obtenido una primera inscripción, válida y vigente, acude nuevamente al registro electoral e intencionalmente obtiene una nueva inscripción, presentando nuevos documentos.

Como ya vimos, en derecho comparado podemos encontrar que el Código Electoral argentino, en su artículo 137, impone la pena de prisión de seis meses a tres años, al ciudadano que **se inscribiere más de una vez**, o lo hiciere con documentos apócrifos, anulados o ajenos, o denunciare domicilio falso.

En este caso puede presentarse una situación de concurso de delitos, puesto que el agente para lograr dichas inscripciones, puede presentar documentos falsos o aportar datos que no se ajustan a la realidad, conforme a lo ya estudiado.

El tipo es eminentemente doloso, el agente actúa con plena conciencia y voluntad de procurarse dos o más inscripciones electorales (dolo directo). En este caso se descarta la figura culposa, o cualquier otro tipo de motivaciones (p. ej. por no realizar el trámite de cambio de domicilio, el agente opta por sacar nuevo DNI, o por tener un nombre feo obtiene otro documento colocándose el nombre de su artista favorito, etc.).

5.1.5) IMPEDIMENTO Y OBSTRUCCIÓN DE LA INSCRIPCIÓN

Artículo 94 (D. Ley 14207).- El que, en cualquier forma que no constituya violencia o amenaza, impidiese a uno o varios ciudadanos inscribirse en el Registro Electoral u obstruyera deliberadamente el desarrollo de los actos de inscripción, será reprimido con prisión no menor de un mes ni mayor de seis. Si el medio empleado fuese la amenaza o violencia, la pena será de prisión no, menor de un año ni mayor de tres.

La pena será de prisión no menor de un año ni mayor de tres si el culpable hubiese impedido la inscripción a varios ciudadanos con el propósito de alterar los resultados de un proceso electoral.

Se trata de un sujeto activo genérico, incluso militares, policías o funcionarios públicos, que intencionalmente impidiesen u obstruyesen la inscripción de uno o varios ciudadanos.

Sujeto pasivo en este caso lo será tanto el RENIEC, como el ciudadano a quien el agente privó u obstruyó el acto de su inscripción.

El tipo penal representa dos modalidades de acción: una primera, en la que el agente se vale del fraude, engaño o cualquier otra circunstancia que no implique violencia o coacción y una segunda en la que la acción se viabiliza mediante el uso de la violencia y la amenaza. Todo ello con la intención de impedir la realización de una o varias inscripciones, o "deliberadamente" obstruir o dificultar el acto de la inscripción.

La acción de impedir se refiere a no permitir, evitar o imposibilitar la inscripción, mientras que la acción de obstruir denota mas bien la intención de dificultar, poner trabas, hacer difícil, atentar contra la realización de la inscripción sin conseguirlo. Actos que determinan el momento consumativo.

Los medios que puede utilizar el agente para esta finalidad, pueden ser diversos, sin que ellos impliquen violencia o amenaza. Por ejemplo, puede utilizar el engaño, la astucia, la persuasión, etc. Es el caso de quien esconde los documentos para que su víctima no pueda inscribirse, o de quien en pleno acto de la inscripción se presenta y

pretende tachar de nulos o falsos los documentos del ciudadano, oponiéndose a la Inscripción, sin seguir los procedimientos formales de la impugnación a la realización de la inscripción señalados en la ley.

En la segunda modalidad delictiva acotada, la conducta del agente reviste mayor gravedad, por cuanto para conseguir impedir u obstruir la inscripción utiliza como medio la violencia (vis absoluta) o la amenaza (vis compulsiva). En este caso observamos la posibilidad de un concurso ideal de delitos con el tipo delictivo de coacción contemplado por el Art. 151 del Código Penal, que se refiere a que nadie puede ser impedido de hacer lo que la ley no prohíbe; u obligado a ejecutar o dejar de hacer lo que no quiere. En este caso primaría el delito en estudio por la especial finalidad del agente.

Complementariamente, en su parte in fine, el tipo señala una circunstancia agravante, que se presenta en cuanto la acción del agente este orientada específicamente a impedir u obstruir la inscripción, con la directa finalidad de atentar contra el proceso Electoral mismo. Para ello incluso puede utilizar también la violencia o la amenaza para impedir u obstruir la inscripción.

La diferencia con el caso anterior se encuentra en la intención del agente, ya que en la modalidades tratadas de obstrucción o impedimento, el agente actúa tan sólo con la intención de impedir la inscripción, para satisfacer intereses que pueden ser de cualquier naturaleza (económicos, mezquinos, partidarios, etc.); mientras que la otra modalidad agravada reclama en el agente una intencionalidad final, que es el atentar contra el mismo proceso electoral, utilizando como medio el impedimento u obstrucción de la inscripción.

El tipo, en sus diversas modalidades, reclama en el agente conciencia y voluntad, intención directa de impedir u obstruir la inscripción, sea para atentar contra el proceso electoral o con otras finalidades. Así, la figura es eminentemente dolosa (dolo directo), descartándose la forma culposa.

5.1.6) ABUSO DE AUTORIDAD DE REGISTRADOR

Artículo 95 (D. Ley 1427).- El Registrador Electoral que cometiese el delito previsto en el artículo 338 del Código Penal, será reprimido con prisión no menor de un mes ni mayor de un año, e inhabilitación conforme a los incisos 1 y 3 del artículo 27 del mismo Código, por no menos de dos años.

La referencia normativa integrada en el tipo, hacia mención al tipo de omisión o retardo de actos oficiales, contenido en el artículo 338 del Código Penal derogado de 1924, el mismo que actualmente se tipifica en el artículo 337 del Código punitivo vigente.

El sujeto activo es específico y sólo lo podrá ser el registrador electoral, que cometiere abuso de autoridad en el ejercicio de sus funciones.

El sujeto pasivo, por su parte, sólo podrá serlo tanto el RENIEC, como el ciudadano afectado por la acción del agente.

La acción consumativa, en este caso está representada por la actitud abusiva e ilegal del registrador, que sin mediar motivo legal justo, omite, rehusa hacer o retarda la inscripción electoral (al respecto, la ley establece que por falta o deficiencia de los documentos, inidoneidad de la persona, impedimento súbito o circunstancias especiales,

el registrador puede denegar, suspender o postergar por breve término la inscripción. Fuera de estos casos, queda obligado a atender al ciudadano con diligencia, amabilidad y competencia).

Pero, si por alguna circunstancia, ya sea derivada de la satisfacción de intereses económicos (coimas o cobros indebidos), rivalidades, celos, mezquindad, apetitos sexuales (chantaje sexual), etc. el registrador rehúsa, retarda u omite realizar la inscripción estaría encuadrando su conducta en el tipo legal en estudio.

Lamentablemente, la experiencia vivida nos ha informado en el plano histórico, el caso de registradores que ponían trabas insubsistentes a la inscripción, buscando retardarla con el objeto de llegar a un "acuerdo" o "arreglo" que se traduce en el cobro de coimas. También eran frecuentes los casos en los que por deseo sexual, el registrador ponía trabas a la inscripción de su víctima, aparentando que él "lo puede solucionar todo", pero "como es", obligándolas a satisfacer sus lascivos instintos.

Como vemos, esta figura también entra en concurso con el delito de coacción y corrupción de funcionarios, pero prima por especialidad.

5.1.7) FALSIFICACIÓN, ALTERACIÓN Y DESAPARICIÓN DE INSCRIPCIONES

Artículo 96 (D. Ley 14207).- Modifícase el artículo 317 del Código Penal, en los siguientes términos: "Artículo 317.- El que falsificare o alterare un Registro Electoral o lo hiciere desaparecer o lo destruyere, será reprimido con prisión no menor de un año ni mayor de tres y multa no menor de cincuenta soles oro ni mayor de quinientos soles oro".

Si el delito fuera cometido por el Registrador Electoral, la pena será de prisión no menor de dos años ni mayor de cinco, e inhabilitación absoluta por diez años.

En la figura simple el sujeto pasivo es genérico, pudiendo ser cualquier persona, mientras la figura agravada reclama como sujeto activo específico, al registrador electoral.

Sujeto pasivo lo será tanto el RENIEC, como el ciudadano inscrito que eventualmente resulte perjudicado con la acción del agente.

La acción en este delito esta representada por la actitud material del agente, que falsifica, altera, destruye o hace desaparecer un Registro Electoral.

La ley hace referencia a "un registro electoral", debiendo entenderse con ello no al Registro Electoral en su totalidad o como institución, sino que la acción en este caso debe recaer en una "inscripción electoral", que propiamente es la idea que la ley quiso representar con dicha expresión. Se trata aquí de inscripciones ya efectuadas.

Falsificar o alterar tiene semejante connotación y se refieren a la acción de modificar maliciosamente en todo o en parte una Inscripción Electoral. Hacer desaparecer una inscripción, significa el ocultamiento o sustracción de la misma, con la intención de que se ignore su paradero y con ello evitar que se conozca su contenido.

Destruir la inscripción, significa el atentar físicamente contra la integridad del documento, cercenándolo, rompiéndolo, quemándolo, manchándolo, mojándolo hasta desintegrarlo, etc.

Evidentemente, el delito queda consumado con la falsificación, adulteración, destrucción o desaparición de una o más inscripciones.

Según el texto penal, la condición de ser funcionario del ente registral, agrava la conducta del agente, no interesando si fue él u otro registrador quien efectuó la inscripción.

Consideramos, desde la perspectiva interpretativa, que la circunstancia agravante, no sólo debe abarcar a los registradores electorales, debiendo extenderse incluso para los funcionarios y servidores del RENIEC, ya que ellos, eventualmente también pueden cometer este delito. No es extraño ni extraordinario enterarse que existen trabajadores de dicha institución que falsifican, alteran e incluso hacen desaparecer, o destruyen las inscripciones electorales, contenidas en las partidas de inscripción y demás documentos que se encuentran en los Archivos Electorales.

La acción en este delito es eminentemente dolosa, existe conciencia y voluntad por parte del agente de falsificar, adulterar, desaparecer, o destruir la Inscripción Electoral.

La modalidad culposa no es típica (como cuando por ejemplo el agente no toma las prevenciones del caso y producto de su negligencia, ocasiona la desaparición o destrucción de la partida de inscripción).

5.1.8) OMISIÓN MALICIOSA DE LA DEPURACIÓN

Artículo 97 (D. Ley 14207).- El funcionario o empleado del Registro Electoral que omitiere efectuar la depuración del Registro, proporcionare voluntariamente datos falsos en los documentos electorales o adulterase estos, será reprimido con prisión no menor de seis meses ni mayor de dos años e inhabilitación no mayor de diez años, conforme a los incisos 1,2,3,4 y 5 del artículo 27 del Código Penal.

Las mismas penas sufrirán los que participaron en la comisión del delito indicado.

La pena será de prisión no menor de dos años ni mayor de seis, e inhabilitación absoluta por diez años si el culpable hubiese obrado con el propósito de alterar la exactitud de un proceso electoral.

La pena será de prisión no mayor de seis meses y multa no menor de cincuenta soles oro ni mayor de quinientos soles oro si el culpable hubiese obrado por negligencia.

El sujeto activo del delito es específico, sólo pueden serlo los funcionarios o empleados del RENIEC (incluso los registradores electorales). Sujeto pasivo lo será el RENIEC y el ciudadano que en su caso resulte perjudicado con la acción del agente.

Conforme a lo establecido por la ley registral electoral, la depuración del registro, es una actividad permanente de revisión y actualización de las partidas registrales, que trae como consecuencia la actualización constante y permanente subsanación de errores y defectos de las inscripciones electorales.

La acción en este delito atenta precisamente contra esta importante y vital función, desde tres perspectivas: proporcionando intencionalmente datos falsos en los documentos electorales, adulterándolos deliberadamente u omitiendo efectuar la depuración.

El tipo se agrava si el agente hubiese obrado con el propósito de atentar contra el proceso electoral, buscando alterar la exactitud de sus resultados.

El tipo admite la tentativa y también la participación (incluso el tipo señala que tanto los autores directos, como los cómplices o partícipes serán sancionados con idénticas penas)

5.1.9) SUSTRACCIÓN DE MATERIAL ELECTORAL

Artículo 98 (D. Ley 14207).- Los Registradores Electorales que extrajeran o permitiesen extraer o entregar los libros o documentos del Archivo Electoral, serán reprimidos con pena de prisión no menor de un año ni mayor de tres, e inhabilitación absoluta por diez años. La misma pena sufrirá la autoridad, cualquiera que fuese su jerarquía, que ordene la entrega o retiro de los documentos del Archivo General del Registro.

Sujeto activo de este delito lo será tanto el registrador electoral, como cualquier otro funcionario o autoridad tanto política como militar, cualquiera sea su jerarquía (sujetos cualificados). Sujeto pasivo lo será evidentemente el RENIEC.

La acción consumativa está representada en el tipo, por la conducta del sujeto activo, que personalmente extrae, permite extraer u ordena la entrega o retiro injustificado, de los libros y demás documentos del archivo electoral.

La entrega de los elementos electorales puede hacerse, para que el tercero que los recibe, oculte el documento o lo destruya, o simplemente se entere de su contenido sin tener autorización o pretenda sacarle copia, etc. No interesa para los efectos de la consumación, que posteriormente el documento sustraído sea entregado o restituido a su lugar.

El tipo se representa como eminentemente doloso, el agente actúa con plena conciencia y voluntad. El empleado que recibe una orden superior de entregar tales elementos, sólo podrá ser exculpado en cuanto haya actuado reglamentariamente y dicha orden no sea notoriamente ilícita.

5.1.10) INSCRIPCIÓN FUERA DEL LOCAL DEL REGISTRO ELECTORAL

Artículo 99 (D. Ley 14207).- El Registrador Electoral que efectúe inscripciones fuera del local del Registro y los ciudadanos que obtengan en esta forma su inscripción, serán reprimidos con prisión no menor de seis meses ni mayor de dos años y multa no menor de quinientos soles oro ni mayor de cinco mil soles oro. Al Registrador se le impondrá además, inhabilitación relativa no menor de cinco años.

En Caso de que el Registrador hubiese efectuado más de diez inscripciones en la forma indicada, será reprimido con prisión no menor de un año ni mayor de cinco e inhabilitación absoluta por diez años.

Los Registradores Electorales condenados por el delito a que se refiere este artículo y el anterior, quedarán además permanentemente inhabilitados para el desempeño de cargos electorales.

El sujeto activo en este delito es cualificado, sólo podrá serlo el registrador electoral. Sujeto pasivo lo será el RENIEC.

En el tipo en estudio la acción consumativa está representada por la actitud del registrador electoral, que antirreglamentariamente, y sin contar con autorización, efectúa inscripciones en lugar distinto al local del RENIEC. Así apreciado, el tipo adquiere naturaleza de uno en blanco, ya que requiere complementar el carácter ilícito, acudiendo a la normatividad registral electoral, para precisar en que circunstancia se presenta la ilegitimidad del acto registral.

No interesa en este supuesto típico, que la persona que se inscribe cuente con todos los requisitos legales y le asista el derecho a la inscripción, lo antijurídico de la acción está representado por la trasgresión de parte del registrador, de normas reglamentarias que le impiden, si no es autorizado para ello, abandonar las instalaciones de la oficina registral, portando los elementos electorales, con la finalidad de realizar una o más inscripciones.

La ley establece al respecto, que los ciudadanos que obtengan en esta forma su inscripción, serán reprimidos con la pena del autor (determinación legal que se ajusta al concepto de la complicidad). Pero si el ciudadano fue engañado o desconocía la prohibición, puede ampararse en el error de tipo o de prohibición que pueda presentarse al efecto.

El tipo se agrava ante la multiplicidad de inscripciones en esta forma realizadas, ya que se evidencia mayor daño al bien jurídico.

La acción es eminentemente dolosa (dolo directo). La forma culposa es atípica.

5.1.11) RETENCIÓN O DESAPARICIÓN DE MATERIAL ELECTORAL POR EMPLEADOS POSTALES

Artículo 100 (D. Ley 14207).- El funcionario o empleado de Correos que intencionalmente retuviere o hiciere desaparecer los libros y demás documentos del Registro Electoral que se remitan de un lugar a otro de la República será reprimido con arreglo al artículo 362 del Código Penal.

La referencia normativa integrada en el tipo, remitía a los delitos propios de "empleados postales o de telégrafos", tipificados en el artículo 362 del Código derogado de 1924. Actualmente no tiene representatividad típica específica en el Código Penal vigente.

El sujeto activo en este delito es específico y sólo lo será el funcionario o empleado de correos. Sujeto pasivo lo será el RENIEC.

La acción típica está representada en este caso, por la actitud abusiva del funcionario o empleado de la oficina de correos que intencionalmente retuviere o hiciere desaparecer los documentos y demás elementos electorales propios de la función

registral, que por motivo de la función deban ser trasladados de un lugar a otro de la República.

Somos del parecer que debería incluirse como circunstancia agravante, si el agente hubiere realizado ello con la intención de perjudicar o alterar el proceso electoral.

Asimismo, consideramos adecuado la tipificación de la conducta culposa, sancionándose al agente, cuando la retención o desaparición del material electoral se ocasione como consecuencia de la actitud negligente o imprudente del agente.

El tipo en estudio es eminentemente doloso, el agente actúa con plena conciencia y voluntad.

5.1.12) RESPONSABILIDAD DEL FUNCIONARIO DEL REGISTRO ELECTORAL

Artículo 101 (D. Ley 14207).- El funcionario que no cumpla con las obligaciones que le señala este Decreto Ley, será penado con arreglo al artículo 338 del Código Penal.

Referencia normativa que adscribe responsabilidad penal, al funcionario electoral, que incumple sus obligaciones reglamentarias (en cuyo caso sería imputado por delito de omisión, rehusamiento o retardo de actos oficiales, Art. 338 del C.P. de 1924; y en igual sentido Art. 377 del C.P. vigente).

5.2) DELITOS CONTRA LA INSCRIPCIÓN DE AGRUPACIONES POLÍTICAS Y/O CANDIDATOS

Ninguna otra especialidad ni rama del Derecho se ocupa sistemáticamente de los sujetos o protagonistas del derecho electoral, que son principalmente: el ciudadano singularmente considerado como titular de derechos políticos y particularmente del derecho del sufragio; y la masa de los ciudadanos, considerados como cuerpo electoral y que para participar en las justas electorales requieren asociarse constituyendo partidos o agrupaciones políticas (conf. Hernández Becerra, 1989).

Adquiere así fundamental preponderancia la existencia de estas agrupaciones políticas, que adquieren personería electoral en cuanto cumplen los requisitos exigidos en la ley electoral y formalizan su inscripción ante el Jurado Nacional de Elecciones.

Entre estos requisitos está el acreditar un número mínimo de adherentes ante el ente electoral, tanto para la inscripción del partido o agrupación política y los mismos candidatos en su caso.

Es así que en el desarrollo del proceso de su acreditamiento, es posible afectar el derecho del ente colectivo y de los ciudadanos (tanto de los que componen la asociación política como del resto del conglomerado social). Así, es posible que con la intención de beneficiar ilegítimamente a la agrupación o partido político, se atente contra la libertad y el derecho de participación política de los ciudadanos y su libre decisión de adhesión o pertenencia.

Observamos que en cuanto a estas modalidades de acción, nuestra ley vigente no introduce un tratamiento adecuado, resultando muy exigua su tipificación, no obstante la importancia que el tema merece. Algunas leyes electorales incluyen dentro de los delitos electorales, las actuaciones de los partidos políticos que vulneren lo establecido por la ley en relación con las limitaciones fijadas para los gastos electorales, considerando responsables de estos delitos a los administradores de la institución electoral.

En igual sentido, deberían considerarse como actos punibles, las trasgresiones a la actividad democrática e institucional al interior de las propias organizaciones políticas

5.2.1) COACCIÓN POR FUNCIONARIO O SERVIDOR PÚBLICO PARA SUSCRIBIR LISTA DE ADHERENTES

Artículo 385 (LOE).- Son reprimidos con pena privativa de la libertad no menor de dos años ni mayor de seis y pena no mayor de treinta días de multa, así como con pena accesoria de inhabilitación por igual tiempo al de la condena, de conformidad con los incisos 1), 2), 3) y 4) del artículo 36 del Código Penal:

a) Las autoridades políticas, militares, policiales, municipales y los funcionarios o empleados públicos que, abusando de sus cargos, obliguen a un elector a firmar una lista de adherentes a un partido político o para la presentación de una candidatura, o en favor o en contra de determinado partido, lista o candidato, o los que realicen algún acto que favorezca o perjudique a determinado partido o candidato.

El tipo reclama en su estructura, a un sujeto activo cualificado o específico. Sólo pueden serlo las autoridades políticas (por elección, designación o nombramiento), los miembros de la Fuerzas Armadas, los miembros de la Policía Nacional, las autoridades municipales (incluidos los serenos) y los funcionarios y servidores públicos. Sujeto pasivo lo será el ciudadano sobre el cual recae el acto de coacción e incluso el Estado.

La conducta típica está representada en el tipo, por el verbo "obligar", que denota imposición, coacción, afectación de la libertad individual de decisión, de libre participación y adherencia que tiene el ciudadano para integrar o favorecer determinada posición política, agrupación o candidatura.

Lo injusto radica en la conducta impositiva del agente, que trasgrediendo el marco de su obligación reglamentaria y evidenciando abuso de su cargo o función, realiza cualquiera de las modalidades delictivas que el tipo contiene:

1) Coaccionar a uno o más electores, a firmar como adherentes para la inscripción de una agrupación o partido político o candidatura, o para favorecerlo o perjudicarlo. Conducta que involucra afectación a la libertad individual de libre determinación del elector. La modalidad de la acción, que es eminentemente comisiva, admite la utilización de la amenaza e incluso la violencia (u otras modalidades más sutiles, que incluso pueden incluir el fraude, el engaño, la explotación de las carencias sociales, etc. Como por ejemplo aprovecharse de la necesidad y la pobreza, para hacer firma al ciudadano, por una candidatura que no es de su preferencia, prometiéndole o dándole un kilo de fréjoles o aceite, etc.). .

2) Realizar algún acto que favorezca o perjudique a determinado partido o candidato, que involucre una diversidad de conductas, como por ejemplo, favorecer la campaña electoral de unos y entorpecer la de otros. Prohibir en un caso y autorizar en otro el uso de las plazas públicas, realizar campañas de propaganda, valerse de los medios y fondos públicos, repartir con fines electoreros alimentos o ropas donados, etc.

Las acciones descritas involucran la presencia del dolo (directo). Es posible la tentativa y la participación delictiva, en cuanto sean los mismos sujetos intraneos quienes participen en la acción.

La pena a imponerse es privativa de la libertad no menor de dos años ni mayor de seis y pena no mayor de treinta días de multa, así como la pena accesoria de inhabilitación por igual tiempo al de la condena, de conformidad con los incisos 1), 2), 3) y 4) del artículo 36 del Código Penal:

- 1) Privación de la función, cargo o comisión que ejercía el condenado, aunque provenga de elección popular.
- 2) Incapacidad para obtener mandato, cargo, empleo o comisión de carácter público.
- 3) Suspensión de los derechos políticos que señale la sentencia.
- 4) Incapacidad para ejercer por cuenta propia o por intermedio de tercero, profesión, comercio, arte o industria, que deben especificarse en la sentencia.

6) ACCIONES DESTINADAS A PERTURBAR O IMPEDIR EL ACTO DE SUFRAGIO

El sufragio canalizado mediante el acto electoral, que en sí es todo un proceso de carácter administrativo-electoral, se constituye en la expresión suprema del ejercicio de la

ciudadanía y los derechos políticos, que el estado está en el deber de proteger como atributo jurídico de protección.

Así, nuestra carta magna, establece como un derecho ciudadano, el "derecho de participación política", facultando al ciudadano a ser elegidos y elegir libremente a sus representantes y a participar en los asuntos públicos a través del referéndum, iniciativa legislativa, remoción de funcionarios públicos, revocación de autoridades elegidas, rendición de cuentas, cabildos abiertos y juntas vecinales, correspondiendo a la ley regular y promover los mecanismos directos e indirectos de participación.

En tal sentido, señala García Toma (op. cit. p. 23), se trataría de la potestad o prerrogativa perteneciente al ciudadano, que le permitiría participar en la designación de las autoridades públicas y formar parte de la decisión de algún asunto de interés político u opinión sobre aspectos sustantivos carácter administrativo o político. Esta tesis surge de manera concomitante con la doctrina de la soberanía popular, desarrollada en los siglos XVII y XVIII. En atención a ello, la soberanía se encontraría dividida en partes iguales entre todos los ciudadanos, que tendrían el derecho a contribuir con su voto en la expresión de la voluntad general. Así, cada individuo, al ser titular de una fracción de la soberanía del pueblo, tiene la atribución de colaborar en la organización del gobierno.

En atención a ello, las acciones, tanto de coacción, violencia o fraude, que atenten contra el proceso del acto electoral (sea como manifestación individual o como expresión colectiva de la voluntad popular), deben estar tipificados en la ley penal. Considerando al respecto, que por su naturaleza y especialidad, deberían conformar un sistema normativo propio, interconectado y nutrido por la ley penal fundamental (Código Penal), pero

legislado en la ley electoral, para lo que incluso se propugna la necesidad de un Código Electoral.

En cuanto a su contenido, la protección de la libertad del sufragio no puede reducirse a vejaciones en la persona del elector, sino extenderse hasta la tutela de todas las garantías que deben complementarse en el momento en que se materializa la voluntad colectiva. Pero no bastaría la protección de la libertad electoral dado el supuesto de que no estuvieran tutelados, al mismo tiempo, todos los caracteres esenciales del sufragio, en su concepción doctrinal contemporánea, los avances tecnológicos y la realidad nacional. Así, junto a la libertad individual o colectiva de los electores, deben protegerse también la sinceridad, la individualidad y el secreto del sufragio.

Otros elementos que no deben ser perdidos de vista, son los que corresponden al incremento, cada vez más fundamental, del uso de los medios técnicos modernos y en especial la informática, que adicionan nuevas modalidades de manipulación o fraude, que pueden perjudicar la esencia del acto electoral, ya no con la violencia propia de antaño, donde en tropelía y bajo la motivación del "pisco y la butifarra", se atacaba impunemente los locales de votación o cuando el ejercito tomaba las ánforas y todos los "cachaquitos", en su cuartel, llenaban nuevamente las cédulas para inclinar la balanza al dictador candidato.

Ahora es diferente la posibilidad de la manipulación de la voluntad popular, es posible el fraude computacional, ello debido a la dependencia cada vez más notoria del uso de las computadoras para vaciar los resultados parciales de la elección, para que sea el ordenador el que proporcione los resultados finales. Ante ello el atentado puede presentarse manipulando dichos ordenadores, que por más secreta que sea su locación,

no deja de existir el factor humano de los operadores, que motivados por la corrupción, la amenaza o el chantaje, pueden acceder, a veces de manera indetectable, para falsear el resultado electoral.

Ante ello, nos dice Tiedemann (1999, p. 344), que la tarea del derecho no es la de quedarse atado a viejas categorías teóricas que nada sirven sino más bien de adaptarse y proveerse de nuevas formas de prevención y protección a la sociedad. El derecho penal debe también prevenir la comisión de este tipo de hechos que de ninguna manera pueden ser entendidos como errores involuntarios ya que son realizados por personas que generalmente están familiarizadas y se encuentran especializadas en el trabajo con computadoras y que fácilmente pueden conocer como entrar en los archivos de datos de cualquier individuo o institución.

El derecho penal debe resguardar los intereses de la sociedad, evitando manipulaciones computarizadas habituales o no basadas en conocimiento de los objetos, programas, así como de algunas informaciones que extiendan y hagan imposible la detección de estos ilícitos (el desarrollo actual y moderno nos ha traído avances importantes para la humanidad, pero es penoso a su vez que vengan acompañados de hechos delictivos no deseados) (loc. cit).

Así, nuestra normatividad penal en materia electoral ha sufrido un estancamiento histórico, no ha evolucionado con la rapidez del desarrollo contemporáneo de los actos delictivos tendientes a materializar la coacción y el fraude destinados a la frustración o distorsión de la libertad del sufragio. Nuestro ordenamiento jurídico debe prepararse normativamente, para afrontar estos tipos de "nuevos" delitos de "avanzada", sobre todo

en el ámbito informático, máxime ahora que se postula la utilización del voto electrónico, requiriéndose una respuesta normativa.

En igual sentido, la nefasta experiencia vivida en la década de la dictadura fujimontesinista, ha denotado la debilidad de nuestro sistema normativo, para enfrentar toda la vasta gama de delitos que con "tanta imaginación" ("imaginación maquiavélica" diríamos), supieron implementar desde las instancias del poder político(constituyendo a nuestro sistema, como "fuente" y "exportador" de nuevas maneras y modos de torcer la voluntad ciudadana). Tales como los actos de corrupción, compra de conciencias, compra de líneas editoriales, connivencia, chantaje o extorsión para doblegar voluntades, dádivas (como el regalo de comida, ropa donada y en algunos casos joyas y dinero o prebendas políticas), manipulación psico social, falsificación de firmas, uso de los recursos del Estado y la fuerza pública, intervencionismo de las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional, impedimento del uso de señales abiertas de televisión, manipulación de las noticias, manipulación de encuestas, homicidios y asesinatos, etc.

Por todo ello, urge una revisión y toma de conciencia, que derive en la implementación de un nuevo cuerpo normativo electoral, que contenga in extensu la tipificación de todos los actos vulnerantes del fundamental derecho a la libertad de sufragio.

Nosotros pasaremos al estudio de las diferentes modalidades típicas vigentes, que se insertan tanto en el Código Penal, como en la Ley Orgánica de Elecciones, desde la perspectiva de la clasificación ya esbozada y nombrándolas con sus respectivos nomen iuris que la interpretación teleológica y sistemática nos ha permitido identificar.

6.1) TURBACIÓN VIOLENTA DE PROCESO ELECTORAL

En esta modalidad delictiva se evidencia la duplicidad normativa ya criticada. Así, la acción se encuentra tipificada en las siguientes normas:

Artículo 354 (CP).- El que, con violencia o amenaza, perturba o impide que se desarrolle un proceso electoral general, parlamentario, regional o local, será reprimido con pena privativa de libertad no menor de tres ni mayor de diez años.

Artículo 382 (LOE).- Son reprimidos con pena privativa de la libertad no menor de un mes ni mayor de un año:

b) Aquél que trate de conocer el voto de un elector o de obligarlo a votar por determinado candidato u **obstruya el desarrollo de los actos electorales, o provoque desórdenes durante éstos.**

Artículo 384 (LOE).- Son reprimidos con pena privativa de la libertad no menor de un año ni mayor de tres años:

b) Aquél que mediante violencia o amenaza interrumpe o intenta interrumpir el acto electoral. Si el culpable forma parte integrante de un grupo, la pena es no menor de dos años ni mayor de cinco.

Si el culpable fuese funcionario o empleado público, además de la pena indicada sufre pena accesoria de inhabilitación por igual tiempo al de la condena, de conformidad con los incisos 1), 2), 3) 4) y 8) del artículo 36 del Código Penal.

El sujeto activo de la acción se presenta como genérico, pudiendo ser cualquier persona, que puede actuar individualmente o como miembro integrante de una agrupación (aunque eventualmente actúe sólo). En este último caso la conducta se agrava. Igualmente pueden ser sujetos activos en este delito, los miembros de las Fuerzas Armadas o Policía Nacional y los funcionarios o empleados públicos (caso en el cual la conducta se agrava). Sujeto pasivo lo será el Estado.

En este delito se ataca el acto electoral mismo, en el sentido de proceso y no la individualidad manifestada en la libertad propia del derecho de sufragio como expresión de la voluntad particular.

En este supuesto, el agente utiliza como medio para la perturbación o impedimento del acto electoral, la violencia física o la amenaza.

La violencia implica el despliegue de su propia fuerza física o material, contra el cuerpo del elector. El concepto jurídico de violencia, conocida ya por el derecho romano como *vis absoluta* o *vis corporalis*, involucra, como indica Roy Freyre (1983, p. 76) que el agente actúe físicamente sobre el soma de la víctima con la finalidad de obligarle a permitir, o dejar de hacer, lo que su voluntad no desea. En la hipótesis estudiada, la violencia consiste en el empleo de medios materiales para anular o quebrantar la resistencia que ha sido ofrecida por la víctima, para cumplir con su deber de participación política.

No es cualquier violencia la que requiere el precepto que comentamos, debe ser de cierta intensidad y amenaza para la vida o salud de las personas (Peña Cabrera, 1995, p. 149). Por lo que respecto al nivel cuantitativo que debe alcanzar la violencia par

alcanzar el fin propuesto por el agente, nos refiere Muñoz Conde (1966, p. 340) hay que tener en cuenta las circunstancias del caso concreto, la fuerza física que haya que desplegar, etc. Entonces no toda violencia resultará típica. ella ha de tener una adecuada potencialidad, que lleve aparejada cierta eficacia sobre el sujeto pasivo, debiendo ser suficiente su intensidad para quebrantar su legítima libertad de participar en el acto electoral. La violencia física no necesariamente debe recaer sobre el elector a cual se coacciona, puede verificarse incluso sobre terceros (ejemplo: lesionar a la madre para que el elector no sufrague).

Por otro lado, la amenaza, traducida en intimidación, constituye el sucedáneo psicológico de la violencia física. Esta forma de violencia moral era conocida en el derecho romano como vis compulsiva. A ella se refiere la ley de elecciones de Uruguay al referirse a la "violencia moral" ejercida en el sentido de impedir, coartar o estorbar en cualquier forma el ejercicio libre y personal del sufragio (Ley de Elecciones, Art. 191.5)

Esta amenaza, desde la perspectiva típica, se constituye en un anuncio del propósito de causar un mal inminente, capaz de poner en peligro la vida o integridad física de la víctima (o de un tercero especialmente ligado a él), tendiente a evitar o perturbar el acto electoral, intimidando a los sufragantes. Violencia que a decir de Antón Vives, se constituye en el medio capaz de vencer la voluntad contraria del o los sujetos (electores) contra los que se dirige, y provocar inmediatamente el efecto distorsionador o impeditivo que busca el agente, con respecto a la realización del acto electoral (1990, p. 827).

Esta forma de intimidación es fundamentalmente subjetiva, y está dirigida directa e intencionalmente a quebrantar la voluntad de la víctima. Tiene como característica, a decir de Roy Freyre, ser: determinada, considerable, seria, posible e inminente. Sin embargo,

anota Irureta Goyena, la gravedad de la amenaza debe entenderse en un sentido muy relativo. Su mayor o menor trascendencia depende de factores variables relacionados con el sexo, con la edad, con la psicología de la víctima y que el buen sentido prescribe se dejen librados a la soberana apreciación de los Tribunales (1913, p. 321).

Al igual que en el caso de la violencia física, la amenaza puede dirigirse directamente contra el titular del bien jurídico o contra un tercero (amenazar la vida de la esposa, la madre, etc.). En esta modalidad, que resulta una forma indirecta, el mal amenazado tiene como destinatario a una tercera persona con quien la víctima se encuentra ligado por lazos de grande y especial afecto, familiares o no.

En el ámbito del derecho comparado, encontramos que el Código Electoral Belga (Artículo 190) sanciona toda irrupción en un colegio electoral, consumada o intentada violentamente, orientada a obstaculizar las operaciones electorales. En España, la Ley Orgánica 5/1985, en similar dirección castiga a quienes impidan o dificulten injustificadamente la entrada salida o permanencia de los electores, candidatos, apoderados, interventores y notarios en los lugares en que se realicen actos del procedimiento electoral, y también a quienes perturben gravemente el orden en cualquier acto electoral o penetren en los locales donde éstos se celebren portando armas u otros instrumentos susceptibles de ser usados como tales

Por su naturaleza lesiva y material, el tipo admite la tentativa y también la participación delictiva.

La acción se representa eminentemente dolosa.

En cuanto a la pena, apreciamos la criticada presencia de duplicidad de normas, que sancionan con penas distintas un mismo hecho. Por lo que reafirmamos la crítica ya establecida y consideramos que la solución debe basarse en la aplicación de lo que más convenga al reo o procesado.

6.2) IMPEDIMENTO O TURBACIÓN VIOLENTA DEL DERECHO DE SUFRAGIO

Modalidad delictiva también conocida como "**coacción electoral**", encuentra su tipificación en las siguientes normas:

Artículo 355 (CP).- El que, mediante violencia o amenaza impide a un elector ejercer su derecho de sufragio o le obliga a hacerlo en un sentido determinado, será reprimido con pena privativa de libertad no menor de uno ni mayor de cuatro años.

Artículo 382.- Son reprimidos con pena privativa de la libertad no menor de un mes ni mayor de un año:

b) Aquél que trate de conocer el voto de un elector o de **obligarlo a votar por determinado candidato** u obstruya el desarrollo de los actos electorales, o provoque desórdenes durante éstos.

En este caso se presenta la anomalía legislativa de duplicidad de normas (que vulnera el principio de la certeza de la norma), que ya criticáramos, que en la práctica determina un concurso de leyes, que en realidad no se excluyen, por lo que la tipificación y la determinación de la pena por el operador penal se ve dificultada (máxime si para una misma conducta se señalan penas diferentes). En este supuesto, la solución no radica en

la aplicación de los principios del concurso, ni de la aplicación temporal de la ley, sino apelando al fundamental principio constitucional de estar a lo que mas favorece al reo o procesado.

La figura de coacción electoral, nos dice Carlos Pérez, protege la libertad individual del sufragante (ob. cit., p. 272). La acción delictiva consiste en impedir al elector el ejercicio del sufragio, o compelerlo mediante violencia (vis absoluta) o amenaza (vis compulsiva) a que lo haga en un sentido determinado. Así el agente puede optar por diversas modalidades de acción, que incluso pueden afectar la libertad personal, el cuerpo y la salud (con cuyos ilícitos es posible el concurso), puede atar, encerrar, llevar a la inconciencia, drogar, amenazar de muerte (incluso a terceros ligados al elector, como su madre, hija, etc) (al respecto, la ley electoral uruguaya establece: Art. 191: Son delitos electorales; 5): "La violencia física o moral ejercida en el sentido de impedir, coartar o estorbar en cualquier forma el ejercicio libre y personal del sufragio"). En Francia, el artículo 107 del Código Electoral penaliza al que, bien atemorizando a un elector, bien amenazándole o violentándole, intente influenciar su opción de voto o lograr su abstención. El Código Penal Alemán prescribe que "quien con violencia o por medio de amenaza de violencia impida o perturbe la elección o la verificación de un resultado, será castigado con pena privativa de la libertad hasta de cinco años o con multa, en casos especialmente graves con pena privativa de la libertad no inferior a un año" (artículo 107).

Esta modalidad de coacción, se nutre de los fundamentos doctrinales de la coacción genérica, que como delito contra la libertad, contiene la ley penal general. Este delito, conforme lo precisa Prats Canut (en: Quintero Olivares, 1996, p. 197), es uno de conducta y resultado, no de mera actividad, que lesiona la libertad de determinarse y obrar de una persona según sus propios motivos, cuyo bien jurídico protegido es la

facultad de libre determinación de la voluntad y de expansión de la misma, al que si bien se le ha atribuido un dolo específico de atentar contra la libertad de obrar del ofendido, se ha considerado suficiente el dolo genérico o intención simplemente maliciosa del agente, cuya generación delictual requiere la amplia interpretación del término modal "violencia".

Tanto para la figura genérica como para esta modalidad especial, es posible apreciar, como bien lo hace Peña Cabrera (1994, T.I, p. 510), que el delito de coacciones constituye en verdad un **tipo abierto** ya que la descripción de la conducta típica está sujeta a las apreciaciones valorativas que hace el juez, y precisamente su contenido y amplitud ha sido motivo de una interesante evolución en los últimos años. Se ha dicho que el delito de coacción es un resultado de elaboración de la ilustración penal alemana e incluso se cuestiona su naturaleza constitucional debido a su amplitud valorativa. Las objeciones entonces radican en su carácter abierto, pero realmente tratándose de esta infracción penal una precisión matemática no es posible en razón de que el precepto revela un genuino "tipo de recogida" y cuyo significado apunta a incorporar conductas que otros tipos no logran cubrir, este es el caso del robo, extorsión, usurpación, etc.

El sujeto activo es genérico (puede ser cualquiera incluso funcionario público o miembro de las Fuerzas Armadas o Policía Nacional, en cuyo caso será de aplicación la agravante contenida en los artículos 46-A y 360 del C.P.).

El diccionario de la Real Academia trae dos acepciones del verbo impedir: la de imposibilitar y la de estorbar. Esta supone, según Barcia, con más propiedad un obstáculo indirecto y a veces una mera dificultad u obstáculo. El tipo al emplear como verbo rector el término "impedir", supone la acción decidida de hacer imposible el voto. Así, los

obstáculos posibles de poderse superar o vencer, no entran en la prohibición, resultando atípicos.

El acto de obligar denota ideas de poder y de fuerza, de imposición sobre el consentimiento, que por lo mismo, se manifiesta viciado. La coacción en que se coloca al elector debe determinarlo desde una perspectiva, seria, posible, potente, cierta a obrar en contra de la corriente política o candidato de su preferencia (Nadie puede considerarse ofendido si se le induce a cumplir sus propios propósitos, siendo así la conducta atípica). En tal sentido se descarta el animus jocandi o cualquier otra circunstancia no potencialmente suficiente para lograr el "constreñimiento al sufragante" del cual nos habla el Código colombiano (Artículo 387). El sujeto activo ha de exteriorizar su propósito de un modo que haga creer al sujeto pasivo que es real, serio y persistente, independientemente de la forma que se use para su exteriorización. No es preciso, sin embargo que ese propósito piense realizarlo realmente el sujeto activo, basta con que aparentemente pueda considerarse como tal por parte del sujeto pasivo. Es necesario, por tanto, que la amenaza llegue a conocimiento del amenazado, aunque sea por vía indirecta, y que éste comprenda el sentido de la amenaza. De aquí se deduce que hay que tener en cuenta las circunstancias del hecho (Muñoz Conde, 1996, p. 142).

El análisis de las diferentes normas que contienen el tipo en estudio, permite, conforme a una interpretación teleológica y sistemática, inferir que las modalidades de acción (violencia o amenaza), no permiten incluir los actos defraudatorios, como el caso de usar el engaño con la finalidad de impedir el sufragio o imponerse a la voluntad del elector obligándolo a votar en un sentido determinado diferente al deseado.

No obstante ello, el tipo debería incluir también como modalidad de acción, el engaño (en el sentido del fraude inductivo, material o subliminal), que también vicia la voluntad en el sentido reclamado por el tipo (también el amenazar a la víctima (aprovechando su pobreza) con excluirlo de beneficios alimenticios, no darle ropa, etc.). Se establece en doctrina que el medio aceptado para consumir este delito es doble: el empleo de la violencia sobre el elector y el engaño.

Así, el Código penal argentino indica en su artículo 140: "Se impondrá prisión de dos meses a dos años al que con engaños indujere a otro a sufragar en determinada forma o abstenerse de hacerlo". En igual sentido, el artículo 388 del Código penal colombiano establece: "El que mediante maniobra engañosa, obtenga que un ciudadano o a un extranjero habilitado por la ley, vote por determinado candidato, partido o corriente política, o lo haga en blanco, incurrirá en prisión de uno a cuatro años". De modo similar, el artículo 152 de la Ley Electoral portuguesa penaliza con prisión de seis meses a dos años a quien usare de la violencia o amenaza sobre cualquier elector, o usare de engaño o artificios fraudulentos, falsas noticias o cualquier otro medio ilícito para constreñir o inducir a votar una determinada lista o abstenerse de votar. También

La legislación comparada permite incluso inferir, que el tipo ganaría en precisión si además de la exigencia típica objetiva de constreñir al elector a no sufragar o a hacerlo de manera distinta a su elección (que implica el voto en blanco), se incluya también la posibilidad de que la víctima se viera constreñida a abstenerse de cumplir con su obligación electoral (ello en atención al carácter obligatorio del voto).

Una modalidad agravante podría ser también el caso de la afectación de una multiplicidad de víctimas (por ejemplo, amenazando al chofer, el camión que transportaba a los veinte votantes, es desviado de su ruta y no llegaron a su local de votación).

En la modalidad de coacción para que vote en determinado sentido, el delito se consuma cuando el elector ha depositado su cédula de votación en el ánfora electoral (si llenó su cédula así constreñido, pero no la depositó, el hecho no se habrá consumado, presentándose la tentativa). Tratándose de la modalidad de impedimento, el hecho se consuma en el momento en que termina el acto electoral y el elector se vio impedido de votar (mientras dure el acto electoral se mantendrá latente la posibilidad de poder llegar a ejercer su derecho. Por ejemplo en el caso de aquél que fue atado para no llegar a su local de votación, pero logra desamarrarse y llega a tiempo pudiendo sufragar. En este caso el agente no habrá objetivamente logrado impedir el voto, quedando su conducta en fase de tentativa).

Siendo el tipo de naturaleza lesiva y material, como se ha podido apreciar, es posible la tentativa. Se admite también la participación.

Desde la perspectiva subjetiva, el tipo se representa como eminentemente doloso.

Con respecto a la duplicidad de pena, nos pronunciamos en el sentido de estar a lo que más favorece al reo o procesado.

6.3) IMPEDIMENTO O PERTURBACIÓN DE REUNIONES POLÍTICAS

Artículo 384 (LOE).- Son reprimidos con pena privativa de la libertad no menor de un año ni mayor de tres años:

d) Aquél que impida o perturbe una reunión en recinto privado o la que se realice en lugar de uso público, convocada con fines electorales conforme al artículo 354 del Código Penal.

Si el culpable fuese funcionario o empleado público, además de la pena indicada sufre pena accesoria de inhabilitación por igual tiempo al de la condena, de conformidad con los incisos 1), 2), 3) 4) y 8) del artículo 36 del Código Penal.

Conforme lo precisa Peña Cabrera (1994, T. I, p. 623), no puede hablarse de soberanía del pueblo ni de forma republicana de gobierno sin antes reconocer y garantizar como presupuesto el derecho de los ciudadanos a reunirse.

El derecho de reunión es una consecuencia de la libertad de pensamiento y de la libre locomoción. En efecto, la libertad de pensamiento y la libertad de moverse serían ilusorias si por otro lado los individuos estuviesen impedidos de congregarse para expresar sus ideas. En suma, sin libertad de reunión no existe libertad política.

Tal prerrogativa ciudadana es reconocida por la Carta Magna, cuando, como garantía y derecho fundamental de la persona, el artículo 2, inciso 12 de nuestra Constitución, establece que toda persona tiene derecho a reunirse pacíficamente sin armas. Las reuniones en locales privados o abiertos al público no requieren aviso previo. Las que se convocan en plazas y vías públicas exigen anuncio anticipado a la autoridad, la que puede prohibirlas solamente por motivos probados de seguridad o de sanidad

públicas (asimismo nuestra ley electoral (LOE), en sus artículos 190 establece que desde dos días antes del día señalado para las elecciones no pueden efectuarse reuniones o manifestaciones públicas de carácter político. Desde veinticuatro horas antes se suspende toda clase de propaganda política).

Asimismo, el artículo 184 (LOE), prescribe que las oficinas públicas, los cuarteles de las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional, los locales de las Municipalidades, los locales de los Colegios Profesionales, Sociedades Públicas de Beneficencia, entidades oficiales, colegios y escuelas estatales o particulares y los locales de las iglesias de cualquier credo, no pueden ser utilizados para la realización de conferencias, asambleas, reuniones o actos políticos de propaganda electoral de ninguna especie en favor o en contra de cualquier partido, candidato o tema por consultar, o para la instalación de juntas directivas o el funcionamiento de cualquier comité de tendencia política.

El objeto de tutela, como bien aprecia Villa Stein, es la libertad de reunión pacífica e inermes de los ciudadanos (1998, I-B, p. 164). Con la inclusión de un tipo de esta naturaleza, el ordenamiento tiende a preservar intangible el inalienable derecho ciudadano de libre reunión con fines de realización de la libertad política.

La acción, que se manifiesta fundamentalmente comisiva, se relaciona, conforme el mismo tipo lo señala y remite, a las formas de impedimento o turbación del proceso electoral (Art. 354 del C.P., ya tratado).

El sujeto activo es genérico. El delito incluso puede ser cometido por miembros de las Fuerzas Armadas o Policía Nacional, empleados y funcionarios públicos, caso en el

cual la conducta se agrava. Sujeto pasivo lo será individualmente el ciudadano afectado en su derecho.

En este supuesto delictivo, la conducta del agente se dirige específicamente al impedimento o turbación de una reunión, sea en recinto privado o en lugar de uso público, convocada con fines electorales. Los medios de ejecución son también la violencia y la amenaza (en el sentido y en el contexto ya estudiado en el tipo de impedimento o turbación de proceso electoral).

El tipo subjetivo está representado con el dolo (directo) con el que el agente actúa al impedir o perturbar la reunión política. Asimismo, el tipo integra dentro de la perspectiva psicológica, una motivación especial en el agente, que es la especial motivación de dirigir su conducta a perturbar o impedir el contexto del proceso electoral (p.ej. organizar mítines paralelos, infiltrar contramanifestantes, lanzar piedras, utilizar armas, etc.).

El delito se consuma en el momento en que la reunión es impedida o perturbada. El tipo admite la participación delictiva y es posible la configuración de la tentativa (como cuando el grupo de contramanifestantes, ingresa a la plaza pública con la firme intención de dispersar a los opositores políticos reunidos, pero inmediatamente son repelidos por la policía que ya había sido puesta sobre aviso)

La pena a imponerse es privativa de la libertad no menor de un año ni mayor de tres años. Si el culpable fuese funcionario o empleado público, además de la pena indicada sufre pena accesoria de inhabilitación por igual tiempo al de la condena, de conformidad con los incisos 1), 2), 3) 4) y 8) del artículo 36 del Código Penal.

- 1) Privación de la función, cargo o comisión que ejercía el condenado, aunque provenga de elección popular.
- 2) Incapacidad para obtener mandato, cargo, empleo o comisión de carácter público.
- 3) Suspensión de los derechos políticos que señale la sentencia.
- 4) Incapacidad para ejercer por cuenta propia o por intermedio de tercero, profesión, comercio, arte o industria, que deben especificarse en la sentencia.
- 8) Privación de grados militares o policiales, títulos honoríficos u otras distinciones que correspondan al cargo profesión u oficio del que se hubiese servido el agente para cometer el delito.

6.4) REALIZACIÓN INDEBIDA DE PROPAGANDA ELECTORAL

Artículo 389 (LOE).- Es reprimido con pena privativa de la libertad no menor de dos años aquél que haga propaganda electoral, cualquiera que sea el medio empleado, en las horas en que está suspendida; o aquél que atente contra la ley, las buenas costumbres, o agravia en su honor a un candidato o a un partido.

La propaganda ha adquirido en los procesos electorales una importancia decisiva. Se trata de una actividad lícita que, por su influencia en la selección de los gobernantes y autoridades, requiere una adecuada regulación y protección. La propaganda es una actividad que persigue ejercer influencia en la opinión pública y en la conducta de la sociedad, con el fin de que adopte determinadas conductas. En otras palabras, por propaganda se entiende el conjunto de acciones que, técnicamente elaboradas, utilizando principalmente los medios de comunicación colectiva, pretenden influir en determinados grupos humanos para que éstos actúen de cierta manera (Gonzalez LLaca, 1981, p. 35).

Los medios básicos de la propaganda consisten pues, en una técnica o medio de comunicación que surge de estudios, investigaciones, hipótesis, encuestas, etc., con una finalidad muy clara: influir en determinado grupo social. En síntesis, es un medio o técnica de comunicación para influir colectivamente (Landa Arroyo, 1981, p. 546).

En algunos países, se han dictado regulaciones especiales en las leyes o códigos electorales, como por ejemplo en España, que define la propaganda así: "Se entiende por campaña de propaganda electoral el conjunto de actividades lícitas organizadas o desarrolladas por los partidos, las federaciones, las coaliciones, las agrupaciones de electores y los candidatos en orden a la captación de sufragios (Art. 137 del Real Decreto -Ley de 18 de marzo de 1977, sobre Normas Electorales). Por su parte, el Tribunal Supremo de Elecciones afirmó que: "Resulta fácil para cualquiera darse cuenta de que una publicación es propaganda político-electoral, cuando se pondera o se combate a uno de los partidos políticos que participan en la contienda electoral, o se pondera o se combate a uno de sus candidatos. Si una publicación se reitera en forma sistemática e inclusive se cita en forma continua el nombre de un candidato o de su partido, no cabe duda que se trata de propaganda político-electoral.

Tanto la Constitución española, como la jurisprudencia del Tribunal Electoral Costarricense definen la propaganda: la primera, como el conjunto de actividades lícitas de los partidos políticos y otras organizaciones y candidatos para captar votos; y el segundo, entre otras cosas, como la ponderación o combate de una persona, publicada en forma sistemática. Es obvio que con el fin de obtener votos a favor y que el partido contrario no los consiga.

En suma, cabe concluir que la propaganda política o político electoral, es concebida como el conjunto de actos de partidos políticos o de personas que tienen como fin persuadir al electorado en determinado sentido para obtener votos (conf. Landa Arroyo, ob. cit. p. 549),

Considerada así su licitud, pertinencia e importancia, la propaganda electoral es materia de tratamiento legislativo en nuestra ley electoral (LOE), cuyo Título VIII: De la Propaganda Electoral, en sus disposiciones más importantes y relacionadas con el tema, señala:

En cuanto a la propaganda política permitida, (artículo 186), que los partidos, agrupaciones independientes y alianzas, sin necesidad de permiso de autoridad política o municipal y sin pago de arbitrio alguno, pueden:

- a) Exhibir letreros, carteles o anuncios luminosos, en las fachadas de las casas políticas, en la forma que estimen conveniente.
- b) Instalar en dichas casas políticas, altoparlantes, que puedan funcionar entre las ocho de la mañana y las ocho de la noche. A la autoridad respectiva corresponde regular la máxima intensidad con que puede funcionar dichos altoparlantes.
- c) Instalar altoparlantes en vehículos especiales, que gozan de libre tránsito en todo el territorio nacional, dentro de la misma regulación establecida en el inciso anterior.
- d) Efectuar la propaganda del partido o de los candidatos, por estaciones radiodifusoras, canales de televisión, cinemas, periódicos y revistas o mediante carteles ubicados en los sitios que para tal efecto determinen las autoridades municipales. Deben regir iguales condiciones para todos los partidos y candidatos.

e) Fijar, pegar o dibujar carteles o avisos en predios de dominio privado, siempre que el propietario conceda permiso escrito, el cual es registrado ante la autoridad policial correspondiente.

f) Fijar, pegar o dibujar tales carteles o avisos en predios de dominio público, previa autorización del órgano representativo de la entidad propietaria de dicho predio.

En cuanto a las prohibiciones, el artículo 187 prescribe que quedan prohibidos, como forma de propaganda política, el empleo de pintura en las calzadas y muros de predios públicos y privados, la propaganda sonora difundida desde el espacio aéreo, y la propaganda por altoparlantes que no estén ajustados a lo dispuesto en el artículo anterior. La propaganda política es permitida en los predios privados siempre y cuando se cuente con autorización escrita del propietario.

Artículo 188: Está prohibido el uso o la invocación de temas religiosos de cualquier credo, en la propaganda política.

Se prohíbe a los electores hacer uso de banderas, divisas u otros distintivos desde el día anterior al de la elección hasta un día después de ésta.

Artículo 189.- Está prohibida la destrucción, anulación, interferencias, deformación o alteración de la propaganda política cuando ésta se realice conforme a la presente ley .

Además hay que tener en cuenta la prohibición contenida en el artículo 190 (LOE), que dispone la suspensión de toda clase de propaganda política veinticuatro horas antes del día señalado para las elecciones.

La importancia que tiene la propaganda electoral orientada a dar a conocer muchas veces como producto, la personalidad de los candidatos y, en menor grado, los programas de los partidos políticos, obliga a establecer una regulación adecuada que garantice principios fundamentales del proceso electoral: el pluralismo, la libertad política y la igualdad de oportunidades de los electores y de los partidos políticos. Sin duda, la desigualdad financiera de los partidos políticos, sin la adecuada regulación, lleva a un desequilibrio en el empleo de los medios de comunicación y de propaganda, lo que se convierte en factor importante y hasta decisivo en el resultado electoral. La ventaja de un partido político, sólidamente financiado, frente a aquellos que no tienen acceso a los medios de comunicación para persuadirlos de las bondades de su programa y candidatos, no armoniza con principios democráticos de igualdad de oportunidades en los procesos electorales.

Para resolver esta desigualdad antidemocrática, surge la necesidad de establecer limitaciones importantes: imponer restricciones a los gastos electorales, controlar el financiamiento de los partidos políticos con la obligación jurídica de indicar la fuente de los ingresos, y así evitar aquellos de dudosa procedencia, desautorizar recursos privados, desproporcionados para los partidos políticos que desequilibran los procesos democráticos. Velar por la no intromisión del poder político resulta también de preponderante orden.

Al respecto nuestra ley electoral (LOE), establece (Art. 183) que dentro de los sesenta días anteriores a las elecciones, las Organizaciones Políticas, Listas Independientes y Alianzas, presentan al Jurado Nacional de Elecciones la proyección de los fondos que serán invertidos durante el proceso electoral correspondiente, así como su fuente de financiamiento. Dentro de los sesenta días posteriores a la proclamación oficial

electoral, los partidos, agrupaciones independientes, alianzas y listas independientes presentan al Jurado Nacional de Elecciones, con carácter de declaración jurada, la relación de gastos destinados a la campaña electoral correspondiente, quedando el Jurado Nacional de Elecciones facultado para efectuar las indagaciones necesarias para establecer la exactitud del movimiento económico correspondiente a dicha campaña.

Asimismo, el artículo 184 (LOE), prescribe que las oficinas públicas, los cuarteles de las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional, los locales de las Municipalidades, los locales de los Colegios Profesionales, Sociedades Públicas de Beneficencia, entidades oficiales, colegios y escuelas estatales o particulares y los locales de las iglesias de cualquier credo, no pueden ser utilizados para la realización de conferencias, asambleas, reuniones o actos políticos de propaganda electoral de ninguna especie en favor o en contra de cualquier partido, candidato o tema por consultar, o para la instalación de juntas directivas o el funcionamiento de cualquier comité de tendencia política.

Desde la perspectiva penal, el ilícito se presenta cuando el agente (sujeto activo genérico) concientemente realice la propaganda electoral, en cualquier modalidad o mediante cualquier medio (sean lícitos o ilícitos desde la perspectiva administrativa), en horas en las que ésta ha sido prohibida conforme a ley, o que con ella se atente contra el orden jurídico, las buenas costumbres, o se agravie el honor de candidatos, partidos o grupos políticos (con lo que apreciamos se extiende el objeto de protección jurídica).

La acción se manifiesta directamente comisiva. El tipo acepta la tentativa. La participación delictiva también es posible.

El tipo subjetivo evidencia el dolo que motiva la acción del agente.

La pena señalada en el tipo, pasible de ejecución, es privativa de la libertad **no menor** de dos años (lo que parecería indicar que se extiende hasta el extremo máximo conminado para la pena privativa de libertad que es de treinta y cinco años). Consideramos que se trata de un error, ya que desde la perspectiva del principio de equidad de la pena, no resultaría adecuado (incluso sería lesivo e inconstitucional), sancionar con pena tan severa un acto de esta naturaleza (suponemos que el texto debió ser: pena privativa de libertad "no mayor" de dos años). En todo caso urge una aclaración legislativa.

6.5) SUFRAGIO Y PARTICIPACIÓN INDEBIDA EN ACTOS POLÍTICOS DE MIEMBROS DE LAS FUERZAS ARMADAS Y POLICÍA NACIONAL

Artículo 382 (LOE).- Son reprimidos con pena privativa de la libertad no menor de un mes ni mayor de un año:

a) Los miembros de la Fuerza Armada y de la Policía Nacional en situación de disponibilidad o retiro que, vistiendo uniforme, participen en manifestaciones u otros actos de carácter político; asimismo, los miembros de la Fuerza Armada y de la Policía Nacional que hagan ejercicio de sufragio.

Es de vieja data ya, la discusión de si los miembros de las fuerzas armadas o policiales deben acceder o no al derecho de sufragio. Existen sistemas electorales que permiten ello, consagrando la más irrestricta protección al derecho de la persona humana, a participar en los asuntos políticos de su nación (que evidentemente los involucra y sobre el cual pueden interactuar).

Pero en el caso peruano, la tradición legislativa e incluso constitucional, ha evidenciado un factor común histórico: la prohibición de la participación política directa de los miembros de la Fuerzas Armadas y de la Policía Nacional, y ello no por considerarlos "ciudadanos de segunda clase", sino por que, de acuerdo a la especialidad de sus respectivas funciones (que responden fundamentalmente a un sistema verticalizado), pueden ser objeto de presiones de sus superiores e incluso del poder político, bajo el consabido principio de que "las ordenes se cumplen sin dudas ni murmuraciones".

Argumentos que al decir de Augusto Álvarez Rodrich, Director del periódico Perú .21, no resultan sólidos, siendo poco probable que la permisibilidad del voto de militares genere la politización de las fueraza armadas. En realidad, dice el destacado periodista nacional, es muy poco probable que esto vaya ha suceder. Los militares y los policías van ha estar tan politizados como están ahora ni mas ni menos, al igual que cualquier ciudadano que está preocupado por su propio futuro y el del país (30-04-04).

Con fecha 27 de julio del 2001 los legisladores del Partido Aprista (PAP), Mercedes Cabanillas y José Luis Delgado presentaron un proyecto de ley que proponía una reforma constitucional para introducir el voto facultativo de los miembros de las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional, así como regular su participación en los procesos electorales.

El debate sobre reforma constitucional, presentaba el proyecto de permitir el voto de militares, pero negándoles la posibilidad de ser elegidos a cargos de elección popular ni participar en actividades partidarias mientras no hayan pasado a la situación de retiro. Al respecto se presentaron posiciones encontradas, unas en contra y otras a favor.

Al respecto, el congresista Natale Amprimo (El Peruano, 16 enero 2003), expresaba su opinión de la siguiente manera: Nos hemos opuesto a esta propuesta por cuanto no se puede jurídicamente reconocer un derecho en forma parcial, incompleta o mutilada. No se puede reconocer el derecho de elegir y negar el derecho de ser elegido. No se puede reconocer el derecho de elegir y negar el derecho de reunión, expresión y propaganda electoral. El voto implica participación política plena y no mutilada. No es viable ejercitar a plenitud el derecho de voto en esas condiciones.

Si se reconoce el derecho político de elegir a los militares en actividad, se les debería también reconocer el derecho de la militancia político-partidaria o de constituir células partidarias dentro, incluso, de las instituciones castrenses. Es evidente que se afectaría gravemente la jerarquía y la disciplina, principios fundamentales de la organización de las Fuerzas Armadas y de la Policía Nacional.

El que en algunos países latinoamericanos se haya reconocido el derecho de voto de los militares, siguiendo realidades políticas distintas a las nuestras y olvidando la historia política de esta región, es un error en el que no podemos incurrir. Debemos tener en cuenta, además, que en nuestro país ya es una costumbre fuertemente arraigada la colaboración activa de las Fuerzas Armadas con el proceso electoral desde la instalación de las mesas de sufragio. Es otra razón por la que no resulta conveniente que voten los militares en actividad. Se debe garantizar la neutralidad de su colaboración en el proceso electoral.

Reconocer el ejercicio de un derecho sin la plenitud de sus atributos es un espejismo constitucional. Resulta ser una propuesta que ignora que no es conveniente la

politización de los cuarteles cuando el Perú está en proceso de consolidar un nuevo marco institucional. Es por este fin que exhortaba el congresista a la reflexión antes de tomar la decisión de introducir una reforma que puede ser perniciosa.

En contra se manifiestan también el general EP en situación de retiro José Pastor Vives, al sostener que los militares no son deliberantes, pero que, sin embargo, el ejercicio del derecho de sufragio conlleva a tomar una determinada posición política que puede ser llevada en algún momento al cuartel. Además, indicaba, si los militares no pueden ser elegidos hasta que no pasan a situación de retiro entonces para que darles derecho de sufragio en actividad (El peruano, 21 enero del 2003).

Por su parte, el Congresista Heriberto Benites era de opinión que de otorgarles el derecho al voto a los militares, equivaldría a quebrar la disciplina castrense y afectaría la jerarquía militar y la obediencia debida. La política ingresaría a los cuarteles. Nadie duda que para votar y elegir hay que discutir y convencer. Entonces se van a comenzar a dar debates políticos partidarios en cuarteles y comisarías.

Por otro lado, quienes estaban de acuerdo con el voto de los militares, como el congresista Henry Pease, afirmaban que ellos son iguales que cualquier persona que vive en este país. Son ciudadanos que sirven a la Patria y, por ello, no hay ninguna razón para que se disminuyan sus derechos. No olvidemos, refería el ex-representante nacional, que Miguel Grau fue diputado por Paita y pidió licencia al Congreso para defender a la Patria. En tal sentido se preguntaba el Congresista ¿por qué en esa época los militares podían votar incluso ser elegidos, pasando a disponibilidad previamente? ¿por qué entonces sí y ahora no?. Además, los cuarteles han estado politizados siempre. El ser humano es

político por naturaleza y aquél cuya vida depende del Estado los es más todavía (El Peruano, 20 enero 2003).

En igual sentido, el jurista Francisco Miró Quesada opinaba que en la mayoría de los países los miembros de las Fuerzas Armadas votan y los miembros de la Policía votan, mas no son elegidos. Pero hay casos especiales que deben ser considerados. La Constitución brasileña establece que un militar, además de elegir, puede ser elegido, pero para participar en una elección tiene que ser de capitán para arriba. No sé por qué se comete esa arbitrariedad, no entiendo por que no puede ser elegido también un soldado. Pero de lo que se trata aquí es que haya democracia en las Fuerzas Armadas, sin necesidad de partidizarlas (El Peruano 20 enero 2003)

El representante del Jurado Nacional de Elecciones, Dr. Gastón Soto Vallena se mostraba a favor de que los efectivos de las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional tengan derecho al sufragio universal y directo. Considera a título personal que no tiene fundamento el argumento de que el voto que podrían emitir los miembros de los institutos castrenses pueda ser condicionado por superiores jerárquicos: “el voto es personal y secreto”. Refiriere el magistrado electoral que si se tiende a universalizar el voto, no deben existir diferencias respecto a las actividades o profesiones que ejercen determinadas personas como, por ejemplo, los miembros de la Fuerzas Armadas y de la Policía nacional (El Peruano 21 enero 2003).

Por su parte el general en retiro Germán Parra expresaba al respecto, que no afectaría la disciplina castrense, porque ello no ocurre en ningún país donde sí se da este derecho, como Bolivia, Brasil, Argentina y Uruguay. No hay riesgo de politización y partidización, porque la ley lo impedirá. Aquí el voto de los militares significa

aproximadamente doscientos mil votos adicionales, pero cualitativamente sí, porque son gente pensante e instruida. Si quisieran postular, deberían renunciar a la institución seis meses antes, como cualquier funcionario público. En resumen, opinaba el general Parra, que el voto castrense será muy importante para cerrar la brecha entre civiles y militares y para consolidar la democracia (El Peruano 20 enero 2003).

Después de tres largos, el 12 de octubre del 2004 la Comisión de Constitución y Reglamento del Congreso aprobó por 9 votos a favor, ninguno en contra y 2 abstenciones ese documento. Un mes después el Pleno le dió el visto bueno en primera votación con 99 votos a favor, 2 en contra y 4 abstenciones.

Posteriormente, el 11 de marzo del 2005 en segunda votación el Congreso de la República aprobó en forma definitiva por 87 votos a favor, 1 en contra y 8 abstenciones, la propuesta que reforma los artículos 31 y 34 de la Constitución política, mediante Ley 28480 (30 de marzo de 2005).

El texto de la Ley 28480 establece que las fuerzas armadas y la policía Nacional del Perú tienen el derecho al voto y a la participación ciudadana regulada por Ley. Sin embargo, no podrán postular a cargos públicos, participar en actividades partidarias o manifestaciones, ni realizar actos de proselitismo mientras se encuentren en servicio activo.

En tal virtud, conforme al texto actual del artículo 34 de la Constitución, "los miembros de las Fuerzas Armadas y policía Nacional tienen derecho a voto y a la participación ciudadana, reguladas por ley. No pueden postular a cargos de elección

popular, participar en actividades partidarias o manifestaciones ni realizar actos de proselitismo, mientras no hayan pasado a la situación de retiro de acuerdo a ley”.

Esta modificación constitucional modifica la naturaleza del injusto contenido en el tipo del **artículo 382 (LOE)** que en su versión original establecía: **Son reprimidos con pena privativa de la libertad no menor de un mes ni mayor de un año:**

a) Los miembros de la Fuerza Armada y de la Policía Nacional en situación de disponibilidad o retiro que, vistiendo uniforme, participen en manifestaciones u otros actos de carácter político; asimismo, los miembros de la Fuerza Armada y de la Policía Nacional que hagan ejercicio de sufragio.

Así por virtud del principio de derogación tácita de la ley, el texto típico ha de referirse solamente a la conducta **de los miembros de la Fuerza Armada y de la Policía Nacional en situación de disponibilidad o retiro que, vistiendo uniforme, participen en manifestaciones u otros actos de carácter político (sujeto activo específico).**

En tal sentido la prohibición jurídica insertada en el tipo, se justifica por cuanto sanciona la intromisión indebida de los elementos militares en el discurrir de las actividades electorales, sean de propaganda, reunión, opinión e incluso de sufragio, pueden distorsionar el correcto desarrollo del proceso electoral. No es ajena a nuestra realidad la perniciosa participación de los entes militares en los procesos electorales, constituyéndose en factores decisivos para vulnerar el libre ejercicio del sufragio (militares favoreciendo la campaña presidencial entregando regalos, almanaques y comida, militares haciendo proselitismo opinando en cuestiones políticas partidarias, etc.)

El tipo reclama la presencia de sujetos activos cualificados: los miembros de las Fuerzas Armadas y de la Policía Nacional, en situación de disponibilidad o retiro. En este aspecto, de acuerdo a la modificación constitucional y conforme a lo sustentado, el tipo debería modificarse para comprender también como sujeto activo a los miembros militares y policiales en actividad

La acción típica está representada en la conducta del agente que, vistiendo el uniforme de su institución, en la condición personal de disponibilidad o retiro (factor psicológico conducente o intimidante), participe en manifestaciones u otros actos de carácter político (participación que entendemos en el ámbito de la dirigencia o simple concurrencia como simpatizante). Lo injusto radica pues, en la nocividad que dicha intromisión representa, y que directamente introduce al proceso un factor desequilibrante y distorsionador de la voluntad popular.

El tipo se representa como de mera actividad y se consume en cuanto el agente participa en reuniones, manifestaciones u otros actos de carácter político. Es un tipo de comisión que admite la participación delictiva. Por su naturaleza nos parece improbable la tentativa.

El tipo subjetivo informa lo doloso de la actitud del agente (dolo directo).

La pena a imponerse es privativa de la libertad no menor de un mes ni mayor de un año. En este supuesto es posible la aplicación de la circunstancia agravante contenida en el artículo 46-A del C.P.: "Constituye circunstancia agravante de la responsabilidad penal si el sujeto activo se aprovecha de su condición de miembro de las Fuerzas Armadas, Policía Nacional, autoridad, funcionario o servidor público, para cometer un

hecho punible o utiliza para ello, armas proporcionadas por el Estado o cuyo uso le sea autorizado por su condición de funcionario público. En estos casos el Juez podrá aumentar la pena hasta en un tercio por encima del máximo legal fijado para el delito cometido, no pudiendo ésta exceder del máximo de pena privativa de libertad temporal establecida en el artículo 29 de este Código...”.

6.6) PORTAR ARMAS DURANTE EL ACTO ELECTORAL

Artículo 382 (LOE).- Son reprimidos con pena privativa de la libertad no menor de un mes ni mayor de un año:

c) Aquél que porte armas de cualquier clase durante la realización de los actos electorales oficiales, aunque tenga licencia, sin perjuicio del decomiso del arma y de la cancelación de la licencia.

Presentado así el tipo, la interpretación permite apreciarlo como uno de peligro, en el cual la afectación del bien jurídico no se materializa objetivamente, bastando sólo su puesta en riesgo.

Sujeto activo genérico. Sujeto pasivo lo será la sociedad.

La acción típica está representada por el acto del agente (sujeto activo genérico), de intencionalmente (y sin fines particulares exteriorizados) portar armas, que pueden ser de cualquier clase, aunque sean elementos de uso común (como el caso de las armas eventuales: cuchillos, garrotes, desarmadores, etc.) o se tenga permiso oficial (caso de las armas de fuego), durante los actos electorales oficiales (que como proceso que es,

implica no sólo el acto propiamente del sufragio, sino incluso la campaña electoral, los sorteos públicos y actos oficiales de los entes electorales, etc.).

La acción es comisiva. El tipo admite la tentativa e incluso la participación delictiva.

En este supuesto es posible el concurso de tipos en relación a delito de tenencia ilegal de armas, que por principio de subsunción, quedaría integrado en el tipo en estudio.

En España, la Ley Orgánica 5/1985, en similar dirección castiga a quienes impidan o dificulten injustificadamente la entrada salida o permanencia de los electores, candidatos, apoderados, interventores y notarios en los lugares en que se realicen actos del procedimiento electoral, y también a quienes perturben gravemente el orden en cualquier acto electoral o penetren en los locales donde éstos se celebren portando armas u otros instrumentos susceptibles de ser usados como tales

La pena a imponerse es privativa de la libertad no menor de un mes ni mayor de un año. Adicionalmente la sanción puede involucrar el decomiso del arma y de la cancelación de la licencia.

6.7) REALIZAR ACTIVIDADES POLÍTICAS EN ZONAS Y PLAZOS PROHIBIDOS

Artículo 388 (LOE).- Es reprimido con pena privativa de la libertad no menor de tres meses ni mayor de dos años aquél que instala o hace funcionar Secretarías o locales políticos u oficinas de propaganda, o que organiza o permite reuniones o manifestaciones políticas dentro de zonas prohibidas o en los plazos en que dicha actividad esté suspendida conforme a esta ley.

Si el culpable es una autoridad política, la pena es no menor de un año ni mayor de tres, además de la pena accesoria de inhabilitación, por igual tiempo del de la condena, de conformidad con los incisos 1),2),3),4) y 8) del artículo 36 del Código Penal.

Como ya hemos tratado, tanto la participación, la opinión, la reunión y la propaganda política, legitima el irrestricto derecho de participación política del ciudadano y que la ley está obligada a proteger en cuanto sean lícitas.

Lo injusto está representado en el tipo, por la actitud abusiva y trasgresora del agente, que indebidamente hace uso de tales derechos, cuando la misma ley lo prohíbe. Señala el tipo como modalidades de acción (que se representa comisiva): instalar o hacer funcionar Secretarías o locales políticos u oficinas de propaganda; u organizar o permitir reuniones o manifestaciones políticas dentro de zonas prohibidas o en los plazos en que dicha actividad esté suspendida conforme a la ley electoral.

El sujeto activo es genérico, puede ser cualquier persona. Incluso lo puede ser una autoridad política o miembro de las fuerzas armadas o policiales (en cuyo caso se presenta una circunstancia agravante). Sujeto pasivo es el Estado.

El tipo admite la tentativa y la participación. Evidencia también la exigencia del dolo directo.

La pena a imponerse privativa de la libertad no menor de tres meses ni mayor de dos años.

Si el culpable es una autoridad política, la pena es no menor de un año ni mayor de tres, además de la pena accesoria de inhabilitación, por igual tiempo del de la condena, de conformidad con los incisos 1),2),3),4) y 8) del artículo 36 del Código Penal.

- 1) Privación de la función, cargo o comisión que ejercía el condenado, aunque provenga de elección popular.
- 2) Incapacidad para obtener mandato, cargo, empleo o comisión de carácter público.
- 3) Suspensión de los derechos políticos que señale la sentencia.
- 4) Incapacidad para ejercer por cuenta propia o por intermedio de tercero, profesión, comercio, arte o industria, que deben especificarse en la sentencia.
- 8) Privación de grados militares o policiales, títulos honoríficos u otras distinciones que correspondan al cargo profesión u oficio del que se hubiese servido el agente para cometer el delito.

6.8) VENTA DE BEBIDAS ALCOHÓLICAS O REALIZACIÓN DE ESPECTÁCULOS PROHIBIDOS

Artículo 390 (LOE).- Son reprimidos con pena privativa de la libertad no mayor de seis meses y pena de multa no menor del diez por ciento del ingreso mínimo vital multiplicado por treinta días de multa más pena accesoria de inhabilitación, por igual tiempo que el de la condena, de conformidad con los incisos 1), 2), 3), 4) y 8) del artículo 36 del Código Penal:

a) Aquellos que hagan funcionar establecimientos destinados exclusivamente a expendio de bebidas alcohólicas, o quienes organizan espectáculos o reuniones prohibidos durante los periodos señalados en el artículo 190 de la presente ley.

Aunque atendiendo a los principios de lesividad y mínima intervención, consideramos que la entidad del daño representado en el tipo, no justifica su inclusión en el ámbito penal, entendemos, vía interpretación, que el carácter de lo injusto se fundamenta en la actitud trasgresora y abusiva del agente que no acata la prohibición contenida en la ley electoral (Art. 190), que dispone la suspensión de toda clase de reuniones, manifestaciones públicas de carácter político y propaganda política veinticuatro horas antes del día señalado para las elecciones.

El sujeto activo es genérico (incluso lo pueden ser los funcionarios o servidores públicos y miembros de las fuerzas armadas o policiales, en cuyos casos se presentan condiciones agravantes). El sujeto pasivo lo será el Estado.

La acción, que en este caso admite la omisión impropia (el dueño que no impide que su dependiente abra el negocio), está representada por la conducta de quien, conociendo la prohibición legal (la misma que es pública e inserta en la ley bajo la presunción de su obligatorio conocimiento), hace o permite funcionar establecimientos destinados exclusivamente a expendio de bebidas alcohólicas, o quienes organizan espectáculos o reuniones prohibidas durante las horas de prohibición, que involucran las veinticuatro horas anteriores y las que correspondan al mismo acto del sufragio.

El tipo admite la tentativa y la participación delictiva. Así también, el tipo se representa eminentemente doloso.

La pena a imponerse es privativa de la libertad no mayor de seis meses y pena de multa no menor del diez por ciento del ingreso mínimo vital multiplicado por treinta días multa (terminología que requeriría mejor precisión), más pena accesoria de inhabilitación, por igual tiempo que el de la condena, de conformidad con los incisos 1), 2), 3), 4) y 8) del artículo 36 del Código Penal:

- 1) Privación de la función, cargo o comisión que ejercía el condenado, aunque provenga de elección popular.
- 2) Incapacidad para obtener mandato, cargo, empleo o comisión de carácter público.
- 3) Suspensión de los derechos políticos que señale la sentencia.
- 4) Incapacidad para ejercer por cuenta propia o por intermedio de tercero, profesión, comercio, arte o industria, que deben especificarse en la sentencia.
- 8) Privación de grados militares o policiales, títulos honoríficos u otras distinciones que correspondan al cargo profesión u oficio del que se hubiese servido el agente para cometer el delito.

6.9) ATENTADO CONTRA DERECHOS LABORALES POR FUNCIONARIO O SERVIDOR PUBLICO

Artículo 385 (LOE).- Son reprimidos con pena privativa de la libertad no menor de dos años ni mayor de seis y pena no mayor de treinta días de multa, así como con pena accesoria de inhabilitación por igual tiempo al de la condena, de conformidad con los incisos 1), 2), 3) y 4) del artículo 36 del Código Penal:

b) Las personas aludidas en el inciso a) de este artículo que, respecto a sus subalternos o particulares, les impongan descuentos o multas u ordenen cambios de colocación o traslado de dichos subalternos o particulares dependientes, con el objeto de favorecer o perjudicar los resultados en favor o en contra de un determinado candidato.

El derecho a la libertad del trabajo es un atributo incuestionable de orden personal, que las leyes y la constitución consagran como un derecho fundamental de la persona en sociedad. Así el trabajo no debe considerarse como una mercancía o un producto dado al mejor postor o sometido a un precio o recompensa. Por consiguiente el reconocimiento de su utilidad social y moral es un derecho esencial de los trabajadores.

Debe indicarse que el derecho al trabajo está jurídicamente protegido, ya que, es creador de riqueza pública o privada y, además, por ser expresión de la libertad de la persona. De ahí que cualquier atentado contra el trabajo hiera la libertad humana (Peña Cabrera, T I, 1994, p. 647).

Por estas consideraciones, lo injusto radica aquí, en la instrumentalización de tal derecho laboral, para servir fines políticos abusivos, atentatorios contra la dignidad y libertad, no sólo laboral, sino de libre determinación del derecho de sufragio, que es el bien jurídico protegido.

Por disposición de la ley, el tipo sólo puede ser realizado por sujetos activos cualificados, tales como las autoridades políticas, militares, policiales, municipales y los funcionarios o empleados públicos (la ley no hace referencia al ámbito privado, que en este aspecto, nos parece, queda injustificadamente fuera de la protección penal). Sujeto

activo lo será el trabajador afectado en su derecho. Se trata, como señala Valle Muñiz, del reconocimiento de un interés susceptible de protección, la clase trabajadora en cuanto tal como sujeto de derecho (en Quintero Olivares, ob. cit. p. 804)

La acción, que evidencia la utilización de la coacción, se representa por la conducta del sujeto activo que, abusando de su cargo y respecto a sus subalternos e incluso particulares, les impongan condiciones laborales evidentemente atentatorias, disponiendo descuentos o multas u ordenen cambios de colocación o traslado de dichos subalternos o particulares dependientes, con el objeto de favorecer o perjudicar los resultados en favor o en contra de un determinado candidato.

El tipo permite la tentativa y la participación delictiva. Desde la óptica subjetiva, el tipo se representa como doloso.

La pena a imponerse es privativa de la libertad no menor de dos años ni mayor de seis y pena no mayor de treinta días de multa, así como con pena accesoria de inhabilitación por igual tiempo al de la condena, de conformidad con los incisos 1), 2), 3) y 4) del artículo 36 del Código Penal:

- 1) Privación de la función, cargo o comisión que ejercía el condenado, aunque provenga de elección popular.
- 2) Incapacidad para obtener mandato, cargo, empleo o comisión de carácter público.
- 3) Suspensión de los derechos políticos que señale la sentencia.
- 4) Incapacidad para ejercer por cuenta propia o por intermedio de tercero, profesión, comercio, arte o industria, que deben especificarse en la sentencia.

6.10) DESTRUCCIÓN, IMPEDIMENTO U OBSTACULIZACIÓN DE PROPAGANDA ELECTORAL

Artículo 390 (LOE).- Son reprimidos con pena privativa de la libertad no mayor de seis meses y pena de multa no menor del diez por ciento del ingreso mínimo vital multiplicado por treinta días de multa más pena accesoria de inhabilitación, por igual tiempo que el de la condena, de conformidad con los incisos 1), 2), 3), 4) y 8) del artículo 36 del Código Penal:

b) Aquél que destruya, en todo o en parte, impida u obstaculice la propaganda electoral de un candidato o partido; además sufre pena de multa, por el importe del diez por ciento del ingreso diario del condenado, multiplicado por treinta días de multa, de conformidad con los artículos 41 al 44 del Código Penal.

Las mismas penas se imponen a los instigadores.

Al respecto, cabe todo lo manifestado al tratar los temas de la participación política y la propaganda electoral, relevando su importancia como medio lícito, para comunicar al ciudadano las propuestas políticas de las diferentes corrientes políticas en contienda electoral.

Justamente lo ilícito se manifiesta en la acción intencional (comisiva), del agente, que atenta contra este medio de promoción y conocimiento público, adoptando dos modalidades de acción: destruyendo (en todo o en parte: rompe, quema, etc.) o impidiendo u obstaculizando la propaganda electoral de un candidato o partido (no deja pegarlos, los despega, los pinta de negro, los ensucia, los tergiversa, sobre pone otros afiches, etc.).

El sujeto activo es genérico, puede ser incluso militar, policía, servidor o funcionario público (presentándose en estos casos las agravantes respectivas). Sujeto pasivo lo será la persona afectada en su derecho de participación política, el partido y la agrupación política cuya propaganda se afectó.

El tipo admite la tentativa, la participación y se representa eminentemente doloso.

La pena a imponerse es pena privativa de la libertad no mayor de seis meses y pena de multa no menor del diez por ciento del ingreso mínimo vital multiplicado por treinta días de multa (aunque el término requiere mayor precisión), más pena accesoria de inhabilitación, por igual tiempo que el de la condena, de conformidad con los incisos 1), 2), 3), 4) y 8) del artículo 36 del Código Penal:

- 1) Privación de la función, cargo o comisión que ejercía el condenado, aunque provenga de elección popular.
- 2) Incapacidad para obtener mandato, cargo, empleo o comisión de carácter público.
- 3) Suspensión de los derechos políticos que señale la sentencia.
- 4) Incapacidad para ejercer por cuenta propia o por intermedio de tercero, profesión, comercio, arte o industria, que deben especificarse en la sentencia.
- 8) Privación de grados militares o policiales, títulos honoríficos u otras distinciones que correspondan al cargo profesión u oficio del que se hubiese servido el agente para cometer el delito.

Adicionalmente, se impondrá pena de multa, por el importe del diez por ciento del ingreso diario del condenado, multiplicado por treinta días de multa, de conformidad con

los artículos 41 al 44 del Código Penal. Las mismas penas se imponen a los instigadores (el candidato opositor que mediante dinero induce a los agentes, a pintarrapear los afiches de propaganda de su contendor político) .

6.11) INCUMPLIMIENTO DE REMISIÓN DE MATERIAL ELECTORAL POR PARTE DE PRESIDENTE DE MESA DE SUFRAGIO

Artículo 384 (LOE).- Son reprimidos con pena privativa de la libertad no menor de un año ni mayor de tres años:

a) Los Presidentes de las Mesas de Sufragios que no cumplan con remitir las ánforas o las Actas Electorales. Además sufren pena accesoria de inhabilitación por igual tiempo al de la condena, conforme a los incisos 1), 2), 3), 4) y 8) del artículo 36 del Código Penal.

Las mismas penas sufren los participantes en el antes indicado delito.

La obligación cívico-jurídica de cumplir con las funciones propias de miembro de la Mesa electoral, involucra una serie de actos que tienen que ver con la recepción del material electoral, su revisión y verificación, la instalación de la Mesa, la recepción del sufragio, el escrutinio y fundamentalmente la remisión del acta electoral, que contiene el resultado de la votación de la Mesa, que será adicionado al cómputo total, que al final arrojará el resultado final de la elección. De ahí su fundamental papel.

Así lo antijurídico radica en la conducta del agente, que siendo específico (sólo puede serlo el presidente de la Mesa (sea el designado o el que asumió dicha función),

que intencionalmente (la figura culposa resulta atípica) incumpla su función de remitir al órgano electoral, las ánforas o las actas electorales, conforme a la ley electoral.

El tipo admite la tentativa. En cuanto a la participación, ello no es verificable debido a la exigencia de sujeto activo cualificado (el presidente de la específica Mesa de votación). Cuando la ley hace mención a "los participantes en el antes indicado delito", hace referencia a la determinación legal de imponer penas similares a las del autor, a los terceros (extraneus), que de alguna manera hayan colaborado en el delito propio del sujeto activo (intraneus).

Desde la perspectiva típica subjetiva, la acción se representa eminentemente dolosa.

La pena a imponerse es privativa de la libertad no menor de un año ni mayor de tres años. Además se impondrá pena accesoria de inhabilitación por igual tiempo al de la condena, conforme a los incisos 1), 2), 3), 4) y 8) del artículo 36 del Código Penal.

- 1) Privación de la función, cargo o comisión que ejercía el condenado, aunque provenga de elección popular.
- 2) Incapacidad para obtener mandato, cargo, empleo o comisión de carácter público.
- 3) Suspensión de los derechos políticos que señale la sentencia.
- 4) Incapacidad para ejercer por cuenta propia o por intermedio de tercero, profesión, comercio, arte o industria, que deben especificarse en la sentencia.
- 8) Privación de grados militares o policiales, títulos honoríficos u otras distinciones que correspondan al cargo profesión u oficio del que se hubiese servido el agente para cometer el delito.

Las mismas penas sufren los participantes en el antes indicado delito.

6.12) DETENCIÓN O RETARDO DEL TRANSPORTE DE MATERIAL ELECTORAL O COMUNICACIONES OFICIALES

Artículo 383 (LOE).- Es reprimido con pena privativa de la libertad no menor de seis meses ni mayor de tres años:

d) Los empleados de Correos y en general toda persona que detenga o demore por cualquier medio, los servicios de correos, telégrafos o mensajeros que transporten o conduzcan ánforas, elementos o comunicaciones oficiales referentes a un proceso electoral.

La legislación vigente nos indica que los materiales electorales son diseñados y producidos por la ONPE, siendo propiedad de esta organización. Su uso es exclusivo para un proceso electoral en particular, quedando prohibido su ulterior empleo salvo que, por su naturaleza, puedan volver a ser utilizados.

El material electoral es distribuido por la ONPE a cada una de las ODPES (Oficinas Descentralizadas de Procesos Electorales), dentro de los treinta días naturales anteriores a la elección. Estas a su vez, desarrollan una operación logística, previamente planificada y aprobada, para asegurar que lleguen oportunamente a cada una de las localidades donde se realizará la elección, teniendo como usuario final a los miembros de mesa.

Según el momento en que estos materiales son utilizados, se pueden establecer dos tipos claramente diferenciados:

MATERIALES PARA LA INSTALACIÓN DE LAS MESAS Y DESARROLLO DEL ACTO DE SUFRAGIO: constituido por el tríptico informativo de "como funciona la Mesa de Sufragio", la cartilla de instrucciones para Miembros de Mesa y personeros, carteles informativos, cédulas de sufragio (denominadas boletas, ballots, tarjetones o papeles de sufragio), el acta padrón, hologramas, constancia de asistencia al sufragio, etiquetas autoadhesivas para cierre de cédulas, sobres de impugnación, ánforas, tinta indeleble y cabina de votación.

MATERIALES EMPLEADOS DURANTE EL ACTO DE ESCRUTINIO: etiquetas autoadhesivas para protección de actas de escrutinio, hojas de observación o reclamo al escrutinio, sobre para el envío de actas al JNE, ONPE, JEE, ODPE, conjunto de agrupaciones políticas y F.F.A.A. y carteles de resultados.

Las actas padrón son documentos integrales que contienen, aparte del Acta Electoral, una serie de formatos de uso imprescindible en la Mesa de Sufragio. Existe una Acta Padrón por Mesa y los materiales que la componen son los siguientes:

EL ACTA ELECTORAL: la cual consta de tres partes o secciones: Acta de instalación, acta de sufragio y acta de escrutinio. **EL ACTA PADRÓN:** que contiene los siguientes formatos y documentos: carteles con el número de Mesa y datos de los ciudadanos sorteados como miembros de mesa; hoja de control de asistencia de miembros de Mesa; hoja de registro de personeros; relación de electores y hoja borrador del acta de escrutinio.

Lo antijurídico de la acción se representa por la conducta del agente, que detenga o demore por cualquier medio, los servicios de correos, telégrafos o mensajeros que transporten o conduzcan ánforas, elementos o comunicaciones oficiales referentes a un proceso electoral. Ello podría afectar directamente el proceso electoral.

El sujeto activo es genérico. El sujeto pasivo es el Estado representado por la ONPE.

El tipo admite la participación y la tentativa. Asimismo se representa como eminentemente doloso.

La pena aplicable es privativa de la libertad no menor de seis meses ni mayor de tres años:

6.13) VIOLACIÓN DEL SECRETO DE COMUNICACIONES OFICIALES Y ÁNFORAS ELECTORALES

Artículo 383 (LOE).- Es reprimido con pena privativa de la libertad no menor de seis meses ni mayor de tres años:

e) Toda persona que viole los sellos, precintos, envolturas o cerraduras de las ánforas utilizadas para el acto electoral, o quien viole las comunicaciones oficiales expedidas por los órganos del Sistema Electoral o la que, suplantando a estos, remita comunicaciones, o sustituya votos que hayan sido impugnados. Si el culpable es funcionario o empleado público, además de la pena indicada sufrirá

pena accesoria de inhabilitación por igual tiempo al de la condena de conformidad con los incisos 1), 2), 3), 4) y 8) del artículo 36 del Código Penal.

El sujeto activo es genérico, pueden serlo incluso los miembros de las fuerzas armadas y policiales y los empelados y servidores públicos (caso en el cual se aplicarán las agravantes respectivas).

la acción, que es comisiva, implica la conducta del agente de violar los sellos, precintos, envolturas o cerraduras de las ánforas utilizadas para el acto electoral, o quien viole las comunicaciones oficiales expedidas por los órganos del Sistema Electoral o la que, suplantando a estos, remita comunicaciones, o sustituya votos que hayan sido impugnados.

El tipo admite la tentativa y la participación. Desde la perspectiva subjetiva se representa como doloso.

La pena aplicable es pena privativa de la libertad no menor de seis meses ni mayor de tres años. Si el culpable es funcionario o empleado público, además de la pena indicada sufrirá pena accesoria de inhabilitación por igual tiempo al de la condena de conformidad con los incisos 1), 2), 3), 4) y 8) del artículo 36 del Código Penal.

- 1) Privación de la función, cargo o comisión que ejercía el condenado, aunque provenga de elección popular.
- 2) Incapacidad para obtener mandato, cargo, empleo o comisión de carácter público.
- 3) Suspensión de los derechos políticos que señale la sentencia.

4) Incapacidad para ejercer por cuenta propia o por intermedio de tercero, profesión, comercio, arte o industria, que deben especificarse en la sentencia.

8) Privación de grados militares o policiales, títulos honoríficos u otras distinciones que correspondan al cargo profesión u oficio del que se hubiese servido el agente para cometer el delito.

6.14) OMISIÓN INJUSTIFICADA A INTEGRAR JURADO ELECTORAL

Artículo 391.- Sufre la pena de multa cuyo importe no es menor del veinticinco por ciento del ingreso mínimo vital, con una duración de sesenta días, multa de conformidad con los artículos 41 al 44 del Código Penal, y la pena accesoria de inhabilitación, prevista en los incisos 1),2),3),4) y 8) del artículo 36 del Código Penal por el tiempo de la pena principal, el ciudadano que injustificadamente se abstenga de integrar un jurado electoral.

Conforme a la ley electoral (LOE), los Jurados Electorales Especiales son órganos de carácter temporal creados para cada proceso electoral o consulta popular (Art. 44).

Los Jurados Electorales Especiales están constituidos por tres miembros (Art. 45):

a) Un miembro nombrado por la Corte Superior bajo cuya circunscripción se encuentra la sede del Jurado Electoral Especial, elegido entre sus magistrados jubilados y en actividad. El magistrado nombrado preside el Jurado Electoral Especial; b) Dos miembros designados por el Jurado Nacional de Elecciones mediante sorteo en acto público de una lista de veinticinco ciudadanos que residan en la sede del Jurado Electoral Especial y que se encuentren inscritos en el RENIEC. Dicha lista es elaborada mediante selección

aleatoria sobre la base computarizada de los ciudadanos de mayor grado de instrucción en cada circunscripción electoral.

Tal designación constituye una obligación jurídica, ante cuya omisión se presenta lo ilícito (tipo de omisión propia).

El sujeto activo es específico, se trata de los ciudadanos designados conforme a ley, para integrar los Jurados Electorales Especiales. El sujeto pasivo es el Estado.

La acción, que es comisiva, se representa por la conducta del agente, que intencional e injustificadamente omite su obligación legal cívica.

El tipo es eminentemente doloso.

La pena aplicable es multa, cuyo importe no es menor del veinticinco por ciento del ingreso mínimo vital, con una duración de sesenta días, multa de conformidad con los artículos 41 al 44 del Código Penal, y la pena accesoria de inhabilitación, prevista en los incisos 1),2),3),4) y 8) del artículo 36 del Código Penal por el tiempo de la pena principal,

- 1) Privación de la función, cargo o comisión que ejercía el condenado, aunque provenga de elección popular.
- 2) Incapacidad para obtener mandato, cargo, empleo o comisión de carácter público.
- 3) Suspensión de los derechos políticos que señale la sentencia.
- 4) Incapacidad para ejercer por cuenta propia o por intermedio de tercero, profesión, comercio, arte o industria, que deben especificarse en la sentencia.

8) Privación de grados militares o policiales, títulos honoríficos u otras distinciones que correspondan al cargo profesión u oficio del que se hubiese servido el agente para cometer el delito.

6.15) OMISIÓN INJUSTIFICADA A INSTALACIÓN DE MESA DE SUFRAGIO

Artículo 392.- Sufre pena de multa cuyo importe no es menor del cincuenta por ciento del ingreso mínimo vital, con una duración de quince días, de conformidad con los artículos 41 al 44 del Código Penal, el ciudadano que habiendo salido sorteado para integrar una mesa de sufragio no concurra a su instalación.

Se trata al igual que en el caso anterior, del flagrante e intencional incumplimiento de funciones electorales.

En todo colegio electoral debe haber como mínimo una Mesa integrada por tres miembros, a los que corresponde presidir y dirigir el acto de la votación: La mesa electoral está integrada por un presidente y dos vocales, que son elegidos por sorteo de entre los electores hábiles y con mayor grado de educación que integran el conjunto de los electores inscritos que corresponden a la Mesa.

Debido a la naturaleza obligatoria del sufragio en nuestro sistema, la participación como miembro de Mesa constituye un deber cívico y una auténtica obligación legal, por lo que su incumplimiento es pasible de sanción penal.

Se trata de un tipo de omisión propia, cuya materialidad está representada por la conducta del agente que habiendo salido sorteado para integrar una mesa de sufragio no

concurra injustificadamente a su instalación (al respecto, existe un trámite administrativo de dispensa).

El sujeto activo así, se representa como cualificado.

El derecho comparado nos permite apreciar tipificaciones similares. Así, el artículo 242 de la Ley Federal mexicana de organizaciones políticas y procesos electorales prevé la imposición de la pena de prisión de hasta un año o suspensión de derechos políticos hasta por un año asimismo, a quien se niegue a desempeñar las funciones electorales que le sean encomendadas. Igualmente la Ley Electoral portuguesa (Art. 164) sanciona a quien, habiendo de formar parte de la Mesa de la asamblea electoral, sin motivo justificado, no asuma o abandone esas funciones.

También el Código Electoral de Costa Rica (Art. 152.g) sanciona con la pena de inhabilitación absoluta a los electores que, habiendo sido designados para formar parte del Tribunal Supremo de Elecciones o de una Junta Receptora, no se apersonen sin que haya justa causa, para el oportuno juramento después de haber sido requeridos a ese efecto por una vez. Asimismo, el Código Electoral argentino (Art. 132) penaliza con prisión de seis meses a dos años a los funcionarios creados por la propia ley y a los electores designados para el desempeño de funciones que sin causa justificada dejen de concurrir al lugar donde deban cumplirlas o hicieren abandono de ellas.

La Ley Orgánica Electoral española, en su artículo 143, prescribe que el presidente y los vocales de las Mesas Electorales, así como sus respectivos suplentes, que dejen de concurrir a desempeñar sus funciones, las abandonen sin causa legítima o incumplan sin causa justificada las obligaciones de excusa o aviso previo que les impone

la propia Ley, incurrirán en la pena de arresto mayor y multa de 30,000 a 300,000 pesetas.

El tipo se revela como eminentemente doloso.

La pena a imponerse es de multa, cuyo importe no es menor del cincuenta por ciento del ingreso mínimo vital, con una duración de quince días, de conformidad con los artículos 41 al 44 del Código Penal, el ciudadano que habiendo salido sorteado para integrar una mesa de sufragio no concurra a su instalación.

6.16) IMPEDIMENTO DE DESIGNACIÓN PARA INTEGRAR JURADO ELECTORAL

Artículo 387 (LOE).- Es reprimido con pena privativa de la libertad no menor de dos años, ni mayor de cinco aquél que impida, por cualquier medio, que un ciudadano pueda ser designado para integrar un Jurado Electoral Especial.

El sujeto activo es genérico, pueden serlo incluso los miembros de las fuerzas armadas y la policía nacional y los funcionarios o servidores públicos (con las agravantes de ley).

La acción, que puede revestir modalidades defraudatorias o coactivas (engaño, o amenaza), se representa por la conducta del agente que, utilizando cualquier medio impida que un ciudadano pueda ser designado para integrar un Jurado Electoral Especial (denuncias falsas, tachas maliciosas, etc.)

Desde la óptica subjetiva, el tipo es eminentemente doloso.

La pena aplicable es privativa de la libertad no menor de dos años, ni mayor de cinco años.

6.17) SUPLANTACIÓN O INTEGRACIÓN ILEGAL DE JURADO ELECTORAL

Artículo 383 (LOE).- Es reprimido con pena privativa de la libertad no menor de seis meses ni mayor de tres años:

a) Aquél que integra un Jurado Electoral estando impedido de hacerlo, o suplanta a quien corresponde integrarlo, o utiliza su nombre para efectuar despachos o comunicaciones.

El sujeto activo es genérico, pueden serlo incluso los miembros de las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional y los funcionarios o servidores públicos (con las agravantes de ley).

La acción típica implica tres conductas en el agente:

a) Integrar un Jurado Electoral estando impedido de hacerlo (se presenta así la característica en blanco del tipo, que reclama para su constitución, la observancia de las normas electorales de la materia);

b) Suplantar a quien corresponde integrarlo; y,

c) Utilizar el nombre del titular para efectuar despachos o comunicaciones. Estas acciones evidentemente perjudican el normal desarrollo del proceso electoral.

Desde la óptica del tipo subjetivo, el tipo es eminentemente doloso.

La pena a imponerse es privativa de la libertad no menor de seis meses ni mayor de tres años:

6.18) COACCIÓN O INSTIGACIÓN PARA SUPLANTAR A MIEMBRO DE JURADO ELECTORAL

Artículo 383 (LOE).- Es reprimido con pena privativa de la libertad no menor de seis meses ni mayor de tres años:

b) Aquél que instiga a otro a suplantar a un miembro de un jurado Electoral, o lo obliga a ello mediante violencia o soborno.

El sujeto activo es genérico, pueden serlo incluso los miembros de las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional y los funcionarios o servidores públicos (con las agravantes de ley, Art. 46-A C.P.).

A diferencia del caso anterior, el tipo hace referencia al tercero que instiga a otro a suplantar a un miembro de un jurado Electoral, o lo obliga a ello mediante violencia o soborno (prebenda económica).

En este supuesto, el agente utiliza como medio para el apoderamiento, el despliegue de su propia fuerza física o material, contra el cuerpo de su víctima. El concepto jurídico de violencia, conocida ya por el derecho romano como *vis absoluta* o *vis corporalis*, involucra, como indica Roy Freyre (1983, p.76) que el agente actué físicamente sobre el soma de la víctima con la finalidad de obligarle a permitir lo que su voluntad no desea.

En la hipótesis legal que estudiamos, la violencia consiste en el empleo de medios materiales para anular o quebrantar la resistencia que ha sido ofrecida por la víctima o para evitar una resistencia que se esperaba, obligándola de esta manera a suplantar a un miembro de un jurado electoral.

No es cualquier violencia la que requiere el precepto que comentamos, debe ser de cierta intensidad y amenaza para la vida o salud de las personas (Peña Cabrera 1995. p. 149). En lo que respecta al nivel cuantitativo que debe alcanzar la violencia, para constituir el delito, nos refiere Muñoz Conde (1996, p. 340), hay que tener en cuenta la circunstancias del caso concreto, la fuerza física que haya que desplegar. En atención a lo dicho, es necesario apreciar que la violencia ha de tener una adecuada potencialidad, que lleve aparejada cierta eficacia sobre el sujeto pasivo, debiendo ser suficiente su intensidad para quebrantar la mínima oposición.

La amenaza constituye el sucedáneo psicológico de la violencia física. Esta “violencia moral” era conocida en el derecho romano como *vis compulsiva*.

La amenaza, desde la perspectiva típica, se constituye en un anuncio del propósito de causar un mal inminente, capaz de poner en peligro la vida o integridad física de la víctima, violencia, que a decir de Antón Vives, se constituye en el medio capaz de vencer

la voluntad contraria del sujeto contra el que se dirige, y provocar inmediatamente el fin propuesto por el autor (1990, p. 827).

Esta forma de coacción es fundamentalmente subjetiva, y está dirigida directa e intencionalmente a quebrantar la voluntad de la víctima. Tiene como características la de ser: determinada, considerable, seria, posible e inminente. Sin embargo, anota Irureta Goyena, la gravedad de la amenaza debe entenderse en un sentido muy relativo. Su mayor o menor trascendencia depende de factores variables relacionados con el sexo, con la edad, con la psicología de la víctima y que el buen sentido prescribe se dejen librados a la soberana apreciación de los Tribunales (ob. Cit., p. 321).

La instigación se origina cuando una persona induce a otra a la realización de un hecho delictuoso. Hace nacer en otra persona la idea de delinquir o determinar dolosamente a otros para que realicen el injusto, sin que el instigador lleve a cabo el hecho delictivo, porque de lo contrario sería autor. La instigación es accesoria por lo que debe depender de un delito principal. El inductor genera la idea de la comisión dolosa de un delito, cometido por el autor; sin embargo no es necesario que aquél origine el plan del hecho, no basta el consejo o una simple deliberación de ideas hacia el autor, es necesario que la actuación debe ser una *conditio sine quanon* de la resolución delictiva, caso contrario no se dará este grado de participación.

Por otro lado, la inducción debe ser directa, eficaz, es decir debe tener suficiente entidad o fuerza para que el inducido decida cometer el delito y debe comenzar por lo menos con la ejecución del mismo. Se puede decir también, que la instigación consiste en determinar dolosamente en otro, el hecho antijurídico: el que instiga se limita a provocar en el autor la resolución delictiva pese a que no tiene el dominio del hecho mismo.

En nuestra normatividad penal se encuentra tipificada este grado de participación en el Artículo 24, el cual a la letra dice: “El que, dolosamente, determina a otro a cometer el hecho punible será reprimido a la pena que corresponde al autor”. Es preciso señalar que en el Código en el derogado, no existía la figura de instigación, pero en la actualidad resulta relevante el nombramiento de esta clase de participación, puesto que se adecua al avance de la realidad nacional.

El tipo es eminentemente doloso.

La pena aplicable es privativa de la libertad no menor de seis meses ni mayor de tres años.

6.19) ACTOS DE FALSIFICACIÓN O DESTRUCCIÓN DE MATERIAL ELECTORAL TENDIENTES A DIFICULTAR LA ELECCIÓN O FALSEAR SU RESULTADO

Artículo 359 (CP).- Será reprimido con pena privativa de libertad no menor de dos ni mayor de ocho años el que, con propósito de impedir o alterar el resultado de un proceso electoral, realiza cualquiera de las acciones siguientes:

2. Falsifica o destruye de cualquier modo, en todo o en parte un registro electoral, libretas electorales o actas de escrutinio u oculta, retiene o hace desaparecer los documentos mencionados, de manera que el hecho pueda dificultar la elección o falsear su resultado.

El sujeto activo es genérico, pueden serlo incluso los miembros de las fuerzas armadas y la policía nacional y los funcionarios o servidores públicos (con las agravantes de ley). Sujeto pasivo es el Estado.

La acción típica está representada por la conducta del agente, que motivado por la intención de impedir o alterar el resultado de un proceso electoral (dolo específico), realiza cualquiera de las acciones siguientes: Falsifica (modificación ilegal) o destruye de cualquier modo, en todo o en parte un registro electoral, libretas electorales (DNI) o actas de escrutinio u oculta, retiene o hace desaparecer los documentos mencionados, de manera que el hecho pueda dificultar la elección o falsear su resultado (determinación normativa del tipo que introduce una condición objetiva de punibilidad).

La pena a imponerse es privativa de libertad no menor de dos ni mayor de ocho años

6.20) SUSTRACCIÓN, DESTRUCCIÓN O SUSTITUCIÓN DE CEDULAS SUFRAGADAS

Artículo 359 (CP).- Será reprimido con pena privativa de libertad no menor de dos ni mayor de ocho años el que, con propósito de impedir o alterar el resultado de un proceso electoral, realiza cualquiera de las acciones siguientes:

4. Sustraе, destruye o sustituye cédulas de sufragio que fueron depositadas por los electores.

El sujeto activo es genérico, pueden serlo incluso los miembros de las fuerzas armadas y la policía nacional y los funcionarios o servidores públicos (con las agravantes de ley). Sujeto pasivo es el Estado.

La acción típica se encuentra representada por la conducta del agente, que motivada por la intención de impedir o alterar el resultado de un proceso electoral (dolo específico que da al tipo características de uno de tendencia interna trascendente), realiza cualquiera de las acciones siguientes: Sustraе, destruye o sustituye cédulas de sufragio que fueron depositadas por los electores (en este caso se trata de cédulas que válidamente contienen la expresión libre del sufragio popular y antes de ser escrutadas).

Un caso interesante se presentó cuando en el ultimo proceso electoral, muchos personeros de diferentes partidos políticos, reclamaron nulidad de elecciones y denunciaron fraude y responsabilidad penal, al observar que en varios locales de votación habían restos de cédulas quemadas o destruidas. Lo cierto es que no existió ilícito alguno, por cuanto resulta reglamentario el que, una vez finalizado el escrutinio, los miembros de mesa procedan a destruir las cédulas sufragadas.

La pena aplicable es pena privativa de libertad no menor de dos ni mayor de ocho años.

6.21) RECEPCIÓN O RECHAZO INDEBIDO DE VOTO

Artículo 383 (LOE).- Es reprimido con pena privativa de la libertad no menor de seis meses ni mayor de tres años:

c) El miembro de una Mesa de Sufragio que recibe el voto de persona no incluida en la lista de electores de la mesa o rechaza sin justa causa el voto de un elector incluido en dicha lista.

El sujeto activo es específico, sólo puede ser el miembro de la Mesa de sufragio.

Lo injusto se representa por el acto del agente que intencional e irregularmente, permite el voto de un sufragante, no incluido en la lista de electores (el tipo no señala un dolo específico, requiriéndose sólo el acto conciente. Incluso la buena fe de permitir a otra persona el votar para darle facilidades, etc.); o que en el caso contrario, sin mediar causa justa o reglamentaria, rechaza (como acto funcional) el voto de un elector.

La pena aplicable es privativa de la libertad, no menor de seis meses ni mayor de tres años:

6.22) RECEPCIÓN O RECHAZO INJUSTIFICADO DE VOTO

Artículo 359 (CP).- Será reprimido con pena privativa de libertad no menor de dos ni mayor de ocho años el que, con propósito de impedir o alterar el resultado de un proceso electoral, realiza cualquiera de las acciones siguientes:

6. Recibe, siendo miembro de una mesa de sufragio, el voto de un ciudadano no incluido en la lista de electores de esa mesa o rechaza injustificadamente el voto de un elector incluido en dicha lista.

Como en el caso anterior, el sujeto activo es específico, sólo puede ser el miembro de la Mesa de sufragio.

La acción típica, que es similar al caso anterior, se encuentra representada por la conducta del agente, que motivada por la intención de impedir o alterar el resultado de un proceso electoral (dolo específico), realiza cualquiera de las acciones siguientes: Recibe, siendo miembro de una mesa de sufragio, el voto de un ciudadano no incluido en la lista de electores de esa mesa o rechaza injustificadamente el voto de un elector incluido en dicha lista.

La pena a imponerse es privativa de libertad no menor de dos ni mayor de ocho años

6.23) VOTACIÓN FRAUDULENTA

Artículo 386 (LOE).- Es reprimido con pena privativa de la libertad no menor de seis meses ni mayor de dos años aquél que vota con Documento Nacional de Identificación ajeno o sin tener derecho de sufragio.

Este tipo es conocido también como voto múltiple o ilegal

El principio de sufragio igual es uno de los rasgos característicos de todo sistema electoral democrático. De ahí que las leyes electorales sancionen las conductas que tienden a vulnerarlo, pudiendo provenir la conculcación, bien del voto múltiple, bien de la inscripción fraudulenta en una lista electoral o de la emisión asimismo fraudulenta del voto.

En Código Electoral francés (artículo 93), castiga con pena de prisión de seis meses a dos años y multa de 720 a 20,000 francos al ciudadano que, aprovechándose de una inscripción múltiple, vote más de una vez. La ley electoral del Reino Unido (Representation of the people act), considera culpable de delito a la persona que vote más de una vez en el mismo distrito en una elección parlamentaria. Y el artículo 48.1a, castiga a quien vote a sabiendas de que está sujeto a una inhabilitación legal para votar.

En México, la Ley Federal de Organizaciones Políticas y Procesos Electorales, sanciona con pena de prisión hasta de un año o suspensión de derechos políticos hasta por un año, o ambas a juicio del juez, a quien vote más de una vez (Art. 242).

También en Portugal la Ley Electoral (Art, 149), castiga el voto plural con pena de prisión. El artículo 153 del Código Electoral de Costa Rica sanciona con prisión de uno a seis meses no sólo a quien votare más de una vez en una elección, sino también a quien pretendiere hacerlo. Y en España, la ley de Régimen Electoral General, en su artículo 142, castiga con las penas de prisión menor en grado mínimo, inhabilitación especial y multa de 30,000 a 300,000 pesetas, a quienes voten dos o más veces en la misma elección, o a quienes voten dolosamente si capacidad para hacerlo.

Sujeto activo lo podrá ser sólo quien tiene el derecho legítimo del sufragio. Sujeto pasivo es el Estado.

La acción, que es comisiva, representa la conducta intencional del agente que vota con Documento Nacional de Identificación ajeno o sin tener derecho de sufragio.

El tipo es eminentemente doloso.

La pena conminada es privativa de la libertad no menor de seis meses ni mayor de dos años.

6.24) VIOLACIÓN DEL SECRETO DEL VOTO

Artículo 358 (CP).- El elector que da a publicidad el sentido de su voto en el acto electoral, será reprimido con pena privativa de libertad no mayor de un año o con prestación de servicio comunitario de veinte a treinta jornadas.

Artículo 382 (LOE).- Son reprimidos con pena privativa de la libertad no menor de un mes ni mayor de un año:

b) Aquél que trate de conocer el voto de un elector o de obligarlo a votar por determinado candidato u obstruya el desarrollo de los actos electorales, o provoque desórdenes durante éstos.

El secreto del voto es una de las garantías imprescindibles con las que se trata de salvaguardar su libre emisión. De ahí que las leyes electorales sancionen aquellos actos orientados a conculcar ese secreto.

El artículo 141 del Código Electoral Nacional argentino castiga con la pena de prisión de tres meses a tres años, al que utilizare medios tendientes a violar el secreto del sufragio. También el artículo 153 del Código Electoral de la República de Costa Rica, sanciona con la pena de prisión de uno a seis meses a quien violare por cualquier medio

el secreto ajeno. Y en análogo sentido se orienta el artículo 151 de la Ley Electoral portuguesa.

También no sólo se tipifica la vulneración del secreto del voto ajeno, sino también la revelación del propio voto, así, el artículo 142 del Código Electoral Nacional argentino impone la pena de prisión de uno a dieciocho meses al elector que revelare su voto en el momento de emitirlo. Y otro tanto sucede con el artículo 153.g) del Código Electoral de Costa Rica, que sanciona al que, con su firma o de otro modo inequívoco, marcara su voto para hacerlo identificable, lo que entraña obviamente la ruptura del carácter secreto del propio voto.

El sujeto activo es genérico, inclusive lo será el mismo elector.

Conforme a la duplicidad de tipos ya criticada, la acción se representa bajo las siguientes modalidades:

a) Cuando el elector da a publicidad (de motu propio o coaccionado, violentado e incluso engañado) el sentido de su voto en el acto electoral (lo que evidentemente coadyuva al desorden y la afectación del normal desarrollo del acto electoral), en cuyo caso será reprimido con pena privativa de libertad no mayor de un año, o con prestación de servicio comunitario de veinte a treinta jornadas (conforme al tipo contenido en el artículo 358 del C.P.).

b) Cuando el agente (que puede ser cualquiera), por medio de la violencia, coacción o fraude, trate de conocer el voto de un elector o de obligarlo a votar por determinado candidato u obstruya el desarrollo de los actos electorales, o provoque desórdenes

durante éstos. En este caso la pena será pena privativa de la libertad no menor de un mes ni mayor de un año (conforme al tipo contenido en el artículo 382 LOE):

Los tipos descritos son eminentemente dolosos

6.25) DESPOJO O RETENCIÓN INDEBIDA DE DOCUMENTO DE VOTACIÓN

Artículo 359 (CP).- Será reprimido con pena privativa de libertad no menor de dos ni mayor de ocho años el que, con propósito de impedir o alterar el resultado de un proceso electoral, realiza cualquiera de las acciones siguientes:

7. Despoja a un ciudadano, indebidamente, de su libreta electoral o la retiene con el propósito de impedirle que sufrague.

Artículo 384 (LOE).- Son reprimidos con pena privativa de la libertad no menor de un año ni mayor de tres años:

c) Aquél que injustificadamente despoja a una persona de su Documento Nacional de Identificación o lo retiene con el propósito de impedir que el elector concurra a votar. Si el que delinque es funcionario, empleado público o miembro de las Fuerzas Armadas, la pena es de prisión no menor de un año ni mayor de cuatro, con pena accesoria de inhabilitación por igual tiempo al de la condena, conforme a los incisos 1), 2), 3) 4) y 8) del artículo 36 del Código Penal.

Si el culpable fuese funcionario o empleado público, además de la pena indicada sufre pena accesoria de inhabilitación por igual tiempo al de la condena, de conformidad con los incisos 1), 2), 3) 4) y 8) del artículo 36 del Código Penal.

El sujeto activo es genérico, pueden serlo incluso los miembros de las fuerzas armadas y la policía nacional y los funcionarios o servidores públicos (con las agravantes de ley). Sujeto pasivo es el Estado.

La duplicidad normativa obliga también a diferenciar la acción típica en las siguientes modalidades:

a) Despojar a un ciudadano, indebidamente, de su libreta electoral o la retenerla con el propósito de impedirle que sufrague. El tipo contenido en el artículo 359.7 del Código Penal reclama la presencia de un dolo directo, representado por el propósito de impedir o alterar el resultado de un proceso electoral. En este caso la pena será privativa de libertad no menor de dos ni mayor de ocho años

b) Despojar injustificadamente a una persona de su Documento Nacional de Identificación o retenerla con el propósito de impedir que el elector concurra a votar (dolo específico). En este caso, conforme a lo dispuesto por el artículo 384.c de la Ley Orgánica Electoral (LOE), la pena aplicable será pena privativa de la libertad no menor de un año ni mayor de tres años: Si el que delinque es funcionario, empleado público o miembro de las Fuerzas Armadas, la pena es de prisión no menor de un año ni mayor de cuatro, con pena accesoria de inhabilitación por igual tiempo al de la condena, conforme a los incisos 1), 2), 3) 4) y 8) del artículo 36 del Código Penal.

- 1) Privación de la función, cargo o comisión que ejercía el condenado, aunque provenga de elección popular.
- 2) Incapacidad para obtener mandato, cargo, empleo o comisión de carácter público.
- 3) Suspensión de los derechos políticos que señale la sentencia.
- 4) Incapacidad para ejercer por cuenta propia o por intermedio de tercero, profesión, comercio, arte o industria, que deben especificarse en la sentencia.
- 8) Privación de grados militares o policiales, títulos honoríficos u otras distinciones que correspondan al cargo profesión u oficio del que se hubiese servido el agente para cometer el delito.

6.26) AGRAVANTE POR CALIDAD PERSONAL DEL AUTOR

Artículo 360 (CP).- El funcionario o servidor público o miembro de las Fuerzas Armadas o de la Policía Nacional que incurra en uno de los delitos previstos en este Título sufrirá, además, inhabilitación de uno a tres años, conforme al artículo 36, incisos 1 y 2.

- 1) Privación de la función, cargo o comisión que ejercía el condenado, aunque provenga de elección popular.
- 2) Incapacidad para obtener mandato, cargo, empleo o comisión de carácter público.

7) ACTOS DESTINADOS A IMPEDIR, PERTURBAR O DISTORSIONAR EL RESULTADO ELECTORAL

7.1) ALTERACIÓN DEL RESULTADO ELECTORAL

Artículo 359 (CP).- Será reprimido con pena privativa de libertad no menor de dos ni mayor de ocho años el que, con propósito de impedir o alterar el resultado de un proceso electoral, realiza cualquiera de las acciones siguientes:

5. Altera, de cualquier manera, el resultado de una elección o torna imposible la realización del escrutinio.

El sujeto activo es genérico, pueden serlo incluso los miembros de las fuerzas armadas y la policía nacional y los funcionarios o servidores públicos (con las agravantes de ley). Sujeto pasivo es el Estado.

La acción típica involucra la exigencia de un dolo específico, representado por el propósito del agente, de impedir o alterar el resultado de un proceso electoral, realiza cualquiera de las acciones siguientes: Alterar, de cualquier manera (mediante actos de violencia, coacción o fraude), el resultado de una elección o tornar imposible la realización del escrutinio (conteo de votos) como expresión de la objetivización del resultado electoral.

El tipo se manifiesta necesariamente doloso

La pena conminada es privativa de libertad no menor de dos ni mayor de ocho años

7.2) SUSTRACCIÓN, DESTRUCCIÓN O SUSTITUCIÓN DE ÁNFORAS ELECTORALES

Artículo 359 (CP).- Será reprimido con pena privativa de libertad no menor de dos ni mayor de ocho años el que, con propósito de impedir o alterar el resultado de un proceso electoral, realiza cualquiera de las acciones siguientes:

3. Sustraer, destruye o sustituye ánforas utilizadas en una elección antes de realizarse el escrutinio.

El sujeto activo es genérico, pueden serlo incluso los miembros de las fuerzas armadas y la policía nacional y los funcionarios o servidores públicos (con las agravantes de ley). Sujeto pasivo es el Estado.

La acción típica también involucra la exigencia de un dolo específico, representado por el propósito del agente, de impedir o alterar el resultado de un proceso electoral, realizando cualquiera de las acciones siguientes: Sustraer, destruir o sustituir ánforas utilizadas en una elección antes de realizarse el escrutinio (ánforas que todavía contienen las cédulas de votación depositadas en el acto del sufragio).

El tipo se manifiesta necesariamente doloso

La pena conminada es privativa de libertad no menor de dos ni mayor de ocho años

8) CONSECUENCIAS DERIVADAS DE LA OMISIÓN DE LA OBLIGATORIEDAD DEL SUFRAGIO

Como es sabido, el sufragio puede ser meramente voluntario u obligatorio, esto es, puede considerarse como un derecho, pero también sin dejar de ser derecho como una obligación.

El sistema peruano lo determina obligatorio, sancionando la omisión del sufragio administrativamente con multa.

Los ordenamientos que determinan el carácter obligatorio de la emisión del voto, en sintonía con ello, contemplan como conducta sancionable la no emisión del mismo. Es el caso, entre otros países, de Argentina, Bélgica y Luxemburgo.

En Argentina, el Código Electoral Nacional, en su artículo 125, tipifica como falta electoral la no emisión del voto. A su tenor, se impondrá multa de 50 a 500 pesos al elector que dejare de emitir su voto y no se justificare ante cualquier juez electoral de distrito dentro de los sesenta días de la respectiva elección. El infractor no podrá ser designado para desempeñar funciones o empleos públicos durante tres años a partir de la elección. El infractor que no abonare la multa no podrá realizar gestiones o trámites durante un año ante los organismos estatales nacionales, provinciales o municipales.

El Código Electoral belga dedica su Título VI a "De la sanction de l'obligation du vote". En los artículos 207 y siguientes se contempla el procedimiento a seguir para la verificación de los ciudadanos que hayan incumplido su obligación de votar. En los ocho días siguientes a la proclamación de candidatos electos, el comisario de esta averiguación deberá dirigir al juez de paz una lista con los electores que no hayan tomado parte en la votación o cuyas excusas no hayan sido admitidas. Una primera ausencia no justificada será sancionada con advertencia o multa de uno a tres francos. Caso de reincidencia en

los seis años inmediatamente sucesivos, la multa se elevará de tres a veinticinco francos y si las reincidencias se produjeran por tercera y cuarta vez en el plazo de quince años, el elector será borrado de las listas electorales por un período de diez años durante el cual, no podrá recibir ningún nombramiento, promoción o distinción, sea gubernamental o de las administraciones provinciales o municipales.

En cuanto a la Ley Electoral luxemburguesa, de 31 de julio de 1924, en sus artículos 261 y 262, determina que en el mes inmediato a la proclamación del resultado del escrutinio, el oficial del ministerio público confeccionará, bajo el control del juez de paz, una lista con los electores que no hayan tomado parte en la votación o cuyas excusas no se hubieran admitido. Una primera abstención no justificada será sancionada con una multa de 1,000 a 2,500 francos. En caso de reincidencia, la multa será de 5,000 a 10,000 francos.

8.1) OMISIÓN A EXIGENCIA DE PRESENTACIÓN DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD CON CONSTANCIA DE SUFRAGIO POR PARTE DE FUNCIONARIOS Y SERVIDORES PÚBLICOS

Artículo 390 (LOE).- Son reprimidos con pena privativa de la libertad no mayor de seis meses y pena de multa no menor del diez por ciento del ingreso mínimo vital multiplicado por treinta días de multa más pena accesoria de inhabilitación, por igual tiempo que el de la condena, de conformidad con los incisos 1), 2), 3), 4) y 8) del artículo 36 del Código Penal:

c) Los registradores públicos, notarios, escribanos, empleados públicos y demás personas que no exijan la presentación del Documento Nacional de Identificación con la constancia de sufragio en las últimas elecciones, o la dispensa de no haber votado otorgada por el Jurado Nacional de Elecciones, a fin de identificar a quienes intentan realizar actos que requieran tal presentación sin hacerla.

El sujeto activo es específico. Conforme al tipo sólo pueden serlo los registradores públicos, notarios, escribanos, empleados públicos y demás personas obligadas legalmente a exigir al ciudadano la presentación del Documento Nacional de Identificación con la constancia de sufragio en las últimas elecciones, o la dispensa de no haber votado otorgada por el Jurado Nacional de Elecciones.

Lo ilícito radica en la omisión de la obligación jurídica, que el ordenamiento le impone al agente, para preservar la obligatoriedad del voto.

El tipo se representa como doloso.

La pena a imponerse es privativa de la libertad no mayor de seis meses y pena de multa, no menor del diez por ciento del ingreso mínimo vital multiplicado por treinta días de multa, más pena accesoria de inhabilitación, por igual tiempo que el de la condena, de conformidad con los incisos 1), 2), 3), 4) y 8) del artículo 36 del Código Penal:

- 1) Privación de la función, cargo o comisión que ejercía el condenado, aunque provenga de elección popular.
- 2) Incapacidad para obtener mandato, cargo, empleo o comisión de carácter público.
- 3) Suspensión de los derechos políticos que señale la sentencia.

4) Incapacidad para ejercer por cuenta propia o por intermedio de tercero, profesión, comercio, arte o industria, que deben especificarse en la sentencia.

8) Privación de grados militares o policiales, títulos honoríficos u otras distinciones que correspondan al cargo profesión u oficio del que se hubiese servido el agente para cometer el delito.

CAPITULO III

INVESTIGACIÓN REALIZADA

1. EL PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN

El Sistema Electoral en un Estado democrático, tiene como misión fundamental garantizar como elemento nuclear del mismo, la libre expresión de la soberanía popular, lamentablemente la realidad contemporánea y la práctica electoral en nuestro país, nos demuestra, crudamente, que no bastan las garantías de carácter preventivo para evitar la ejecución de actos encaminados a falsear el resultado de las justas electorales; de aquí la necesidad de que las leyes electorales que se postulen en nuestro sistema, dediquen uno de sus capítulos a la tipificación de aquellas conductas que han de ser enjuiciadas como delitos electorales, con la concreción de las penas que les correspondan.

En tal sentido, nuestra experiencia personal en el campo de la administración de justicia electoral y la realidad jurídico-social actual, nos muestra un preocupante alto grado de desprotección del fundamental derecho de sufragio, siendo necesario por ello, a nuestro criterio personal, buscar los factores y causas, de tipo social, normativo entre

otros, que determinan los defectos que originan una inadecuada protección del sistema de control penal, a un bien jurídico tan fundamental como el ejercicio de los derechos políticos, que fundamentan el sistema democrático de gobierno que nos rige, para de esta manera ofrecer aportes que puedan a futuro ser tomados en cuenta para posibles modificaciones legislativas, que complementen el universo normativo penal protector de tan preciado derecho.

Es por ello que nuestro proyecto de investigación se ha estructurado sobre la base de identificar, como problema fundamental de estudio, lo siguiente:

¿ Qué factores determinan y que condiciones contribuyen a qué no exista en el Perú una criminalización integral de las conductas lesivas al derecho de sufragio ?

2. HIPÓTESIS FORMULADAS

2.1. PRIMERA HIPÓTESIS

H – 1.- Los factores que probablemente determinan que no exista en el Perú una criminalización integral de las conductas lesivas al derecho de sufragio, son de naturaleza jurídico-positiva como político criminal:

a) Jurídico-positivo: Por cuanto la normatividad vigente evidencia un sistema insuficiente de protección jurídico penal, que no concretiza típicamente todos los supuestos de afectación del derecho de sufragio.

b) Político criminal: Por cuanto la realidad evidencia una flagrante omisión del Estado, en la formulación de una estrategia integral y oportuna en relación a la lucha contra las conductas que atentan contra el derecho de sufragio.

2.2. SEGUNDA HIPÓTESIS

H – 2.- Las condiciones que contribuyen a que no exista en el Perú una criminalización integral de las conductas lesivas al derecho de sufragio, consisten probablemente en la falta de conciencia política generalizada en la ciudadanía, un adecuado nivel de cultura política y jurídica de la mayoría de legisladores, al conflicto de intereses político partidarios entre grupos parlamentarios que integran el Congreso de la República y a una arraigada cultura del fraude electoral.

3. IDENTIFICACIÓN DE VARIABLES

3.1. PRIMERA HIPÓTESIS: VARIABLES INDEPENDIENTES

a) De índole jurídico-positiva: La normatividad jurídico-penal vigente no tutela integralmente el derecho de sufragio: El sistema normativo punitivo presenta vacíos al respecto de dicha protección penal.

INDICADORES: - Constitución Política: 1979, 1993

- Código penal de 1991 y también los de 1924 y 1863.
- Ley Orgánica Electoral: Ley No 26859 (29 setiembre 1997)
- D. Ley 14207: Registro Electoral del Perú (25 setiembre 1962)
- D. Ley 14250: Elecciones Políticas (05 diciembre 1962)

OPERACIÓN REALIZADA:

1 - Primeramente, se procedió al acopio documental de la legislación que se consignó como medios instrumentales para sustentar y explicar la variable.

Para este efecto fueron útiles las diversas visita de trabajo que realizamos a las siguientes bibliotecas: del Congreso, de la Facultad de Derecho y C.P. de la UNMSM y del Jurado Nacional de Elecciones.

2 - En segundo lugar, se procedió a la sistematización de la información, identificando y clasificando las normas, habiendo obtenido el siguiente orden:

- a) Normas Constitucionales referidas a la determinación y protección de los derechos de la persona humana y de la sociedad.
- b) Normas Constitucionales referidas a la determinación, protección y ejercicio de los derechos políticos de las personas en sociedad.

- c) Normas Constitucionales referidas a las atribuciones y operatividad de las instituciones públicas obligadas a proteger el derecho de sufragio: Jurado Nacional de Elecciones (JNE), Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE), Registro Nacional de Identificación y Estado Civil (RENIEC), Ministerio Público (MP) y Poder Judicial (PJ).
- d) Normas administrativas referidas a las atribuciones y operatividad de las instituciones públicas obligadas a proteger el derecho de sufragio: Jurado Nacional de Elecciones (JNE), Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE), Registro Nacional de Identificación y Estado Civil (RENIEC), Ministerio Público (MP) y Poder Judicial (PJ).
- e) Normas administrativas referidas al proceso de inscripción electoral, tanto de personas (ciudadanos), como de partidos políticos y agrupaciones políticas.
- f) Normas administrativas referidas a la organización y desarrollo de procesos electorales.
- g) Normas de tipo penal, referidas a la determinación típica, proceso y sanción de delitos que atentan contra el derecho de sufragio.
- h) Normas administrativas, referidas a la descripción y sanción de conductas consideradas como “faltas electorales” (ilícitos administrativos electorales).

3 – En tercer lugar se procedió al análisis interpretativo de las muestras, utilizándose los siguientes métodos:

- a) El método histórico; para estudiar la evolución y contenido actual de nuestra legislación en materia de protección al derecho de sufragio. Este estudio nos ha permitido identificar, como una seria problemática nacional, la diversidad de normas que literalmente se

superponen y entran en contradicción, evidenciándose así una seria deficiencia en el tratamiento legislativo de la materia.

b) El método analítico y el método de la síntesis, que nos ha permitido identificar cada uno de los componentes normativos, analizarlos y concluir en que existe serias deficiencias y vacíos en el tratamiento legislativo referente a la protección del derecho de sufragio.

4 – Se identificó como principales problemas, los siguientes:

a) Deficiencia en el tratamiento legislativo. Las normas que protegen el derecho de sufragio se encuentran dispersas en el Código Penal, Ley Orgánica Electoral y D. Ley 14207.

b) Duplicidad de los tipos delictivos existentes, que evidencia una peligrosa posibilidad de inseguridad jurídica.

c) Necesidad de una tipificación oportuna, actualizada y completa de la legislación en la materia, ya que las normas existentes evidencian anacronismo e imperfecciones.

c) Deficiencia en el tratamiento legislativo de los delitos electorales, que en conjunto, deben comprenda las tres modalidades de acción básicas, comprensivas de las diversas modalidades delictivas derivadas: a.- Actos destinados a perturbar o impedir la constitución del registro de electores, el padrón general de votantes y el registro de organizaciones políticas y su funcionamiento; b.- Acciones destinadas a perturbar o impedir el acto de sufragio; c.- Actos destinados a impedir, perturbar o distorsionar el resultado electoral. Adicionalmente también las consecuencias derivadas de la omisión de la obligatoriedad del sufragio.

d) Deficiencia en cuanto al sistema de penas, ya que debido a la especialidad del delito, se postula que se determine un conjunto de sanciones adecuadas y pertinentes al tipo de delincuente y daño al bien jurídico.

b): De índole político-criminal: Omisión evidente del Estado en la formulación de una estrategia integral, en la lucha contra la criminalidad que atenta contra el derecho de sufragio.

INDICADORES: - Documentos del Legislativo y del Ejecutivo pertinentes al caso

- Calidad de los proyectos de Leyes punitivas en materia electoral
- Dicho del ciudadano entrevistado sobre la tutela penal del derecho de sufragio en el país
- Opinión de expertos sobre la política estatal en materia electoral
- Planes de gobierno en materia electoral

OPERACIÓN REALIZADA:

1 – En primer lugar, se procedió al acopio físico de los documentos que se consignó como medios instrumentales para sustentar y explicar la variable.

Para este efecto fueron útiles las diversas visita de trabajo que realizamos a las siguientes bibliotecas: del Congreso, de la Facultad de Derecho y C.P. de la UNMSM y del Jurado Nacional de Elecciones.

Nos apersonamos también a las instalaciones del Congreso de la República, al Jurado Nacional de Elecciones (JNE) y a la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE), para entrevistar y pedir opinión a congresistas y funcionarios electorales.

Visitamos diversos distritos de la capital, para tomar el dicho de los ciudadanos, realizando entrevistas sobre la tutela penal del derecho de sufragio en el país.

Solicitamos también, mediante entrevistas, la opinión de expertos sobre la política estatal en materia electoral

2 - Se procedió a la sistematización de la información, identificando y clasificando los documentos acopiados, como documentos del Legislativo y del Ejecutivo pertinentes al caso, proyectos de Leyes punitivas en materia electoral, etc.

3 – En tercer lugar se procedió al análisis interpretativo de las muestras, utilizándose los siguientes métodos:

a) El método histórico; para estudiar la evolución y contenido actual de nuestra legislación en materia de protección al derecho de sufragio. Este estudio nos ha permitido identificar, como una seria problemática nacional, la diversidad de normas que literalmente se superponen y entran en contradicción, evidenciándose así una seria deficiencia en el tratamiento legislativo de la materia.

b) El método analítico y el método de la síntesis, que nos ha permitido identificar cada uno de los componentes documentarios y normativos, analizarlos y concluir en que existe

serias deficiencias y vacíos en el tratamiento legislativo referente a la protección del derecho de sufragio.

4 – Realizado el vaciado de la información correspondiente a las entrevistas realizadas a miembros del Jurado Nacional de Elecciones, magistrados y especialistas, se llegó, mediante el método deductivo, a las siguientes conclusiones:

UNIVERSO: 30 ENTREVISTADOS

TÉCNICA: CUESTIONARIO ABIERTO

a. Con respecto a si el derecho de sufragio se encuentra debidamente garantizado en el sistema normativo penal vigente, los entrevistados se pronunciaron de la siguiente manera:

53 % ... Si se encuentra debidamente
garantizado

47 % ... No se encuentra suficientemente
garantizado

b. Con respecto a cuáles serían los factores que determinan la insuficiente protección al derecho de sufragio, los entrevistados se pronunciaron de la siguiente manera:

29 % ... Insuficiencia de la normatividad
penal

71 % ... Deficiencia del diseño político
criminal

c. Con respecto al efecto que causaría una inadecuada protección del derecho de sufragio, los entrevistados se pronunciaron de la siguiente manera:

47 % ... Daño al derecho del elector

53 % ... Daño al sistema democrático

d. Con respecto a las causas que determinarían la insuficiente protección normativo penal del derecho de sufragio, los entrevistados se pronunciaron de la siguiente manera:

16 % ... Falta de decisión de los legisladores,
de criminalizar suficientemente, los
actos que atentan contra el derecho
de sufragio.

71 % ... Falta, por parte del legislador, de
suficientes conocimientos doctrinarios
y de legislación comparada, sobre delitos
que atentan contra el derecho de sufragio.

8% ... Intereses político partidarios de los grupos
que integran el congreso.

5% ... Cultura del fraude electoral.

e. Con respecto a si los actos que atentan contra el derecho de sufragio, deben tipificarse en el Código penal, en una norma especial o en un Código Electoral, los entrevistados se pronunciaron de la siguiente manera:

57 % ... En el Código penal

43 % ... En un Código Electoral

5 – Realizado el vaciado de la información correspondiente a las entrevistas realizadas a ciudadanos electores, se ha llegado a las siguientes conclusiones:

UNIVERSO: 800 ENTREVISTAS REALIZADAS ENTRE LOS DISTRITOS DE SAN JUAN DE MIRAFLORES, VILLA EL SALVADOR, MIRAFLORES, LINCE, LA MOLINA, SURCO, SAN BORJA Y BREÑA.

ENTREVISTADOS: Ciudadanos de 18 a 60 años de edad, entre profesionales, técnicos, amas de casa, trabajadores y estudiantes universitarios.

TÉCNICA: ENCUESTA MEDIANTE CUESTIONARIO MIXTO

a. Con respecto a si el derecho de sufragio se encuentra debidamente garantizado o protegido por las leyes penales en nuestro país, los encuestados se pronunciaron de la siguiente manera:

16 % ... Si se encuentra suficientemente
garantizado

72 % ... No se encuentra suficientemente
garantizado

12 % ... No sabe, no opina

b. Con respecto a los factores que determinarían la insuficiente protección al derecho de sufragio, los encuestados se pronunciaron de la siguiente manera:

12 % ... Insuficiencia de las leyes penales

83 % ... Deficiencia en la forma como el Estado
enfrenta la protección del derecho de
sufragio

5 % ... No sabe, no opina

c. Con respecto al efecto que causaría una inadecuada protección del derecho de sufragio, los encuestados se pronunciaron de la siguiente manera:

67 % ... Daño al derecho del elector

29 % ... Daño al sistema democrático

4 % ... No sabe, no opina

d. Con respecto a las causas que determinarían la insuficiente protección penal del derecho de sufragio, los encuestados se pronunciaron de la siguiente manera:

28 % ... Falta de decisión de los legisladores,
de sancionar adecuadamente, los
actos que atentan contra el derecho
de sufragio.

17 % ... Falta, por parte del legislador, de
suficientes conocimientos doctrinarios
y de legislación comparada, sobre

delitos que atentan contra el derecho
de sufragio.

46 % ... Intereses político partidarios de los
grupos que integran el congreso.

6 % ... Cultura del fraude electoral.

3 % ... No sabe, no opina

e. Con respecto a si consideran que los actos que atentan contra el derecho de sufragio, deben tipificarse en el Código penal, en una ley especial o en un Código Electoral.

11 % ... En el Código penal

27 % ... En una ley especial

59 % ... En un Código Electoral

3 % ... No sabe, no opina

6 – Se identificó como principales problemas, los siguientes:

a) Deficiencia en el tratamiento legislativo. Las normas que protegen el derecho de sufragio se encuentran dispersas en el Código Penal, Ley Orgánica Electoral y D. Ley 14207.

b) Duplicidad de los tipos delictivos existentes, que evidencia una peligrosa posibilidad de inseguridad jurídica.

c) Necesidad de una tipificación oportuna, actualizada y completa de la legislación en la materia, ya que las normas existentes evidencian anacronismo e imperfecciones.

c) Deficiencia en el tratamiento legislativo de los delitos electorales, que en conjunto, deben comprenda las tres modalidades de acción básicas, comprensivas de las diversas

modalidades delictivas derivadas: a.- Actos destinados a perturbar o impedir la constitución del registro de electores, el padrón general de votantes y el registro de organizaciones políticas y su funcionamiento; b.- Acciones destinadas a perturbar o impedir el acto de sufragio; c.- Actos destinados a impedir, perturbar o distorsionar el resultado electoral. Adicionalmente también las consecuencias derivadas de la omisión de la obligatoriedad del sufragio.

d) Deficiencia en cuanto al sistema de penas, ya que debido a la especialidad del delito, se postula que se determine un conjunto de sanciones adecuadas y pertinentes al tipo de delincuente y daño al bien jurídico.

3.2. SEGUNDA HIPÓTESIS: VARIABLES CONCURRENTES

a) Falta de conciencia política generalizada en la ciudadanía: Gran parte del universo de la población electoral del Perú, hábil para ejercer su derecho al sufragio, carece aún de un adecuado nivel de conciencia en relación a la identificación de sus derechos y obligaciones políticas. La mayoría es indiferente a la necesidad de asegurar debidamente el derecho del electoral, como fundamento de la transparencia y legitimidad del proceso electoral.

INDICADORES: - Datos sociométricos sobre el nivel de conciencia política de las personas que conforman la Unidad de Análisis.

- Fraudes electorales perpetrados en los procesos electorales durante el periodo que comprende la investigación

- Quejas o reclamos por fraude electoral o atentados contra el derecho del elector ante los organismos electorales, por parte de la ciudadanía organizada o no

- Denuncias ante la Fiscalía por delitos contra la voluntad popular
- Información de medios de comunicación sobre fraude electoral y atentados contra el derecho de sufragio y su escasa repercusión en la ciudadanía
- Dicho del entrevistado
- Informes de la Defensoría del pueblo sobre procesos electorales realizados
- Informes de instituciones electorales especializadas en relación a procesos electorales realizados en el lapso que comprende la investigación

OPERACIÓN REALIZADA:

1 – En primer lugar, se procedió al acopio físico de los documentos que se consignó como medios instrumentales para sustentar y explicar la variable.

Para este efecto fueron útiles las diversas visita de trabajo que realizamos a las siguientes instituciones: Congreso de la República, Jurado Nacional de Elecciones (JNE), Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) y Defensoría del Pueblo, para entrevistar y pedir opinión a congresistas, funcionarios electorales y especialistas.

Visitamos diversos distritos de la capital, para tomar el dicho de los ciudadanos, realizando entrevistas sobre la tutela penal del derecho de sufragio en el país.

Solicitamos también, mediante entrevistas, la opinión de expertos sobre sociología y política en materia electoral.

2 - Se procedió a la sistematización de la información, identificando y clasificando los datos acopiados:

- Denuncias periodísticas de fraudes electorales cometidos durante las elecciones presidenciales del año 2000 (Diario El Comercio, La República, El Peruano, Expreso, etc.) .
- Denuncias de fraudes electorales presentadas ante la Defensoría del Pueblo durante las elecciones presidenciales del año 2000.
- Denuncias por delitos electorales tramitadas por la procuraduría del Jurado Nacional de Elecciones (JNE) y de la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) 2003 al 2005.
- Informes y denuncias de Instituciones de Observación Electoral especializados, como del Centro Carter y el Instituto Nacional Demócrata Estadounidense (Estas instituciones, en mayo del 2000, recibieron 150 denuncias sobre irregularidades en el proceso electoral, recopiladas y fichadas el 9 de abril por el Foro Democrático, elevándose a más de 1600 las denuncias de irregularidades en la primera vuelta electoral, tales como: existencia de cédulas recortadas en la línea de Perú Posible, personas que accedieron a votar con cédulas marcadas por la opción presidencial de Perú 2000 y sus candidatos al Congreso. El Foro Democrático recogió otras denuncias de suma gravedad que sumadas a las 690 denuncias que recibió la Asociación Civil Transparencia, constituyen un record en la historia electoral peruana.

- Informe la Defensoría del Pueblo (Informe de Supervisión Electoral No 4 – 2000), sobre “investigación sobre el uso de recursos públicos y la participación de funcionarios y servidores públicos en actividades proselitistas a favor de determinados candidatos”, en la que se revelan una serie de actos irregulares y fraudulentos de proselitismo electoral.
- Dichos de los entrevistados, funcionarios y especialistas en el tema electoral.
- Dicho de los ciudadanos.

3 – En tercer lugar se procedió al análisis interpretativo de las muestras, utilizándose los siguientes métodos:

a) El método deductivo; empleado para establecer una premisa o referente cognitivo de carácter general aplicable al caso concreto, y luego del juicio que expresa el significado de la muestra, realizar la inferencia respectiva para obtener la conclusión de menor extensión.

b) El método inductivo; que se aplica cada vez que sea necesario ascender de lo singular a lo particular y de allí a lo general.

c) El método histórico; para estudiar la evolución y contenido actual del grado de conciencia política alcanzada por nuestra sociedad.

d) El método analítico y el método de la síntesis, que nos ha permitido identificar cada uno de los componentes que identifican el grado de desarrollo de la madurez política de nuestra ciudadanía.

4 – Realizado el vaciado de la información correspondiente a las entrevistas realizadas a miembros del Jurado Nacional de Elecciones, magistrados, especialistas y ciudadanos electores, se llegó, mediante el método deductivo, a las siguientes conclusiones:

REALIZADO EL VACIADO DE LA INFORMACIÓN CORRESPONDIENTE A LAS ENTREVISTAS REALIZADAS A MIEMBROS DEL JURADO NACIONAL DE ELECCIONES, MAGISTRADOS Y ESPECIALISTAS, SE HA LLEGADO A LAS SIGUIENTES CONCLUSIONES:

UNIVERSO: 30 ENTREVISTADOS

TÉCNICA: CUESTIONARIO ABIERTO

1. Con respecto a la forma como ejercen sus derechos políticos los ciudadanos en el Perú, los entrevistados se pronunciaron de la siguiente manera:

55 % ... Por decisión propia

41 % ... Por temor a la multa

4 % ... Por que acata disposiciones
de su partido

2. Con respecto a si los ciudadanos están debidamente informados de sus derechos electorales y/o políticos, los entrevistados se pronunciaron de la siguiente manera:

29 % ... Si lo esta

4 % ... No lo esta

67 % ... No suficientemente

informado

3. Con respecto a si el derecho de sufragio se encuentra debidamente garantizado en el sistema normativo penal vigente, los entrevistados se pronunciaron de la siguiente manera:

53 % ... Si se encuentra debidamente

garantizado

47 % ... No se encuentra suficientemente

garantizado

4. Con respecto al efecto que causaría una inadecuada protección del derecho de sufragio, los entrevistados se pronunciaron de la siguiente manera:

47 % ... Daño al derecho del elector

53 % ... Daño al sistema democrático

REALIZADO EL VACIADO DE LA INFORMACIÓN CORRESPONDIENTE A LAS ENTREVISTAS REALIZADAS A CIUDADANOS ELECTORES, SE HA LLEGADO A LAS SIGUIENTES CONCLUSIONES:

UNIVERSO: 800 ENTREVISTAS REALIZADAS ENTRE LOS DISTRITOS DE SAN JUAN DE MIRAFLORES, VILLA EL SALVADOR, MIRAFLORES, LINCE, LA MOLINA, SURCO, SAN BORJA Y BREÑA.

ENTREVISTADOS: Ciudadanos de 18 a 60 años de edad, entre profesionales, técnicos, amas de casa, trabajadores y estudiantes universitarios.

TÉCNICA: ENCUESTA MEDIANTE CUESTIONARIO MIXTO

1. Con respecto a cómo ejerce su derecho al libre sufragio, los encuestados se pronunciaron de la siguiente manera:

80 % ... Por decisión propia
16 % ... Por temor a la multa
4 % ... No ejerce su derecho al
sufragio

2. Con respecto a si están debidamente informados de sus derechos electorales, los encuestados se pronunciaron de la siguiente manera:

31 % ... Si
11 % ... No
58 % ... No completamente informado

3. Con respecto a si el derecho de sufragio se encuentra debidamente garantizado o protegido por las leyes penales en nuestro país, los encuestados se pronunciaron de la siguiente manera:

16 % ... Si se encuentra suficientemente
garantizado

72 % ... No se encuentra suficientemente
garantizado

12 % ... No sabe, no opina

4. Con respecto a las causas que determinarían la insuficiente protección penal del derecho de sufragio, los encuestados se pronunciaron de la siguiente manera:

28 % ... Falta de decisión de los legisladores,
de sancionar adecuadamente, los
actos que atentan contra el derecho
de sufragio.

17 % ... Falta, por parte del legislador, de
suficientes conocimientos doctrinarios
y de legislación comparada, sobre
delitos que atentan contra el derecho
de sufragio.

46 % ... Intereses político partidarios de los
grupos que integran el congreso.

6 % ... Cultura del fraude electoral.

3 % ... No sabe, no opina

5 – Se identificó como principales problemas, los siguientes:

- a) Carencia de un adecuado nivel social de conciencia cívico-electoral.
- b) Elevado nivel de desconocimiento de los derechos electorales.
- c) Elevado índice de apatía y desinterés del electorado en la protección de sus derechos políticos.
- c) Deficiencia por parte del Estado, en el tratamiento de la política de aseguramiento de los derechos políticos del ciudadano.
- d) Deficiencia del Estado en lo referente a la investigación y sanción de actos denunciados como de fraude electoral, que conlleva el descontento y la pérdida de legitimidad del sistema.

b) Nivel de cultura política y jurídica de la mayoría de legisladores: La mayoría de legisladores carecen de suficientes conocimiento sobre Ciencia Política, sobre el derecho de sufragio como derecho político fundamental, así como de adecuados conocimientos doctrinarios y de legislación comparada, sobre delitos que atentan contra el derecho de sufragio.

INDICADORES: - Actas de Debates sobre proyectos inherentes a la formulación de la ley electoral

- Opinión de expertos en Ciencia Política y Derecho Electoral
- Dicho de los congresistas entrevistados
- Legislación electoral de: Argentina, Ecuador, Colombia, Costa Rica, Alemania, España, Portugal

- Informes de instituciones nacionales especializadas en materia electoral sobre la cultura política y jurídica de los congresistas
- Datos sobre la consulta por los congresistas de obras sobre Ciencia Política, en especial en materia electoral, de la Biblioteca del Congreso

OPERACIÓN REALIZADA:

1 – En primer lugar, se procedió al acopio físico de los documentos que se consignó como medios instrumentales para sustentar y explicar la variable.

Para este efecto fueron útiles las diversas visita de trabajo que realizamos a las siguientes bibliotecas: del Congreso, de la Facultad de Derecho y C.P. de la UNMSM y del Jurado Nacional de Elecciones.

Nos apersonamos también a las instalaciones del Congreso de la República, al Jurado Nacional de Elecciones (JNE) y a la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE), para entrevistar y pedir opinión a congresistas y funcionarios electorales.

Visitamos diversos distritos de la capital, para tomar el dicho de los ciudadanos, realizando entrevistas sobre la tutela penal del derecho de sufragio en el país.

Solicitamos también, mediante entrevistas, la opinión de expertos sobre la política estatal en materia electoral

Se consultó también legislación comparada en la materia; Legislación electoral de: Argentina, Ecuador, Colombia, Costa Rica, Alemania, España, Portugal

2 - Se procedió a la sistematización de la información, identificando y clasificando los documentos acopiados, como documentos del Legislativo y del Ejecutivo pertinentes al caso, proyectos de Leyes punitivas en materia electoral, etc.

3 – En tercer lugar se procedió al análisis interpretativo de las muestras, utilizándose los siguientes métodos:

a) El método histórico; para estudiar la evolución y contenido actual de nuestra legislación en materia de protección al derecho de sufragio. Este estudio nos ha permitido identificar, como una seria problemática nacional, la diversidad de normas que literalmente se superponen y entran en contradicción, evidenciándose así una seria deficiencia en el tratamiento legislativo de la materia.

b) El método analítico y el método de la síntesis, que nos ha permitido identificar cada uno de los componentes documentarios y normativos, analizarlos y concluir en que existe serias deficiencias y des conocimiento técnico en el tratamiento legislativo referente a la protección del derecho de sufragio.

4 – Realizado el vaciado de la información correspondiente a las entrevistas realizadas a miembros del Jurado Nacional de Elecciones, magistrados, especialistas y ciudadanos electores, se llegó, mediante el método deductivo, a las siguientes conclusiones:

REALIZADO EL VACIADO DE LA INFORMACIÓN CORRESPONDIENTE A LAS ENTREVISTAS REALIZADAS A MIEMBROS DEL JURADO NACIONAL DE ELECCIONES, MAGISTRADOS Y ESPECIALISTAS, SE HA LLEGADO A LAS SIGUIENTES CONCLUSIONES:

UNIVERSO: 30 ENTREVISTADOS

TÉCNICA: CUESTIONARIO ABIERTO

1. Con respecto a si el derecho de sufragio se encuentra debidamente garantizado en el sistema normativo penal vigente, los entrevistados se pronunciaron de la siguiente manera:

53 % ... Si se encuentra debidamente
garantizado

47 % ... No se encuentra suficientemente
garantizado

2. Con respecto a cuáles serían los factores que determinan la insuficiente protección al derecho de sufragio, los entrevistados se pronunciaron de la siguiente manera:

29 % ... Insuficiencia de la normatividad
penal

71 % ... Deficiencia del diseño político
criminal

3. Con respecto al efecto que causaría una inadecuada protección del derecho de sufragio, los entrevistados se pronunciaron de la siguiente manera:

47 % ... Daño al derecho del elector

53 % ... Daño al sistema democrático

4. Con respecto a las causas que determinarían la insuficiente protección normativo penal del derecho de sufragio, los entrevistados se pronunciaron de la siguiente manera:

16 % ... Falta de decisión de los legisladores,
de criminalizar suficientemente, los
actos que atentan contra el derecho
de sufragio.

71 % ... Falta, por parte del legislador, de
suficientes conocimientos doctrinarios
y de legislación comparada, sobre delitos
que atentan contra el derecho de sufragio.

8% ... Intereses político partidarios de los grupos
que integran el congreso.

5% ... Cultura del fraude electoral.

REALIZADO EL VACIADO DE LA INFORMACIÓN CORRESPONDIENTE A LAS ENTREVISTAS REALIZADAS A CIUDADANOS ELECTORES, SE HA LLEGADO A LAS SIGUIENTES CONCLUSIONES:

UNIVERSO: 800 ENTREVISTAS REALIZADAS ENTRE LOS DISTRITOS DE SAN JUAN DE MIRAFLORES, VILLA EL SALVADOR, MIRAFLORES, LINCE, LA MOLINA, SURCO, SAN BORJA Y BREÑA.

ENTREVISTADOS: Ciudadanos de 18 a 60 años de edad, entre profesionales, técnicos, amas de casa, trabajadores y estudiantes universitarios.

TÉCNICA: ENCUESTA MEDIANTE CUESTIONARIO MIXTO

1. Con respecto a si el derecho de sufragio se encuentra debidamente garantizado o protegido por las leyes penales en nuestro país, los encuestados se pronunciaron de la siguiente manera:

16 % ... Si se encuentra suficientemente
garantizado

72 % ... No se encuentra suficientemente
garantizado

12 % ... No sabe, no opina

2. Con respecto a los factores que determinarían la insuficiente protección al derecho de sufragio, los encuestados se pronunciaron de la siguiente manera:

12 % ... Insuficiencia de las leyes penales

83 % ... Deficiencia en la forma como el Estado
enfrenta la protección del derecho de
sufragio

5 % ... No sabe, no opina

3. Con respecto al efecto que causaría una inadecuada protección del derecho de sufragio, los encuestados se pronunciaron de la siguiente manera:

67 % ... Daño al derecho del elector

29 % ... Daño al sistema democrático

4 % ... No sabe, no opina

4. Con respecto a las causas que determinarían la insuficiente protección penal del derecho de sufragio, los encuestados se pronunciaron de la siguiente manera:

28 % ... Falta de decisión de los legisladores,
de sancionar adecuadamente, los
actos que atentan contra el derecho
de sufragio.

17 % ... Falta, por parte del legislador, de
suficientes conocimientos doctrinarios
y de legislación comparada, sobre

delitos que atentan contra el derecho
de sufragio.

46 % ... Intereses político partidarios de los
grupos que integran el congreso.

6 % ... Cultura del fraude electoral.

3 % ... No sabe, no opina

5 – Se identificó como principales problemas, los siguientes:

a) Fundamentalmente, la deficiencia en el tratamiento legislativo de la protección del derecho de sufragio se debe a desconocimiento doctrinario del tema por parte de los legisladores.

b) Inadecuado nivel de conocimiento sobre Ciencia Política y Derecho de Sufragio.

c) Inadecuado nivel de conocimiento del legislador del derecho comparado.

c) Deficiencia en el tratamiento legislativo de los delitos electorales, que en conjunto, deben comprenda las tres modalidades de acción básicas, comprensivas de las diversas modalidades delictivas derivadas: a.- Actos destinados a perturbar o impedir la constitución del registro de electores, el padrón general de votantes y el registro de organizaciones políticas y su funcionamiento; b.- Acciones destinadas a perturbar o impedir el acto de sufragio; c.- Actos destinados a impedir, perturbar o distorsionar el resultado electoral. Adicionalmente también las consecuencias derivadas de la omisión de la obligatoriedad del sufragio.

d) Deficiencia en cuanto al sistema de penas, ya que debido a la especialidad del delito, se postula que se determine un conjunto de sanciones adecuadas y pertinentes al tipo de delincuente y daño al bien jurídico.

c) Conflicto de intereses de los grupos que integran el Congreso: Los intereses de diversa índole, como político partidario, económico, cultural, entre otros, dificultan la adopción de planteamientos coherentes para tutelar integralmente el derecho de sufragio.

INDICADORES: - Informes de instituciones especializadas en materia electoral, sobre las pugnas que se manifiestan en el interior del Congreso, relacionadas a los disímiles intereses que presentan los grupos políticos al tratar el tema electoral.

- Informes o denuncias a través de los medios de comunicación social sobre los enfrentamientos de grupos de congresistas
- Artículos de especialistas sobre la división de grupos en el Congreso, en función de los intereses de los congresistas.
- Opinión de expertos sobre las pugnas entre los grupos parlamentarios
- Dicho de los congresistas entrevistados
- Dicho de los electores entrevistados

OPERACIÓN REALIZADA:

1 – En primer lugar, se procedió al acopio físico de los documentos que se consignó como medios instrumentales para sustentar y explicar la variable.

Para este efecto fueron útiles las diversas visita de trabajo que realizamos a las siguientes instituciones: Congreso de la República, Jurado Nacional de Elecciones (JNE),

Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) y Defensoría del Pueblo, para entrevistar y pedir opinión a congresistas, funcionarios electorales y especialistas.

Visitamos diversos distritos de la capital, para tomar el dicho de los ciudadanos, realizando entrevistas sobre la tutela penal del derecho de sufragio en el país.

Solicitamos también, mediante entrevistas, la opinión de expertos sobre sociología y política en materia electoral.

2 - Se procedió a la sistematización de la información, identificando y clasificando los datos acopiados:

- Denuncias periodísticas de pugnas políticas y fraudes electorales cometidos durante las elecciones presidenciales del año 2000 (Diario El Comercio, La República, El Peruano, Expreso, etc.) .
- Denuncias de enfrentamientos partidarios y fraudes electorales presentadas ante la Defensoría del Pueblo durante las elecciones presidenciales del año 2000.
- Denuncias por delitos electorales tramitadas por la procuraduría del Jurado Nacional de Elecciones (JNE) y de la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) 2003 al 2005.
- Informes y denuncias de Instituciones de Observación Electoral especializados, como del Centro Carter, el Instituto Nacional Demócrata Estadounidense, Foro Democrático y Asociación Civil Transparencia, sobre enfrentamientos y luchas al interior de las agrupaciones políticas.
- Informe la Defensoría del Pueblo (Informe de Supervisión Electoral No 4 – 2000), sobre “investigación sobre el uso de recursos públicos y la participación de

funcionarios y servidores públicos en actividades proselitistas a favor de determinados candidatos”, en la que se revelan una serie de actos irregulares y fraudulentos de proselitismo electoral.

- Dichos de los entrevistados, funcionarios y especialistas en el tema electoral.
- Dicho de los ciudadanos.

3 – En tercer lugar se procedió al análisis interpretativo de las muestras, utilizándose los siguientes métodos:

a) El método deductivo; empleado para establecer una premisa o referente cognitivo de carácter general aplicable al caso concreto, y luego del juicio que expresa el significado de la muestra, realizar la inferencia respectiva para obtener la conclusión de menor extensión.

b) El método inductivo; que se aplica cada vez que sea necesario ascender de lo singular a lo particular y de allí a lo general.

c) El método histórico; para estudiar la evolución y contenido actual del grado de conciencia política alcanzada por nuestra sociedad.

d) El método analítico y el método de la síntesis, que nos ha permitido identificar cada uno de los componentes que identifican el grado de desarrollo de la madurez política de nuestra ciudadanía y el grado de conocimiento y preparación de nuestros legisladores.

4 – Realizado el vaciado de la información correspondiente a las entrevistas realizadas a miembros del Jurado Nacional de Elecciones, magistrados, especialistas y ciudadanos electores, se llegó, mediante el método deductivo, a las siguientes conclusiones:

REALIZADO EL VACIADO DE LA INFORMACIÓN CORRESPONDIENTE A LAS ENTREVISTAS REALIZADAS A MIEMBROS DEL JURADO NACIONAL DE ELECCIONES, MAGISTRADOS Y ESPECIALISTAS, SE HA LLEGADO A LAS SIGUIENTES CONCLUSIONES:

UNIVERSO: 30 ENTREVISTADOS

TÉCNICA: CUESTIONARIO ABIERTO

1. Con respecto a si el derecho de sufragio se encuentra debidamente garantizado en el sistema normativo penal vigente, los entrevistados se pronunciaron de la siguiente manera:

53 % ... Si se encuentra debidamente
garantizado

47 % ... No se encuentra suficientemente
garantizado

2. Con respecto a cuáles serían los factores que determinan la insuficiente protección al derecho de sufragio, los entrevistados se pronunciaron de la siguiente manera:

29 % ... Insuficiencia de la normatividad
penal

71 % ... Deficiencia del diseño político
criminal

3. Con respecto al efecto que causaría una inadecuada protección del derecho de sufragio, los entrevistados se pronunciaron de la siguiente manera:

47 % ... Daño al derecho del elector

53 % ... Daño al sistema democrático

4. Con respecto a las causas que determinarían la insuficiente protección normativo penal del derecho de sufragio, los entrevistados se pronunciaron de la siguiente manera:

16 % ... Falta de decisión de los legisladores,
de criminalizar suficientemente, los
actos que atentan contra el derecho
de sufragio.

71 % ... Falta, por parte del legislador, de
suficientes conocimientos doctrinarios
y de legislación comparada, sobre delitos
que atentan contra el derecho de sufragio.

8% ... Intereses político partidarios de los grupos
que integran el congreso.

5% ... Cultura del fraude electoral.

REALIZADO EL VACIADO DE LA INFORMACIÓN CORRESPONDIENTE A LAS ENTREVISTAS REALIZADAS A CIUDADANOS ELECTORES, SE HA LLEGADO A LAS SIGUIENTES CONCLUSIONES:

UNIVERSO: 800 ENTREVISTAS REALIZADAS ENTRE LOS DISTRITOS DE SAN JUAN DE MIRAFLORES, VILLA EL SALVADOR, MIRAFLORES, LINCE, LA MOLINA, SURCO, SAN BORJA Y BREÑA.

ENTREVISTADOS: Ciudadanos de 18 a 60 años de edad, entre profesionales, técnicos, amas de casa, trabajadores y estudiantes universitarios.

TÉCNICA: ENCUESTA MEDIANTE CUESTIONARIO MIXTO

1. Con respecto a si el derecho de sufragio se encuentra debidamente garantizado o protegido por las leyes penales en nuestro país, los encuestados se pronunciaron de la siguiente manera:

16 % ... Si se encuentra suficientemente
garantizado

72 % ... No se encuentra suficientemente
garantizado

12 % ... No sabe, no opina

2. Con respecto a los factores que determinarían la insuficiente protección al derecho de sufragio, los encuestados se pronunciaron de la siguiente manera:

12 % ... Insuficiencia de las leyes penales

83 % ... Deficiencia en la forma como el Estado
enfrenta la protección del derecho de
sufragio

5 % ... No sabe, no opina

3. Con respecto al efecto que causaría una inadecuada protección del derecho de sufragio, los encuestados se pronunciaron de la siguiente manera:

67 % ... Daño al derecho del elector

29 % ... Daño al sistema democrático

4 % ... No sabe, no opina

4. Con respecto a las causas que determinarían la insuficiente protección penal del derecho de sufragio, los encuestados se pronunciaron de la siguiente manera:

28 % ... Falta de decisión de los legisladores,
de sancionar adecuadamente, los
actos que atentan contra el derecho
de sufragio.

17 % ... Falta, por parte del legislador, de
suficientes conocimientos doctrinarios

y de legislación comparada, sobre delitos que atentan contra el derecho de sufragio.

46 % ... Intereses político partidarios de los grupos que integran el congreso.

6 % ... Cultura del fraude electoral.

3 % ... No sabe, no opina

5 – Se identificó como principales problemas, los siguientes:

a) Deficiencia en el tratamiento legislativo en materia de protección del derecho de sufragio, basado fundamentalmente en las contradicciones que evidencian los grupos políticos en el seno del Congreso.

b) Desprestigio y alarmantes niveles de impopularidad del Congreso, debido a que la ciudadanía percibe claramente que los legisladores orientan sus decisiones basados no en el bien común, sino en sus propios intereses., que evidencia una peligrosa posibilidad de inseguridad jurídica.

c) División e incoherencia en la producción legislativa en materia electoral de los grupos que integran el Congreso.

d) Cultura del fraude electoral: Costumbre arraigada en nuestros sistema político-social, que evidencia el menosprecio a la libre voluntad ciudadana en el ejercicio de sus derechos políticos: en este sentido, se ha constituido en tradicional en el Perú, que los

contendores en el proceso electoral, generalmente tiendan a burlar la voluntad popular en el afán de ganar las elecciones.

INDICADORES: - Libros, artículos y ensayos sobre fraude electoral, perpetrados en el Perú

- Datos sobre anulación de elecciones por fraude electoral
- Publicaciones periodísticas sobre fraudes electorales
- Documentos de las Comisiones Investigadoras del Congreso sobre fraudes electorales
- Dicho de los congresistas entrevistados sobre fraudes electorales
- Dicho de los electores entrevistados sobre fraudes electorales
- Dicho de los líderes y representantes políticos entrevistados sobre la cultura del fraude electoral en el Perú
- Informes de instituciones electorales especializadas sobre fraude electoral en el Perú
- Informes de la Defensoría del Pueblo sobre fraude electoral

OPERACIÓN REALIZADA:

1 – En primer lugar, se procedió al acopio físico de los documentos que se consignó como medios instrumentales para sustentar y explicar la variable.

Para este efecto fueron útiles las diversas visita de trabajo que realizamos a las siguientes instituciones: Congreso de la República, Jurado Nacional de Elecciones (JNE), Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) y Defensoría del Pueblo, para entrevistar y pedir opinión a congresistas, funcionarios electorales y especialistas.

Visitamos diversos distritos de la capital, para tomar el dicho de los ciudadanos, realizando entrevistas sobre la tutela penal del derecho de sufragio en el país.

Solicitamos también, mediante entrevistas, la opinión de expertos sobre sociología y política en materia electoral.

2 - Se procedió a la sistematización de la información, identificando y clasificando los datos acopiados:

- Denuncias periodísticas de pugnas políticas y fraudes electorales cometidos durante las elecciones presidenciales del año 2000 (Diario El Comercio, La República, El Peruano, Expreso, etc.) .
- Denuncias de enfrentamientos partidarios y fraudes electorales presentadas ante la Defensoría del Pueblo durante las elecciones presidenciales del año 2000.
- Denuncias por delitos electorales tramitadas por la procuraduría del Jurado Nacional de Elecciones (JNE) y de la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) 2003 al 2005.
- Informes y denuncias de Instituciones de Observación Electoral especializados, como del Centro Carter, el Instituto Nacional Demócrata Estadounidense, Foro Democrático y Asociación Civil Transparencia, sobre enfrentamientos y luchas al interior de las agrupaciones políticas.
- Informe la Defensoría del Pueblo (Informe de Supervisión Electoral No 4 – 2000), sobre “investigación sobre el uso de recursos públicos y la participación de funcionarios y servidores públicos en actividades proselitistas a favor de

determinados candidatos”, en la que se revelan una serie de actos irregulares y fraudulentos de proselitismo electoral.

- Dichos de los entrevistados, funcionarios y especialistas en el tema electoral.
- Dicho de los ciudadanos.

3 – En tercer lugar se procedió al análisis interpretativo de las muestras, utilizándose los siguientes métodos:

a) El método deductivo; empleado para establecer una premisa o referente cognitivo de carácter general aplicable al caso concreto, y luego del juicio que expresa el significado de la muestra, realizar la inferencia respectiva para obtener la conclusión de menor extensión.

b) El método inductivo; que se aplica cada vez que sea necesario ascender de lo singular a lo particular y de allí a lo general.

c) El método histórico; para estudiar la evolución y contenido actual del grado de conciencia política alcanzada por nuestra sociedad.

d) El método analítico y el método de la síntesis, que nos ha permitido identificar cada uno de los componentes que identifican el grado de desarrollo de la madurez política de nuestra ciudadanía y el grado de conocimiento y preparación de nuestros legisladores.

4 – Realizado el vaciado de la información correspondiente a las entrevistas realizadas a miembros del Jurado Nacional de Elecciones, magistrados, especialistas y ciudadanos electores, se llegó, mediante el método deductivo, a las siguientes conclusiones:

REALIZADO EL VACIADO DE LA INFORMACIÓN CORRESPONDIENTE A LAS ENTREVISTAS REALIZADAS A MIEMBROS DEL JURADO NACIONAL DE ELECCIONES, MAGISTRADOS Y ESPECIALISTAS, SE HA LLEGADO A LAS SIGUIENTES CONCLUSIONES:

UNIVERSO: 30 ENTREVISTADOS

TÉCNICA: CUESTIONARIO ABIERTO

1. Con respecto a la forma como ejercen sus derechos políticos los ciudadanos en el Perú, los entrevistados se pronunciaron de la siguiente manera:

55 % ... Por decisión propia

41 % ... Por temor a la multa

4 % ... Por que acata disposiciones
de su partido

2. Con respecto a si los ciudadanos están debidamente informados de sus derechos electorales y/o políticos, los entrevistados se pronunciaron de la siguiente manera:

29 % ... Si lo esta

4 % ... No lo esta

67 % ... No suficientemente
informado

3. Con respecto a si el derecho de sufragio se encuentra debidamente garantizado en el sistema normativo penal vigente, los entrevistados se pronunciaron de la siguiente manera:

53 % ... Si se encuentra debidamente
garantizado

47 % ... No se encuentra suficientemente
garantizado

4. Con respecto al efecto que causaría una inadecuada protección del derecho de sufragio, los entrevistados se pronunciaron de la siguiente manera:

47 % ... Daño al derecho del elector

53 % ... Daño al sistema democrático

5. Con respecto a las causas que determinarían la insuficiente protección normativa penal del derecho de sufragio, los entrevistados se pronunciaron de la siguiente manera:

16 % ... Falta de decisión de los legisladores,
de criminalizar suficientemente, los
actos que atentan contra el derecho
de sufragio.

71 % ... Falta, por parte del legislador, de
suficientes conocimientos doctrinarios
y de legislación comparada, sobre delitos

que atentan contra el derecho de sufragio.

8% ... Intereses político partidarios de los grupos
que integran el congreso.

5% ... Cultura del fraude electoral.

**REALIZADO EL VACIADO DE LA INFORMACIÓN CORRESPONDIENTE A
LAS ENTREVISTAS REALIZADAS A CIUDADANOS ELECTORES, SE HA
LLEGADO A LAS SIGUIENTES CONCLUSIONES:**

UNIVERSO: 800 ENTREVISTAS REALIZADAS ENTRE LOS DISTRITOS DE SAN JUAN DE
MIRAFLORES, VILLA EL SALVADOR, MIRAFLORES, LINCE, LA MOLINA, SURCO, SAN
BORJA Y BREÑA.

ENTREVISTADOS: Ciudadanos de 18 a 60 años de edad, entre profesionales, técnicos, amas
de casa, trabajadores y estudiantes universitarios.

TÉCNICA: ENCUESTA MEDIANTE CUESTIONARIO MIXTO

1. Con respecto a cómo ejerce su derecho al libre sufragio, los encuestados se
pronunciaron de la siguiente manera:

80 % ... Por decisión propia

16 % ... Por temor a la multa

4 % ... No ejerce su derecho al
sufragio

2. Con respecto a si están debidamente informados de sus derechos electorales, los encuestados se pronunciaron de la siguiente manera:

31 % ... Si

11 % ... No

58 % ... No completamente informado

3. Con respecto a si el derecho de sufragio se encuentra debidamente garantizado o protegido por las leyes penales en nuestro país, los encuestados se pronunciaron de la siguiente manera:

16 % ... Si se encuentra suficientemente
garantizado

72 % ... No se encuentra suficientemente
garantizado

12 % ... No sabe, no opina

4. Con respecto al efecto que causaría una inadecuada protección del derecho de sufragio, los encuestados se pronunciaron de la siguiente manera:

67 % ... Daño al derecho del elector

29 % ... Daño al sistema democrático

4 % ... No sabe, no opina

5. Con respecto a las causas que determinarían la insuficiente protección penal del derecho de sufragio, los encuestados se pronunciaron de la siguiente manera:

28 % ... Falta de decisión de los legisladores,
de sancionar adecuadamente, los
actos que atentan contra el derecho
de sufragio.

17 % ... Falta, por parte del legislador, de
suficientes conocimientos doctrinarios
y de legislación comparada, sobre
delitos que atentan contra el derecho
de sufragio.

46 % ... Intereses político partidarios de los
grupos que integran el congreso.

6 % ... Cultura del fraude electoral.

3 % ... No sabe, no opina

5 – Se identificó como principales problemas, los siguientes:

a) Arraigada costumbre de apelar a la distorsión de la voluntad popular como instrumento para ganar elecciones.

b) Peligrosa permisibilidad social del fraude electoral.

c) Menosprecio por parte de un gran sector de políticos, a la libre voluntad ciudadana.

d) Bajos niveles de reacción social ante el fraude electoral.

3.3. VARIABLES DEPENDIENTES; 1ra y 2da HIPÓTESIS

a) Vulneración del derecho del elector: El derecho de sufragio libre y auténtico de muchos ciudadanos peruanos, ha sido lesionado mediante diversas modalidades de acción, tanto coercitivas como fraudulentas.

INDICADORES: - Casos que se presentan en los procesos electorales como:

sustitución de ánforas, suplantación del elector, destrucción o sustitución de cédulas de sufragio, alteración o sustitución del acta de escrutinio, presión o soborno del elector para que vote por un determinado candidato, etc.

- Denuncias y pedidos de nulidad ante los órganos electorales, invocando actos contrarios al libre derecho de sufragio, como coerciones, fraudes, etc.
- Denuncias ante la Fiscalía por delitos contra la voluntad popular
- Procesos judiciales terminados y en trámite por delitos contra la voluntad popular
- Publicaciones e informes de medios de comunicación, dando cuenta de irregularidades y denuncias durante el proceso electoral.
- Informes de la Defensoría del pueblo

- Informes de instituciones electorales especializadas
- Dicho del elector entrevistado

OPERACIÓN REALIZADA:

1 – En primer lugar, se procedió al acopio físico de los documentos que se consignó como medios instrumentales para sustentar y explicar la variable.

Para este efecto fueron útiles las diversas visitas de trabajo que realizamos a las siguientes instituciones: Congreso de la República, Jurado Nacional de Elecciones (JNE), Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) y Defensoría del Pueblo, para entrevistar y pedir opinión a congresistas, funcionarios electorales y especialistas.

Visitamos diversos distritos de la capital, para tomar el dicho de los ciudadanos, realizando entrevistas sobre la tutela penal del derecho de sufragio en el país.

Solicitamos también, mediante entrevistas, la opinión de expertos sobre sociología y política en materia electoral.

2 - Se procedió a la sistematización de la información, identificando y clasificando los datos acopiados:

- Denuncias periodísticas de fraudes electorales cometidos durante las elecciones presidenciales del año 2000 (Diario El Comercio, La República, El Peruano, Expreso, etc.) .

- Denuncias de fraudes electorales presentadas ante la Defensoría del Pueblo durante las elecciones presidenciales del año 2000.
- Denuncias por delitos electorales tramitadas por la procuraduría del Jurado Nacional de Elecciones (JNE) y de la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) 2003 al 2005.
- Informes y denuncias de Instituciones de Observación Electoral especializados, como del Centro Carter y el Instituto Nacional Demócrata Estadounidense (Estas instituciones, en mayo del 2000, recibieron 150 denuncias sobre irregularidades en el proceso electoral, recopiladas y fichadas el 9 de abril por el Foro Democrático, elevándose a más de 1600 las denuncias de irregularidades en la primera vuelta electoral, tales como: existencia de cédulas recortadas en la línea de Perú Posible, personas que accedieron a votar con cédulas marcadas por la opción presidencial de Perú 2000 y sus candidatos al Congreso. El Foro Democrático recogió otras denuncias de suma gravedad que sumadas a las 690 denuncias que recibió la Asociación Civil Transparencia, constituyen un record en la historia electoral peruana.
- Informe la Defensoría del Pueblo (Informe de Supervisión Electoral No 4 – 2000), sobre “investigación sobre el uso de recursos públicos y la participación de funcionarios y servidores públicos en actividades proselitistas a favor de determinados candidatos”, en la que se revelan una serie de actos irregulares y fraudulentos de proselitismo electoral.
- Dichos de los entrevistados, funcionarios y especialistas en el tema electoral.
- Dicho de los ciudadanos.

3 – En tercer lugar se procedió al análisis interpretativo de las muestras, utilizándose los siguientes métodos:

a) El método deductivo; empleado para establecer una premisa o referente cognitivo de carácter general aplicable al caso concreto, y luego del juicio que expresa el significado de la muestra, realizar la inferencia respectiva para obtener la conclusión de menor extensión.

b) El método inductivo; que se aplica cada vez que sea necesario ascender de lo singular a lo particular y de allí a lo general.

c) El método histórico; para estudiar la evolución y contenido actual del grado de conciencia política alcanzada por nuestra sociedad.

d) El método analítico y el método de la síntesis, que nos ha permitido identificar cada uno de los componentes que identifican el grado de desarrollo de la madurez política de nuestra ciudadanía.

4 – Realizado el vaciado de la información correspondiente a las entrevistas realizadas a miembros del Jurado Nacional de Elecciones, magistrados, especialistas y ciudadanos electores, se llegó, mediante el método deductivo, a las siguientes conclusiones:

REALIZADO EL VACIADO DE LA INFORMACIÓN CORRESPONDIENTE A LAS ENTREVISTAS REALIZADAS A MIEMBROS DEL JURADO NACIONAL DE ELECCIONES, MAGISTRADOS Y ESPECIALISTAS, SE HA LLEGADO A LAS SIGUIENTES CONCLUSIONES:

UNIVERSO: 30 ENTREVISTADOS

TÉCNICA: CUESTIONARIO ABIERTO

1. Con respecto a si el derecho de sufragio se encuentra debidamente garantizado en el sistema normativo penal vigente, los entrevistados se pronunciaron de la siguiente manera:

53 % ... Si se encuentra debidamente
garantizado

47 % ... No se encuentra suficientemente
garantizado

2. Con respecto a cuáles serían los factores que determinan la insuficiente protección al derecho de sufragio, los entrevistados se pronunciaron de la siguiente manera:

29 % ... Insuficiencia de la normatividad
penal

71 % ... Deficiencia del diseño político
criminal

3. Con respecto al efecto que causaría una inadecuada protección del derecho de sufragio, los entrevistados se pronunciaron de la siguiente manera:

47 % ... Daño al derecho del elector

53 % ... Daño al sistema democrático

REALIZADO EL VACIADO DE LA INFORMACIÓN CORRESPONDIENTE A LAS ENTREVISTAS REALIZADAS A CIUDADANOS ELECTORES, SE HA LLEGADO A LAS SIGUIENTES CONCLUSIONES:

UNIVERSO: 800 ENTREVISTAS REALIZADAS ENTRE LOS DISTRITOS DE SAN JUAN DE MIRAFLORES, VILLA EL SALVADOR, MIRAFLORES, LINCE, LA MOLINA, SURCO, SAN BORJA Y BREÑA.

ENTREVISTADOS: Ciudadanos de 18 a 60 años de edad, entre profesionales, técnicos, amas de casa, trabajadores y estudiantes universitarios.

TÉCNICA: ENCUESTA MEDIANTE CUESTIONARIO MIXTO

1. Con respecto a si el derecho de sufragio se encuentra debidamente garantizado o protegido por las leyes penales en nuestro país, los encuestados se pronunciaron de la siguiente manera:

16 % ... Si se encuentra suficientemente
garantizado

72 % ... No se encuentra suficientemente
garantizado

12 % ... No sabe, no opina

2. Con respecto a los factores que determinarían la insuficiente protección al derecho de sufragio, los encuestados se pronunciaron de la siguiente manera:

12 % ... Insuficiencia de las leyes penales

83 % ... Deficiencia en la forma como el Estado
enfrenta la protección del derecho de
sufragio

5 % ... No sabe, no opina

3. Con respecto al efecto que causaría una inadecuada protección del derecho de sufragio, los encuestados se pronunciaron de la siguiente manera:

67 % ... Daño al derecho del elector

29 % ... Daño al sistema democrático

4 % ... No sabe, no opina

4 – Se identificó como principales problemas, los siguientes:

a) Deficiencia en el tratamiento legislativo que evidencia peligro para la seguridad jurídica de los ciudadanos en cuanto a la protección del derecho de sufragio.

b) Duplicidad de los tipos delictivos existentes, que evidencia una peligrosa posibilidad de inseguridad jurídica y daño al derecho del elector.

c) Necesidad de una tipificación oportuna, actualizada y completa de la legislación en la materia, ya que las normas existentes evidencian anacronismo e imperfecciones.

d) Deficiencia en cuanto al sistema de penas, ya que debido a la especialidad del delito, se postula que se determine un conjunto de sanciones adecuadas y pertinentes al tipo de delincuente y daño al bien jurídico.

b) Vulneración del sistema democrático: Privación de autenticidad democrática al sistema representativo de gobierno de nuestro país, que de esta manera se ve seriamente deslegitimado.

INDICADORES: - Dicho de los entrevistados

- Quejas y reclamos ante los Organismos electorales
relacionados a actos de coerción, fraude y otros, que
limitan o vulneran el derecho del elector durante el proceso electoral
- Denuncias ante la Fiscalía por delitos contra la voluntad popular
- Procesos judiciales, en trámite o terminados, por delitos contra
la voluntad popular
- Procesos de nulidad de elecciones y nulidades declaradas
- Denuncias periodísticas relacionadas a actos de coerción, fraude
y otros, que limitan o vulneran el derecho del elector durante el proceso
electoral
- Informes de la Defensoría del pueblo sobre irregularidades generadas
en el desarrollo del proceso electoral
- Informes de instituciones electorales especializadas sobre el proceso
electoral y sus incidencias.

OPERACIÓN REALIZADA:

1 – En primer lugar, se procedió al acopio físico de los documentos que se consignó como medios instrumentales para sustentar y explicar la variable.

Para este efecto fueron útiles las diversas visita de trabajo que realizamos a las siguientes instituciones: Congreso de la República, Jurado Nacional de Elecciones (JNE), Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) y Defensoría del Pueblo, para entrevistar y pedir opinión a congresistas, funcionarios electorales y especialistas.

Visitamos diversos distritos de la capital, para tomar el dicho de los ciudadanos, realizando entrevistas sobre la tutela penal del derecho de sufragio en el país.

Solicitamos también, mediante entrevistas, la opinión de expertos sobre sociología y política en materia electoral.

2 - Se procedió a la sistematización de la información, identificando y clasificando los datos acopiados:

- Denuncias periodísticas de fraudes electorales cometidos durante las elecciones presidenciales del año 2000 (Diario El Comercio, La República, El Peruano, Expreso, etc.) .
- Denuncias de fraudes electorales presentadas ante la Defensoría del Pueblo durante las elecciones presidenciales del año 2000.
- Denuncias por delitos electorales tramitadas por la procuraduría del Jurado Nacional de Elecciones (JNE) y de la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) 2003 al 2005.

- Informes y denuncias de Instituciones de Observación Electoral especializados, como del Centro Carter y el Instituto Nacional Demócrata Estadounidense (Estas instituciones, en mayo del 2000, recibieron 150 denuncias sobre irregularidades en el proceso electoral, recopiladas y fichadas el 9 de abril por el Foro Democrático, elevándose a más de 1600 las denuncias de irregularidades en la primera vuelta electoral, tales como: existencia de cédulas recortadas en la línea de Perú Posible, personas que accedieron a votar con cédulas marcadas por la opción presidencial de Perú 2000 y sus candidatos al Congreso. El Foro Democrático recogió otras denuncias de suma gravedad que sumadas a las 690 denuncias que recibió la Asociación Civil Transparencia, constituyen un record en la historia electoral peruana.
- Informe la Defensoría del Pueblo (Informe de Supervisión Electoral No 4 – 2000), sobre “investigación sobre el uso de recursos públicos y la participación de funcionarios y servidores públicos en actividades proselitistas a favor de determinados candidatos”, en la que se revelan una serie de actos irregulares y fraudulentos de proselitismo electoral.
- Dichos de los entrevistados, funcionarios y especialistas en el tema electoral.
- Dicho de los ciudadanos.

3 – En tercer lugar se procedió al análisis interpretativo de las muestras, utilizándose los siguientes métodos:

a) El método deductivo; empleado para establecer una premisa o referente cognitivo de carácter general aplicable al caso concreto, y luego del juicio que expresa el significado de la muestra, realizar la inferencia respectiva para obtener la conclusión de menor extensión.

b) El método inductivo; que se aplica cada vez que sea necesario ascender de lo singular a lo particular y de allí a lo general.

c) El método histórico; para estudiar la evolución y contenido actual del grado de conciencia política alcanzada por nuestra sociedad.

d) El método analítico y el método de la síntesis, que nos ha permitido identificar cada uno de los componentes que identifican el grado de desarrollo de la madurez política de nuestra ciudadanía.

4 – Realizado el vaciado de la información correspondiente a las entrevistas realizadas a miembros del Jurado Nacional de Elecciones, magistrados, especialistas y ciudadanos electores, se llegó, mediante el método deductivo, a las siguientes conclusiones:

REALIZADO EL VACIADO DE LA INFORMACIÓN CORRESPONDIENTE A LAS ENTREVISTAS REALIZADAS A MIEMBROS DEL JURADO NACIONAL DE ELECCIONES, MAGISTRADOS Y ESPECIALISTAS, SE HA LLEGADO A LAS SIGUIENTES CONCLUSIONES:

UNIVERSO: 30 ENTREVISTADOS

TÉCNICA: CUESTIONARIO ABIERTO

1. Con respecto a si el derecho de sufragio se encuentra debidamente garantizado en el sistema normativo penal vigente, los entrevistados se pronunciaron de la siguiente manera:

53 % ... Si se encuentra debidamente
garantizado

47 % ... No se encuentra suficientemente
garantizado

2. Con respecto a cuáles serían los factores que determinan la insuficiente protección al derecho de sufragio, los entrevistados se pronunciaron de la siguiente manera:

29 % ... Insuficiencia de la normatividad
penal

71 % ... Deficiencia del diseño político
criminal

3. Con respecto al efecto que causaría una inadecuada protección del derecho de sufragio, los entrevistados se pronunciaron de la siguiente manera:

47 % ... Daño al derecho del elector

53 % ... Daño al sistema democrático

REALIZADO EL VACIADO DE LA INFORMACIÓN CORRESPONDIENTE A LAS ENTREVISTAS REALIZADAS A CIUDADANOS ELECTORES, SE HA LLEGADO A LAS SIGUIENTES CONCLUSIONES:

UNIVERSO: 800 ENTREVISTAS REALIZADAS ENTRE LOS DISTRITOS DE SAN JUAN DE MIRAFLORES, VILLA EL SALVADOR, MIRAFLORES, LINCE, LA MOLINA, SURCO, SAN BORJA Y BREÑA.

ENTREVISTADOS: Ciudadanos de 18 a 60 años de edad, entre profesionales, técnicos, amas de casa, trabajadores y estudiantes universitarios.

TÉCNICA: ENCUESTA MEDIANTE CUESTIONARIO MIXTO

1. Con respecto a si el derecho de sufragio se encuentra debidamente garantizado o protegido por las leyes penales en nuestro país, los encuestados se pronunciaron de la siguiente manera:

16 % ... Si se encuentra suficientemente
garantizado

72 % ... No se encuentra suficientemente
garantizado

12 % ... No sabe, no opina

2. Con respecto a los factores que determinarían la insuficiente protección al derecho de sufragio, los encuestados se pronunciaron de la siguiente manera:

12 % ... Insuficiencia de las leyes penales

83 % ... Deficiencia en la forma como el Estado
enfrenta la protección del derecho de
sufragio

5 % ... No sabe, no opina

3. Con respecto al efecto que causaría una inadecuada protección del derecho de sufragio, los encuestados se pronunciaron de la siguiente manera:

67 % ... Daño al derecho del elector

29 % ... Daño al sistema democrático

4 % ... No sabe, no opina

4 – Se identificó como principales problemas, los siguientes:

a) Deficiencia en el tratamiento legislativo que evidencia peligro para la seguridad del sistema democrático.

b) Duplicidad de los tipos delictivos existentes, que evidencia una peligrosa posibilidad de inseguridad jurídica y daño al derecho del elector y por ende al sistema democrático.

c) Necesidad de una tipificación oportuna, actualizada y completa de la legislación en la materia, ya que las normas existentes evidencian anacronismo e imperfecciones, que ponen en riesgo el sistema democrático.

d) Deficiencia en cuanto al sistema de penas, ya que debido a la especialidad del delito, se postula que se determine un conjunto de sanciones adecuadas y pertinentes al tipo de delincuente y daño al bien jurídico.

CAPITULO IV

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

1. CONCLUSIONES GENERALES:

El acopio de datos y documentos, así como su debida clasificación, evaluación y análisis mediante los métodos propuestos en la investigación, nos permitieron afrontar adecuadamente el problema de investigación señalado en los siguientes términos:

¿ Qué factores determinan y que condiciones contribuyen a qué no exista en el Perú una criminalización integral de las conductas lesivas al derecho de sufragio ?

En tal sentido, el trabajo de investigación realizado, nos ha permitido llegar a las siguientes conclusiones, que confirman nuestras hipótesis de trabajo:

1.1) Los factores que determinan que no exista en el Perú una criminalización integral de las conductas lesivas al derecho de sufragio, son de naturaleza jurídico-positiva como político criminal:

a) Jurídico-positivo: Por cuanto la normatividad vigente evidencia un sistema insuficiente de protección jurídico penal, que no concretiza típicamente todos los supuestos de afectación del derecho de sufragio.

<La normatividad jurídico-penal vigente no tutela integralmente el derecho de sufragio: El sistema normativo punitivo presenta vacíos al respecto de dicha protección penal>.

b) Político criminal: Por cuanto la realidad evidencia una flagrante omisión del Estado, en la formulación de una estrategia integral y oportuna en relación a la lucha contra las conductas que atentan contra el derecho de sufragio.

<Omisión evidente del Estado en la formulación de una estrategia integral, en la lucha contra la criminalidad que atenta contra el derecho de sufragio>.

1.2) Las condiciones que contribuyen a que no exista en el Perú una criminalización integral de las conductas lesivas al derecho de sufragio, consisten en la falta de conciencia política generalizada en la ciudadanía, un adecuado nivel de cultura política y jurídica de la mayoría de legisladores, al conflicto de intereses político partidarios entres

grupos parlamentarios que integran el Congreso de la República y a una arraigada cultura del fraude electoral.

Esta circunstancia evidencia:

1.2.a) Falta de conciencia política generalizada en la ciudadanía: Gran parte del universo de la población electoral del Perú, hábil para ejercer su derecho al sufragio, carece aún de un adecuado nivel de conciencia en relación a la identificación de sus derechos y obligaciones políticas. La mayoría es indiferente a la necesidad de asegurar debidamente el derecho del elector, como fundamento de la transparencia y legitimidad del proceso electoral>.

1.2.b) Inadecuado nivel de cultura política y jurídica de la mayoría de legisladores: La mayoría de legisladores carecen de suficientes conocimientos sobre Ciencia Política, sobre el derecho de sufragio como derecho político fundamental, así como de adecuados conocimientos doctrinarios y de legislación comparada, sobre delitos que atentan contra el derecho de sufragio.

1.2.c) Evidente y nocivo conflicto de intereses de los grupos que integran el Congreso: Los intereses de diversa índole, como político partidario, económico, cultural, entre otros, dificultan la adopción de planteamientos coherentes para tutelar integralmente el derecho de sufragio.

1.2.d) Perniciosa “cultura del fraude electoral”: Costumbre arraigada en nuestro sistema político-social, que evidencia el menosprecio a la libre voluntad ciudadana en el ejercicio de sus derechos políticos: en este sentido, se ha constituido en tradicional en el

Perú, que los contendores en el proceso electoral, generalmente tiendan a burlar la voluntad popular en el afán de ganar las elecciones.

1.3) Comprobada la no exista en el Perú una criminalización integral de las conductas lesivas al derecho de sufragio, es posible apreciar como efecto pernicioso, lo siguiente:

1.3.a) Vulneración del derecho del elector: El derecho de sufragio libre y auténtico de muchos ciudadanos peruanos, se ve lesionado mediante diversas modalidades de acción, tanto coercitivas como fraudulentas.

1.3.b) Vulneración del sistema democrático: Privación de autenticidad democrática al sistema representativo de gobierno de nuestro país, que de esta manera se ve seriamente deslegitimado.

2. CONCLUSIONES ESPECÍFICAS:

a) Existe deficiencia en el tratamiento legislativo de los delitos electorales. Sus normas se encuentran dispersas en el Código Penal, Ley Orgánica Electoral y D. Ley 14207.

b) Debido a la anotada deficiencia, los tipos delictivos existentes se duplican y contraponen, lo que evidencia una peligrosa posibilidad de inseguridad jurídica.

c) Las normas existentes evidencian anacronismo e imperfecciones.

d) Inexistencia de una tipificación integral de la legislación electoral.

e) Deficiencia en el tratamiento legislativo de los delitos electorales que en conjunto, comprenden tres modalidades de acción básicas, comprensivas de las diversas modalidades delictivas derivadas: a.- Actos destinados a perturbar o impedir la constitución del registro de electores, el padrón general de votantes y el registro de organizaciones políticas y su funcionamiento; b.- Acciones destinadas a perturbar o impedir el acto de sufragio; c.- Actos destinados a impedir, perturbar o distorsionar el resultado electoral. Adicionalmente también las consecuencias derivadas de la omisión de la obligatoriedad del sufragio

f) Deficiencia en el tratamiento sancionatorio (debido a la especialidad del delito, se postula que se determine un conjunto de sanciones adecuadas y pertinentes al tipo de delincuente y daño al bien jurídico).

3. RECOMENDACIONES

a) Dar una solución integral al problema de criminalización de los delitos que atentan contra la libertad de sufragio, ya que actualmente existe deficiencia en el tratamiento legislativo de los delitos electorales. Sus normas se encuentran dispersas en el Código Penal, Ley Orgánica Electoral y D. Ley 14207 (actualmente los tipos delictivos existentes se duplican y contraponen, lo que evidencia una peligrosa posibilidad de inseguridad jurídica)

Para ello se requiere necesariamente una revisión total, técnica y doctrinaria (con aproximaciones al derecho comparado), que determine una seria y coherente modificación legislativa.

b) Se requiere una tipificación oportuna, actualizada y completa de la legislación en materia de delitos electorales, ya que las normas existentes evidencian anacronismo e imperfecciones.

c) Se proceda a tipificar los delitos electorales en conjunto en un sólo cuerpo normativo, que conformando un “Código Electoral” (especializado en la materia), contenga, además de las normas administrativas electorales, la tipificación integral de las conductas atentatorias contra el derecho de sufragio y las penas correspondientes.

d) Se requiere que el tratamiento legislativo de los delitos electorales en conjunto, comprenda las tres modalidades de acción básicas, comprensivas de las diversas modalidades delictivas derivadas: a.- Actos destinados a perturbar o impedir la constitución del registro de electores, el padrón general de votantes y el registro de organizaciones políticas y su funcionamiento; b.- Acciones destinadas a perturbar o impedir el acto de sufragio; c.- Actos destinados a impedir, perturbar o distorsionar el resultado electoral. Adicionalmente también las consecuencias derivadas de la omisión de la obligatoriedad del sufragio

e) Debido a la especialidad del delito, se postula que se determine un conjunto de sanciones adecuadas y pertinentes al tipo de delincuente y daño al bien jurídico.

f) Se requiere que la nueva legislación comprenda la siguiente materia prohibida:

- Básicamente los actos defraudatorios, violentos o coaccionantes existentes.
- Inducción defraudatoria al voto, mediante actos engañosos, directos y subliminales.
- Inducción al voto mediante dádivas, prebendas, ofrecimientos, beneficios, etc.
- Compra de conciencias y connivencias.
- Falsificación de firmas en adherencias.
- Inscripciones fraudulentas (como el caso de procurar inscripciones masivas antes del cierre de inscripciones para posteriormente favorecer a candidatos).
- La manipulación informática. Atentados contra el voto electrónico.
- Manipulación de encuestas y líneas editoriales de medios de comunicación.
- Chantajes, extorsiones, lesiones, homicidios, etc. como circunstancias agravantes
- La organización criminal, de particulares e incluso de funcionarios del Estado.
- Se requiere la determinación precisa del tipo de proceso.
- Se requiere la inclusión de modalidades de derecho premial, como terminación anticipada del proceso, colaboración eficaz, premios y recompensas.
- Se requiere también la determinación de las inhabilitaciones, consecuencias accesorias y el tratamiento sancionador adecuado para las instituciones electorales y sus representantes involucrados en este tipo de delitos.

ANEXOS

- LEGISLACIÓN:

DECRETO LEY 14207

TITULO OCTAVO

De Los Delitos, Penas y Procedimiento Judicial

Artículo 91.- El que incurriera en falsedad al presentar cualquiera de los documentos consignados en los artículos 37 y 38, o diera datos personales falsos para solicitar su inscripción en el Registro Electoral u obtuviera dicha inscripción sin reunir los requisitos establecidos en el artículo 32 o estuviera impedido de hacerlo, conforme lo estatuyen los artículos 34 y 46, será reprimido con prisión no menor de un año ni mayor de tres, y multa no menor de cincuenta soles oro ni mayor de quinientos soles oro.

Artículo 92.- El que hiciere en todo o en parte un documento falso o adulterare uno verdadero y lo utilizare para obtener su inscripción en el Registro Electoral, será reprimido con prisión no menor de un año ni mayor de tres y multa no menor de cien soles oro ni mayor de un mil soles oro.

En las mismas penas incurrirán en su caso, el que intencionalmente hiciere uso de un documento falso o falsificado como si fuere legítimo.

Artículo 93.- El que se inscriba más de una vez en el Registro Electoral sufrirá prisión no menor de seis meses ni mayor de dos años e inhabilitación relativa con privación de los derechos a que se refieren los incisos 1, 2 y 3 del artículo 27 del Código Penal, por tiempo igual al de la pena privativa de la libertad.

Artículo 94.- El que, en cualquier forma que no constituya violencia o amenaza, impidiese a uno o varios ciudadanos inscribirse en el Registro Electoral u obstruyera deliberadamente el desarrollo de los actos de inscripción, será reprimido con prisión no menor de un mes ni mayor de seis. Si el medio empleado fuese la amenaza o violencia, la pena será de prisión no, menor de un año ni mayor de tres.

La pena será de prisión no menor de un año ni mayor de tres si el culpable hubiese impedido la inscripción a varios ciudadanos con el propósito de alterar los resultados de un proceso electoral.

Artículo 95.- El Registrador Electoral que cometiese el delito previsto en el artículo 338 del Código Penal, será reprimido con prisión no menor de un mes ni mayor de un año, e inhabilitación conforme a los incisos 1 y 3 del artículo 27 del mismo Código, por no menos de dos años.

Artículo 96.- Modifícase el artículo 317 del Código Penal, en los siguientes términos:
"Artículo 317.- El que falsificare o alterare un Registro Electoral o lo hiciere desaparecer o lo destruyere, será reprimido con prisión no menor de un año ni mayor de tres y multa no menor de cincuenta soles oro ni mayor de quinientos soles oro".

Si el delito fuera cometido por el Registrador Electoral, la pena será de prisión no menor de dos años ni mayor de cinco, e inhabilitación absoluta por diez años.

Artículo 97.- El funcionario o empleado del Registro Electoral que omitiere efectuar la depuración del Registro, proporcionare voluntariamente datos falsos en los documentos electorales o adulterase estos, será reprimido con prisión no menor de seis meses ni mayor de dos años e inhabilitación no mayor de diez años, conforme a los incisos 1,2,3,4 y 5 del artículo 27 del Código Penal.

Las mismas penas sufrirán los que participaron en la comisión del delito indicado.

La pena será de prisión no menor de dos años ni mayor de seis, e inhabilitación absoluta por diez años si el culpable hubiese obrado con el propósito de alterar la exactitud de un proceso electoral.

La pena será de prisión no mayor de seis meses y multa no menor de cincuenta soles oro ni mayor de quinientos soles oro si el culpable hubiese obrado por negligencia.

Artículo 98.- Los Registradores Electorales que extrajeran o permitiesen extraer o entregar los libros o documentos del Archivo Electoral, serán reprimidos con pena de prisión no menor de un año ni mayor de tres, e inhabilitación absoluta por diez años. La misma pena sufrirá la autoridad, cualquiera que fuese su jerarquía, que ordene la entrega o retiro de los documentos del Archivo General del Registro.

Artículo 99.- El Registrador Electoral que efectúe inscripciones fuera del local del Registro y los ciudadanos que obtengan en esta forma su inscripción, serán reprimidos con prisión no menor de seis meses ni mayor de dos años y multa no menor de quinientos soles oro ni mayor de cinco mil soles oro. Al Registrador se le impondrá además, inhabilitación relativa no menor de cinco años.

En Caso de que el Registrador hubiese efectuado más de diez inscripciones en la forma indicada, será reprimido con prisión no menor de un año ni mayor de cinco e inhabilitación absoluta por diez años.

Los Registradores Electorales condenados por el delito a que se refiere este artículo y el anterior, quedarán además permanentemente inhabilitados para el desempeño de cargos electorales.

Artículo 100.- El funcionario o empleado de Correos que intencionalmente retuviere o hiciere desaparecer los libros y demás documentos del Registro Electoral que se remitan de un lugar a otro de la República será reprimido con arreglo al artículo 362 del Código Penal.

Artículo 101.- El funcionario que no cumpla con las obligaciones que le señala este Decreto Ley, será penado con arreglo al artículo 338 del Código Penal.

Artículo 102.- Se concede acción popular para denunciar cualquier delito previsto en este Decreto Ley.

Artículo 103.- La investigación se llevará a cabo en el plazo improrrogable de treinta días.

Artículo 104.- Vencido el plazo señalado en el artículo anterior, previo dictamen del Agente Fiscal e informe del Juez Instructor, que se expedirán en el término de tres días, para cada uno, se elevarán los autos al Tribunal Correccional.

Artículo 105.- El Tribunal Correccional sin más trámite que el dictamen fiscal, que se emitirá en el término de cinco días por el mérito de los autos, expedirá la correspondiente resolución en el plazo de ocho días.

Si el imputado o su defensor solicitara informar oralmente ante el Tribunal, la citación se hará para el tercer día después de producido el dictamen fiscal.

Artículo 106.- No procede recurso de nulidad contra el auto que declare la irresponsabilidad del inculpado. Tampoco procede dicho recurso respecto de la sentencia del Tribunal Correccional que absuelva al inculpado o le imponga pena inferior a seis meses de prisión.

Artículo 107.- La investigación y el juzgamiento de los delitos comprendido en este Decreto Ley, se sujetarán al Código de Procedimientos Penales, en cuanto no se opongan a aquél.

CÓDIGO PENAL

LIBRO SEGUNDO; TITULO XVII

DELITOS CONTRA LA VOLUNTAD POPULAR

CAPITULO UNICO: DELITOS CONTRA EL DERECHO DE SUFRAGIO

Artículo 354.- El que, con violencia o amenaza, perturba o impide que se desarrolle un proceso electoral general, parlamentario, regional o local, será reprimido con pena privativa de libertad no menor de tres ni mayor de diez años.

Artículo 355.- El que, mediante violencia o amenaza impide a un elector ejercer su derecho de sufragio o le obliga a hacerlo en un sentido determinado, será reprimido con pena privativa de libertad no menor de uno ni mayor de cuatro años.

Artículo 356.- El que, mediante dádivas, ventajas o promesas trata de inducir a un elector a no votar o a votar en un sentido determinado, será reprimido con pena privativa de libertad no menor de uno ni mayor de cuatro años.

Artículo 357.- El que suplanta a otro votante o vota más de una vez en la misma elección o sufraga sin tener derecho, será reprimido con pena privativa de libertad no menor de uno ni mayor de cuatro años.

Artículo 358.- El elector que da a publicidad el sentido de su voto en el acto electoral, será reprimido con pena privativa de libertad no mayor de un año o con prestación de servicio comunitario de veinte a treinta jornadas.

Artículo 359.- Será reprimido con pena privativa de libertad no menor de dos ni mayor de ocho años el que, con propósito de impedir o alterar el resultado de un proceso electoral, realiza cualquiera de las acciones siguientes:

1. Inserta o hace insertar o suprime o hace suprimir, indebidamente, nombres en la formación de un registro electoral.
2. Falsifica o destruye de cualquier modo, en todo o en parte un registro electoral, libretas electorales o actas de escrutinio u oculta, retiene o hace desaparecer los documentos mencionados, de manera que el hecho pueda dificultar la elección o falsear su resultado.
3. Sustraer, destruye o sustituye ánforas utilizadas en una elección antes de realizarse el escrutinio.

4. Sustraer, destruir o sustituir cédulas de sufragio que fueron depositadas por los electores.
5. Alterar, de cualquier manera, el resultado de una elección o torna imposible la realización del escrutinio.
6. Recibe, siendo miembro de una mesa de sufragio, el voto de un ciudadano no incluido en la lista de electores de esa mesa o rechaza injustificadamente el voto de un elector incluido en dicha lista.
7. Despoja a un ciudadano, indebidamente, de su libreta electoral o la retiene con el propósito de impedirle que sufrague.

Artículo 360.- El funcionario o servidor público o miembro de las Fuerzas Armadas o de la Policía Nacional que incurra en uno de los delitos previstos en este Título sufrirá, además, inhabilitación de uno a tres años, conforme al artículo 36, incisos 1 y 2.

LEY ORGANICA DE ELECCIONES (LEY No 26859)

TITULO XVI : DE LOS DELITOS, SANCIONES Y PROCEDIMIENTOS JUDICIALES

CAPITULO 1: CONTRA EL DERECHO DE SUFRAGIO

Artículo 382.- Son reprimidos con pena privativa de la libertad no menor de un mes ni mayor de un año:

- a) Los miembros de la Fuerza Armada y de la Policía Nacional en situación de disponibilidad o retiro que, vistiendo uniforme, participen en manifestaciones u otros actos

de carácter político; asimismo, los miembros de la Fuerza Armada y de la Policía Nacional que hagan ejercicio de sufragio.

b) Aquél que trate de conocer el voto de un elector o de obligarlo a votar por determinado candidato u obstruya el desarrollo de los actos electorales, o provoque desórdenes durante éstos.

c) Aquél que porte armas de cualquier clase durante la realización de los actos electorales oficiales, aunque tenga licencia, sin perjuicio del decomiso del arma y de la cancelación de la licencia.

Artículo 383.- Es reprimido con pena privativa de la libertad no menor de seis meses ni mayor de tres años:

a) Aquél que integra un Jurado Electoral estando impedido de hacerlo, o suplanta a quien corresponde integrarlo, o utiliza su nombre para efectuar despachos o comunicaciones.

b) Aquél que instiga a otro a suplantar a un miembro de un jurado Electoral, o lo obliga a ello mediante violencia o soborno.

c) El miembro de una Mesa de Sufragio que recibe el voto de persona no incluida en la lista de electores de la mesa o rechaza sin justa causa el voto de un elector incluido en dicha lista.

d) Los empleados de Correos y en general toda persona que detenga o demore por cualquier medio, los servicios de correos, telégrafos o mensajeros que transporten o conduzcan ánforas, elementos o comunicaciones oficiales referentes a un proceso electoral.

e) Toda persona que viole los sellos, precintos, envolturas o cerraduras de las ánforas utilizadas para el acto electoral, o quien viole las comunicaciones oficiales expedidas por los órganos del Sistema Electoral o la que, suplantando a estos, remita comunicaciones, o sustituya votos que hayan sido impugnados. Si el culpable es funcionario o empleado

público, además de la pena indicada sufrirá pena accesoria de inhabilitación por igual tiempo al de la condena de conformidad con los incisos 1), 2), 3), 4) y 8) del artículo 36 del Código Penal.

Artículo 384.- Son reprimidos con pena privativa de la libertad no menor de un año ni mayor de tres años:

a) Los Presidentes de las Mesas de Sufragios que no cumplan con remitir las ánforas o las Actas Electorales. Además sufren pena accesoria de inhabilitación por igual tiempo al de la condena, conforme a los incisos 1), 2), 3), 4) y 8) del artículo 36 del Código Penal.

Las mismas penas sufren los participantes en el antes indicado delito.

b) Aquél que mediante violencia o amenaza interrumpe o intenta interrumpir el acto electoral. Si el culpable forma parte integrante de un grupo, la pena es no menor de dos años ni mayor de cinco.

c) Aquél que injustificadamente despoja a una persona de su Documento Nacional de Identificación o lo retiene con el propósito de impedir que el elector concurra a votar. Si el que delinque es funcionario, empleado público o miembro de las Fuerzas Armadas, la pena es de prisión no menor de un año ni mayor de cuatro, con pena accesoria de inhabilitación por igual tiempo al de la condena, conforme a los incisos 1), 2), 3) 4) y 8) del artículo 36 del Código Penal.

d) Aquél que impida o perturbe una reunión en recinto privado o la que se realice en lugar de uso público, convocada con fines electorales conforme al artículo 354 del Código Penal.

Si el culpable fuese funcionario o empleado público, además de la pena indicada sufre pena accesoria de inhabilitación por igual tiempo al de la condena, de conformidad con los incisos 1), 2), 3) 4) y 8) del artículo 36 del Código Penal.

Artículo 385.- Son reprimidos con pena privativa de la libertad no menor de dos años ni mayor de seis y pena no mayor de treinta días de multa, así como con pena accesoria de inhabilitación por igual tiempo al de la condena, de conformidad con los incisos 1), 2), 3) y 4) del artículo 36 del Código Penal:

a) Las autoridades políticas, militares, policiales, municipales y los funcionarios o empleados públicos que, abusando de sus cargos, obliguen a un elector a firmar una lista de adherentes a un partido político o para la presentación de una candidatura, o en favor o en contra de determinado partido, lista o candidato, o los que realicen algún acto que favorezca o perjudique a determinado partido o candidato.

b) Las personas aludidas en el inciso a) de este artículo que, respecto a sus subalternos o particulares, les impongan descuentos o multas u ordenen cambios de colocación o traslado de dichos subalternos o particulares dependientes, con el objeto de favorecer o perjudicar los resultados en favor o en contra de un determinado candidato.

Artículo 386.- Es reprimido con pena privativa de la libertad no menor de seis meses ni mayor de dos años aquél que vota con Documento Nacional de Identificación ajeno o sin tener derecho de sufragio.

Artículo 387.- Es reprimido con pena privativa de la libertad no menor de dos años, ni mayor de cinco aquél que impida, por cualquier medio, que un ciudadano pueda ser designado para integrar un Jurado Electoral Especial.

Artículo 388.- Es reprimido con pena privativa de la libertad no menor de tres meses ni mayor de dos años aquél que instala o hace funcionar Secretarías o locales políticos u oficinas de propaganda, o que organiza o permite reuniones o manifestaciones políticas

dentro de zonas prohibidas o en los plazos en que dicha actividad esté suspendida conforme a esta ley.

Si el culpable es una autoridad política, la pena es no menor de un año ni mayor de tres, además de la pena accesoria de inhabilitación, por igual tiempo del de la condena, de conformidad con los incisos 1),2),3),4) y 8) del artículo 36 del Código Penal.

Artículo 389.- Es reprimido con pena privativa de la libertad no menor de dos años aquél que haga propaganda electoral, cualquiera que sea el medio empleado, en las horas en que está suspendida; o aquél que atente contra la ley, las buenas costumbres, o agravia en su honor a un candidato o a un partido.

Artículo 390.- Son reprimidos con pena privativa de la libertad no mayor de seis meses y pena de multa no menor del diez por ciento del ingreso mínimo vital multiplicado por treinta días de multa más pena accesoria de inhabilitación, por igual tiempo que el de la condena, de conformidad con los incisos 1), 2), 3), 4) y 8) del artículo 36 del Código Penal:

a) Aquellos que hagan funcionar establecimientos destinados exclusivamente a expendio de bebidas alcohólicas, o quienes organizan espectáculos o reuniones prohibidos durante los periodos señalados en el artículo 190 de la presente ley.

b) Aquél que destruya, en todo o en parte, impida u obstaculice la propaganda electoral de un candidato o partido; además sufre pena de multa, por el importe del diez por ciento del ingreso diario del condenado, multiplicado por treinta días de multa, de conformidad con los artículos 41 al 44 del Código Penal.

Las mismas penas se imponen a los instigadores.

c) Los registradores públicos, notarios, escribanos, empleados públicos y demás personas que no exijan la presentación del Documento Nacional de Identificación con la constancia

de sufragio en las últimas elecciones, o la dispensa de no haber votado otorgada por el Jurado Nacional de Elecciones, a fin de identificar a quienes intentan realizar actos que requieran tal presentación sin hacerla.

Artículo 391.- Sufre la pena de multa cuyo importe no es menor del veinticinco por ciento del ingreso mínimo vital, con una duración de sesenta días multa, de conformidad con los artículos 41 al 44 del Código Penal, y la pena accesorio de inhabilitación, prevista en los incisos 1), 2), 3) 4) y 8) del artículo 36 del Código Penal por el tiempo de la pena principal, el ciudadano que injustificadamente se abstenga de integrar un Jurado Electoral.

Artículo 392.- Sufre pena de multa cuyo importe no es menor del cincuenta por ciento del ingreso mínimo vital, con una duración de quince días, de conformidad con los artículos 41 al 44 del Código Penal, el ciudadano que habiendo salido sorteado para integrar una mesa de sufragio no concurra a su instalación.

Artículo 393.- Los artículos anteriores de este Título rigen, sin perjuicio de lo dispuesto en los artículos 354 al 360 del Código Penal.

ANEXOS

- FORMATO DE ENCUESTAS Y ENTREVISTAS

FORMATO DE ENCUESTA PARA CONGRESISTAS, MIEMBROS DEL JURADO NACIONAL DE ELECCIONES, MAGISTRADOS Y ESPECIALISTAS

I. DATOS GENERALES DE LOS ENTREVISTADOS

1. ¿ Qué función desempeña en la actualidad ?

Congresista

Miembro del Jurado nacional de Elecciones

Fiscal

Juez (a)

Profesor (a) universitario (a)

Estudioso (a) de la materia electoral

2. ¿ En el desempeño de su función conoce o trata Ud. temas de derecho electoral ?

si

no

eventualmente

II. DATOS REFERIDOS A LA INVESTIGACIÓN

1. ¿ Considera Ud. que el derecho de sufragio se encuentra debidamente garantizado en el sistema normativo penal vigente ?

Si se encuentra suficientemente garantizado

No se encuentra suficientemente garantizado

Su protección es insuficiente

No opina

2. ¿ Si Ud. no opina que el sistema penal si protege suficientemente el derecho de sufragio, cuáles considera que sean los factores que determinan la insuficiente protección al derecho de sufragio.

Insuficiencia de la normatividad penal

Deficiencia del diseño político criminal

Los dos anteriores

Ninguno de los anteriores

No opina

3. ¿ Si Ud. opina que existe una inadecuada protección del derecho de sufragio, considera que ello causa como efecto ?:

La vulneración del derecho del elector

La vulneración del sistema democrático

Las dos anteriores

Ninguna de las anteriores

No opina

4. ¿ Considera Ud. que la insuficiente protección normativo penal del derecho de sufragio se debe a:

Falta de decisión de los legisladores, de criminalizar suficientemente, los actos que
atentan contra el derecho de sufragio.

Falta, por parte del legislador, de suficientes conocimientos doctrinarios y de
legislación comparada, sobre delitos que atentan contra el derecho de sufragio.

Intereses político partidarios de los grupos que integran el congreso.

Cultura del fraude electoral.

Todas las anteriores

Sólo algunas de las anteriores; precise.....

Ninguna de las anteriores

No opina

5. ¿ Considera Ud. que los actos que atentan contra el derecho de sufragio, deben
tipificarse en el Código penal, en una norma especial o en un Código Electoral.

En el Código penal

En una ley especial

En un Código Electoral

No opina

FORMATO DE ENCUESTA PARA CIUDADANOS ELECTORES

Distrito de domicilio:.....**Edad:**.....**Sexo**.....

Estudios secundarios

estudios universitarios

Profesional

I. DATOS GENERALES DE LOS ENTREVISTADOS

1. Siendo Ud. ciudadano en ejercicio de sus derechos políticos; ¿ejerce su derecho al libre sufragio ?

Por decisión propia

Por que acata disposiciones de su partido

Por temor a la multa

Libremente

No ejerce su derecho al sufragio

2. ¿ Considera usted estar debidamente informado de sus derechos electorales ?

Si

No

No completamente informado

Que opinaría al respecto.....

.....

.....

.....

.....

II. DATOS REFERIDOS A LA INVESTIGACIÓN

1. ¿ Considera Ud. que el derecho de sufragio se encuentra debidamente garantizado o protegido por las leyes penales en nuestro país?

Si se encuentra suficientemente garantizado

No se encuentra suficientemente garantizado

Su protección es insuficiente

Que opinaría al respecto.....

.....

.....

.....

.....

2. ¿ Si usted opina que el derecho penal no protege suficiente o adecuadamente el derecho de sufragio, cuáles considera que sean los factores que determinan la insuficiente protección al derecho de sufragio?.

Insuficiencia de las leyes penales

Deficiencia en la forma como el Estado

enfrenta la protección del derecho de sufragio

Los dos anteriores

Ninguno de los anteriores

Que opina al respecto.....

.....

.....

.....

.....

3. ¿ Si Ud. opina que existe una inadecuada protección del derecho de sufragio, considera que ello causa como efecto ?:

Daño al derecho del elector

Daño al sistema democrático

Las dos anteriores

Ninguna de las anteriores

Que opina al respecto.....

.....

.....

.....

.....

4. ¿ Considera Ud. que la insuficiente protección penal del derecho de sufragio se debe a:

Falta de decisión de los legisladores, de sancionar adecuadamente, los actos que atentan contra el derecho de sufragio.

Falta, por parte del legislador, de suficientes conocimientos doctrinarios y de legislación comparada, sobre delitos que atentan contra el derecho de sufragio.

Intereses político partidarios de los grupos que integran el congreso.

Cultura del fraude electoral.

Todas las anteriores

Sólo algunas de las anteriores; precise.....

.....
.....

Ninguna de las anteriores

No opina

5. ¿ Considera Ud. que los actos que atentan contra el derecho de sufragio, deben tipificarse en el Código penal, en una ley especial o en un Código Electoral.

En el Código penal

En una ley especial

En un Código Electoral

Que opina al respecto.....

.....
.....

FORMATO DE RECOJO DE DATOS A NIVEL DE PROCURADURIA JNE, FISCALIA Y PODER JUDICIAL

I. IDENTIFICACION DE ACCIONES DE DENUNCIA POR PARTE DE LA PROCURADURIA DEL JNE

Expediente No.....

Denunciante.....

Denunciado.....

Agraviados.....

Acto imputado.....

Fecha de comisión.....

Lugar de comisión.....

Se denuncia.....

Acciones tomadas.....

II. DENUNCIA FISCAL

1. ¿ Se formalizó denuncia penal ?

si

se archivo

motivo.....

2. Tipificación de la conducta

.....

III. PROCESO PENAL

1. ¿ Se aperturó instrucción ?

si

no

motivo.....

No de expediente.....

Tipo de proceso.....

2. Tipificación de la conducta

.....

3. Sentencia de primera instancia

Absolutoria

Condenatoria

Fundamento.....

4. Resolución de segunda instancia

Confirma

Revoca

Fundamento.....

REALIZADO EL VACIADO DE LA INFORMACIÓN CORRESPONDIENTE A LAS ENTREVISTAS REALIZADAS A MIEMBROS DEL JURADO NACIONAL DE ELECCIONES, MAGISTRADOS Y ESPECIALISTAS, SE HA LLEGADO A LAS SIGUIENTES CONCLUSIONES:

UNIVERSO: 30 ENTREVISTADOS

TÉCNICA: CUESTIONARIO ABIERTO

1. Con respecto a la forma como ejercen sus derechos políticos los ciudadanos en el Perú, los entrevistados se pronunciaron de la siguiente manera:

55 % ... Por decisión propia
41 % ... Por temor a la multa
4 % ... Por que acata disposiciones
de su partido

2. Con respecto a si los ciudadanos están debidamente informados de sus derechos electorales y/o políticos, los entrevistados se pronunciaron de la siguiente manera:

29 % ... Si lo esta
4 % ... No lo esta

67 % ... No suficientemente
informado

3. Con respecto a si el derecho de sufragio se encuentra debidamente garantizado en el sistema normativo penal vigente, los entrevistados se pronunciaron de la siguiente manera:

53 % ... Si se encuentra debidamente
garantizado

47 % ... No se encuentra suficientemente
garantizado

4. Con respecto a cuáles serían los factores que determinan la insuficiente protección al derecho de sufragio, los entrevistados se pronunciaron de la siguiente manera:

29 % ... Insuficiencia de la normatividad
penal

71 % ... Deficiencia del diseño político
criminal

5. Con respecto al efecto que causaría una inadecuada protección del derecho de sufragio, los entrevistados se pronunciaron de la siguiente manera:

47 % ... Daño al derecho del elector

53 % ... Daño al sistema democrático

6. Con respecto a las causas que determinarían la insuficiente protección normativo penal del derecho de sufragio, los entrevistados se pronunciaron de la siguiente manera:

16 % ... Falta de decisión de los legisladores,
de criminalizar suficientemente, los
actos que atentan contra el derecho
de sufragio.

71 % ... Falta, por parte del legislador, de
suficientes conocimientos doctrinarios
y de legislación comparada, sobre delitos
que atentan contra el derecho de sufragio.

8% ... Intereses político partidarios de los grupos
que integran el congreso.

5% ... Cultura del fraude electoral.

7. Con respecto a si los actos que atentan contra el derecho de sufragio, deben tipificarse en el Código penal, en una norma especial o en un Código Electoral, los entrevistados se pronunciaron de la siguiente manera:

57 % ... En el Código penal

43 % ... En un Código Electoral

REALIZADO EL VACIADO DE LA INFORMACIÓN CORRESPONDIENTE A LAS ENTREVISTAS REALIZADAS A CIUDADANOS ELECTORES, SE HA LLEGADO A LAS SIGUIENTES CONCLUSIONES:

UNIVERSO: 800 ENTREVISTAS REALIZADAS ENTRE LOS DISTRITOS DE SAN JUAN DE MIRAFLORES, VILLA EL SALVADOR, MIRAFLORES, LINCE, LA MOLINA, SURCO, SAN BORJA Y BREÑA.

ENTREVISTADOS: Ciudadanos de 18 a 60 años de edad, entre profesionales, técnicos, amas de casa, trabajadores y estudiantes universitarios.

TÉCNICA: ENCUESTA MEDIANTE CUESTIONARIO MIXTO

1. Con respecto a cómo ejerce su derecho al libre sufragio, los encuestados se pronunciaron de la siguiente manera:

- 80 % ... Por decisión propia
- 16 % ... Por temor a la multa
- 4 % ... No ejerce su derecho al sufragio

2. Con respecto a si están debidamente informados de sus derechos electorales, los encuestados se pronunciaron de la siguiente manera:

31 % ... Si

11 % ... No

58 % ... No completamente informado

3. Con respecto a si el derecho de sufragio se encuentra debidamente garantizado o protegido por las leyes penales en nuestro país, los encuestados se pronunciaron de la siguiente manera:

16 % ... Si se encuentra suficientemente
garantizado

72 % ... No se encuentra suficientemente
garantizado

12 % ... No sabe, no opina

4. Con respecto a los factores que determinarían la insuficiente protección al derecho de sufragio, los encuestados se pronunciaron de la siguiente manera:

12 % ... Insuficiencia de las leyes penales

83 % ... Deficiencia en la forma como el Estado
enfrenta la protección del derecho de
sufragio

5 % ... No sabe, no opina

5. Con respecto al efecto que causaría una inadecuada protección del derecho de sufragio, los encuestados se pronunciaron de la siguiente manera:

67 % ... Daño al derecho del elector

29 % ... Daño al sistema democrático

4 % ... No sabe, no opina

6. Con respecto a las causas que determinarían la insuficiente protección penal del derecho de sufragio, los encuestados se pronunciaron de la siguiente manera:

28 % ... Falta de decisión de los legisladores,
de sancionar adecuadamente, los
actos que atentan contra el derecho
de sufragio.

17 % ... Falta, por parte del legislador, de
suficientes conocimientos doctrinarios
y de legislación comparada, sobre
delitos que atentan contra el derecho
de sufragio.

46 % ... Intereses político partidarios de los
grupos que integran el congreso.

6 % ... Cultura del fraude electoral.

3 % ... No sabe, no opina

7. Con respecto a si consideran que los actos que atentan contra el derecho de sufragio, deben tipificarse en el Código penal, en una ley especial o en un Código Electoral.

11 % ... En el Código penal

27 % ... En una ley especial

59 % ... En un Código Electoral

3 % ... No sabe, no opina

BIBLIOGRAFIA

BACIGALUPO, Enrique...."Estudios Sobre la Parte Especial del Derecho Penal", Ediciones Akal S.A., Madrid-España 1994.

BASADRE, Jorge..."Elecciones y Centralismo en el Perú", Centro de Investigación de la Universidad del Pacífico, Lima 1980.

BERTOLI, Alberto P...."Delitos Electorales", Enciclopedia Jurídica Omeba, Ed. Bibliográfica Argentina, Buenos Aires, 1957, T. IV.

CARRERAS DE...Francesc y VALLES, Josep M..."Las Elecciones: Introducción a los Sistemas Electorales", Edi. Blume, Barcelona 1977.

CONCHA, José Vicente..."Tratado de Derecho Penal y Comentarios al Código Penal Colombiano", 4ta Edición, Sociedad de Ediciones Literarias y Artísticas, Bogotá 1962.

CRISSIUMA DE FIGUEIREDO, César..."Denuncia En Crime Eleitoral-Elemento que Debe Conter, Justitia, Vol.XIV, No 23-24, Sao Paulo 1953.

CHIRINOS SOTO, Enrique..." La nueva Constitución y los Partidos", Centro Documentación Andina, Lima, Perú 1984.

FERNÁNDEZ CARRASQUILLA, Juan..."Derecho Penal Fundamental, Teoría General del Delito", Editorial Temis S.A., Santa Fe de Bogotá, Colombia 1995.

FERNANDEZ DOBLADO, Luis..."La Tutela Penal del Sufragio", en: Criminalía, año 39, Nros. 7 y 8, Caracas Venezuela, 1973.

FERREIRA, Waldemar..."A Corrupcao Eleitoral Pelo Suborno", Revista de la Facultad de Direito, Volumen LII, Sao Paulo, 1957.

FONTAN BALESTRA, Carlos..."Derecho Penal Parte Especial", Abeledo-Perrot, Buenos Aires 1994.

FRISOLI, O. "Osservazioni In Materia Di Reati Elettorali", Revista Penale, Tomo II, Roma 1953.

GIMENEZ FERNANDEZ, Manuel...."Estudios de Derecho Electoral Contemporáneo". 2da Ed., Sevilla-España, 1977.

GOMEZ, Eusebio...."Tratado de Derecho Penal", T. V, Compañía Argentina de Editores, Buenos Aires-Argentina 1941.

GONZALEZ ARZAC, Alberto Ricardo...."Protección de la Soberanía Popular en el Código Penal Argentino", en: Anales de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales, T. XIX, La Plata-Argentina, 1960.

GONZALEZ LLACA, Edmundo..."Teoría y Práctica de la Propaganda", Editorial Grijalbo, 1981.

HERNANDEZ BECERRA, Augusto..."El Derecho Electoral y su Autonomía", en: "Proceso Electoral y Regímenes Políticos", Memoria del II Curso Anual Interamericano de Elecciones, Instituto Interamericano de Derechos Humanos, Centro de Asesoría y Promoción Electoral CAPEL, Costa Rica 1989.

HERNANDEZ CANELO, Walter Miguel..."Legislación Electoral Peruana", impresión: Organización Estados Americanos (OEA), Lima 1998.

HUGO VIZCARDO, Silfredo Jorge..."Procedimiento Registral Electoral y Delitos Contra la Inscripción Electoral", Edición Colección de Manuales Hermes, Lima 1990.

IRURETA GOYENA, José..."El Delito de Hurto", Talleres Gráficas Barreiro; Montevideo 1913.

LANDA ARROYO, César Rodrigo..."Propaganda Electoral", en Diccionario Electoral, Serie Elecciones y Democracia, Centro Interamericano de Asesoría y Promoción Electoral (CAPEL), Costa Rica 1989,

MUÑOZ CONDE, Francisco..."Derecho Penal: Parte Especial", Undécima Edición, Edit. Tirant lo Blanch, Valencia-España, 1996.

PEÑA CABRERA, Raúl..."Tratado de Derecho Penal: Parte Especial II-A; Delitos Contra el Patrimonio", Ediciones Jurídicas, Lima-Perú 1995.

PEREZ, Luis. C...."Derecho Penal Colombiano; Parte Especial", Volumen II, Editorial Temis, Bogotá, 1957.

QUINTANO RIPOLLES, Antonio..."El Delito Político y la Política", en: Revista de Derecho Penal, Año VII, 1er Trimestre, Buenos Aires 1951.

QUINTERO OLIVARES, Gonzalo..."Comentarios a la Parte Especial del Derecho Penal" Aranzadi Editorial, Pamplona – España 1996.

RODRÍGUEZ ACOSTA, José..."La Represión del Fraude Electoral", Repertorio Judicial, Año XV, La Habana 1939.

ROY FREYRE, Luis E."Fundamentos de la Ley Antiterrorista", Revista del Foro, Año LXVIII, enero-junio, Lima Perú 1981.

ROY FREYRE, Luis E...."Derecho Penal Peruano", Tomo III, Parte Especial, "Delitos Contra el Patrimonio", Instituto Peruano de Ciencias Penales, Lima-Perú, 1983.

ROXIN, Claus..."Culpabilidad y prevención en Derecho Penal", Reus S.A. 1980.

ROXIN, Claus..."Derecho Penal Parte General, Tomo I, Fundamentos de la Estructura de la Teoría del Delito", Editorial Civitas S.A. Madrid 1997.

RUBIO CORREA, Marcial y BERNALES B. Enrique..."Perú: Constitución y Sociedad Política", Desco Centro de Estudios y Promoción del Desarrollo, Lima 1981.

TIEDEMAN, Klaus..."Temas de Derecho Penal Económico y Ambiental", Idemsa, Lima 1999.

URQUIZO OLAECHEA, José..."El Principio de Legalidad", Gráfica Horizonte S.A, Lima 2000.

VILLA STEIN, Javier..."Derecho Penal Parte Especial I-B (Delitos contra el honor la familia y la libertad), Editorial San Marcos, Lima 1998.

VIVES ANTON, T.S...."Derecho Penal; Parte Especial, Tirant lo Blanch, Valencia-España 1990.

ZUGALDIA ESPINAR, José Miguel..."Fundamentos de Derecho Penal, Parte General", Tirant lo Blanch, Valencia 1993.

